



INDICE

AYUSO, SOBRE SÁNCHEZ: “HA DECIDIDO DESTROZAR LA DEMOCRACIA, VAMOS CAMINO DE LA DICTADURA”

AYUSO CONVIERTE LA PUERTA DEL SOL EN UNA IGLESIA: “PROPONGO UN PACTO POR NAVIDAD PARA RECUPERAR LA CULTURA RELIGIOSA”

YA ES NAVIDAD EN LA PUERTA DEL SOL DE AYUSO

AYUSO TIRA DE RECURSOS PÚBLICOS PARA HACER CAMPAÑA CONTRA PEDRO SÁNCHEZ

UN TESTIGO INCÓMODO PARA AYUSO, DOS MESES ANTES DE LAS ELECCIONES

UN JUZGADO DE MADRID LLAMA A DECLARAR A REYERO Y MUR COMO TESTIGOS EN UNA CAUSA POR LA MUERTE DE TRES RESIDENTES

LAS MENTIRAS Y OMISIONES DE LA FISCAL SUPERIOR DE MADRID QUE NO INVESTIGA LAS MUERTES EN RESIDENCIAS

EL CONSEJERO DE JUSTICIA DE AYUSO RECUA Y ADMITE QUE NO HUBO 15.000 DERIVACIONES EN LO PEOR DE LA PANDEMIA

AYUSO OCULTÓ CASI UN AÑO A LA CÁMARA DE CUENTAS DATOS DE UN CONTRATO MILLONARIO QUE ACABÓ BAJO INVESTIGACIÓN

AYUSO ADJUDICÓ EL TRANSPORTE DE SANITARIOS A TRES EMPRESAS VTC PRESIDIDAS POR LA MISMA PERSONA

AYUSO REGALA DOS PARCELAS PÚBLICAS VALORADAS EN 11 MILLONES DE EUROS PARA CONSTRUIR COLEGIOS CONCERTADOS: "SU LIBERTAD ES UN DESPROPÓSITO"

AYUSO CONSTRUIRÁ SEIS QUIRÓFANOS EN EL ZENDAL DOS AÑOS DESPUÉS DE SU INAUGURACIÓN

LA CRISIS DEL ZENDAL, EL HOSPITAL MILAGRO DE AYUSO: 177 PROFESIONALES PARA ATENDER A 49 PACIENTES

LA CRUZ DEL VALLE DE LOS CAÍDOS: UNA “FANTASÍA” DE AYUSO QUE EXCEDE SUS COMPETENCIAS

EL GOBIERNO RECHAZA DECLARAR EL VALLE DE LOS CAÍDOS BIEN DE INTERÉS CULTURAL: “NO TIENE SUFICIENTE RELEVANCIA”

AYUSO SE ABRE A BLINDAR EL VALLE DE LOS CAÍDOS FRENTE A LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA, COMO RECLAMA VOX

AYUSO CONCEDE A VOX LA PROTECCIÓN DE LA CRUZ DE LOS CAÍDOS EN PLENO DEBATE PRESUPUESTARIO

VARAPALO JUDICIAL AL PLAN DE AYUSO QUE PERMITÍA CONVERTIR REFUGIOS DE MONTAÑA EN NEGOCIOS EN LA SIERRA DE GUADARRAMA

EL GOBIERNO DE AYUSO PAGA MEDIO MILLÓN A TELEMADRID POR PUBLICITAR SUS POLÉMICAS BECAS Y LA SEMANA DE LA HISPANIDAD

LA TELEMADRID DE AYUSO: CÓMO LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA NINGUNEÓ LA MANIFESTACIÓN POR LA SANIDAD

AYUSO INTENTA FRENAR LA HUELGA SANITARIA CON 2.000 CONTRATOS DE INTERINO, PROMESAS YA INCUMPLIDAS Y MEDIDAS IMPUESTAS POR EUROPA

AYUSO SE CIERRA EN BANDA A AMPLIAR EL PRESUPUESTO SANITARIO PESE A LAS PROMESAS REALIZADAS A LOS MÉDICOS EN HUELGA

RADIOGRAFÍA DEL CAOS DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE MADRID: HASTA 12 DÍAS PARA VER AL MÉDICO Y 13 PARA LA ENFERMERA EN 2021

AYUSO ENCAJA EL PRIMER GOLPE

DÍAZ AYUSO DISPARA UN 42% EL NÚMERO DE MADRILEÑOS EN LISTA DE ESPERA SANITARIA

AYUSO FRENTE A LA MAREA BLANCA DE LAS PROTESTAS SANITARIAS: “MANIFESTACIONES, SÍ. BOICOTS, NO”

QUÉ OCURRE EN LA SANIDAD MADRILEÑA: CAOS EN URGENCIAS, DOS HUELGAS DE MÉDICOS, DIMISIONES Y UNA PROTESTA MASIVA

AYUSO RENUNCIA A 700 MILLONES DE EUROS ANUALES PARA LAS ARCAS PÚBLICAS CON SEIS REBAJAS FISCALES EN DOS AÑOS

AYUSO, LA BROMA INFINITA

“ULTRAIZQUIERDA”, “AGITACIÓN” Y “JUEGO SUCIO”: AYUSO ACTIVA TODOS LOS RESORTES ANTE EL ÉXITO DE LA PROTESTA POR LA SANIDAD PÚBLICA

AYUSO DESACREDITA LA MANIFESTACIÓN POR LA SANIDAD E INSISTE EN QUE SÁNCHEZ PLANEA UN GOLPE DE ESTADO

FEIJÓO PIDE "MODERACIÓN" FRENTE A LOS ATAQUES DE AYUSO A SÁNCHEZ: "NO ESTAMOS AQUÍ PARA INSULTARLE"

AYUSO ACUSA A LA IZQUIERDA DE “INCENDIAR” MADRID Y DE USAR LA SANIDAD PARA LLEGAR AL PODER “CON JUEGO SUCIO”

CIENTOS DE MILES DE PERSONAS TOMAN LAS CALLES DE MADRID FRENTE AL MALTRATO DE AYUSO A LA SANIDAD PÚBLICA

MADRID DESPIERTA A FAVOR DE LA SANIDAD PÚBLICA CON CIENTOS DE MILES DE VOCES: “SIENTO INDIGNACIÓN, NOS LO ESTÁN QUITANDO TODO”

AYUSO DESAFÍA LA LEY EDUCATIVA Y CONVOCA DOS CONCURSOS PARA CONSTRUIR COLEGIOS CONCERTADOS EN SUELO PÚBLICO GRATUITO

LOS SINDICATOS RECHAZAN EL QUINTO PLAN DE AYUSO PARA LAS URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y MANTIENEN LA HUELGA INDEFINIDA

MADRID CIFRA EN MÁS DE 1.000 MILLONES LA DEUDA QUE ARRASTRA CON LOS HOSPITALES PRIVADOS

AYUSO DICE QUE LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO FAVORECE EL COMUNISMO Y QUE LA IZQUIERDA VA “CONTRA LA EVIDENCIA CIENTÍFICA”

AYUSO DICE QUE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA VA CONTRA LA EVIDENCIA CIENTÍFICA Y TIENE DETRÁS AL “COMUNISMO”

AYUSO REDUCE EL CAOS DE LA SANIDAD MADRILEÑA Y LAS PROTESTAS DE LOS PROFESIONALES A QUE “FALTAN 34 MÉDICOS”

COMUNICADO CONJUNTO CONTRA AYUSO: TODAS LAS ASOCIACIONES MÉDICAS DESMIENTEN QUE LA HUELGA SEA POLÍTICA

AYUSO EVITA ASUMIR RESPONSABILIDADES POR LA HUELGA DE MÉDICOS Y CULPA A MÓNICA GARCÍA: “QUIERE REVENTAR LA SANIDAD MADRILEÑA”

MADRID CONCENTRA LA MITAD DE LAS REBAJAS FISCALES DE LAS COMUNIDADES EN PLENA CRISIS POR LA SANIDAD

EL GOBIERNO DE AYUSO DEJARÁ DE INGRESAR 92 MILLONES MÁS POR BAJADAS DE IMPUESTOS EN PLENO CONFLICTO POR LA SANIDAD PÚBLICA

AYUSO CESA AL NÚMERO DOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN PLENA HUELGA POR LAS URGENCIAS DE MADRID

AYUSO RECTIFICA EL PLAN DE URGENCIAS POR TERCERA VEZ: AHORA PLANTEA MÉDICOS POR VIDEOCONFERENCIA

AYUSO AFIRMA QUE SÁNCHEZ PREPARA UN GOLPE CONTRA EL REY PARA INSTAURAR LA REPÚBLICA

EL PSOE INSTA A FEIJÓO A QUE DESAUTORICE A AYUSO TRAS COMPARAR AL GOBIERNO CON EL RÉGIMEN DEL NICARAGÜENSE ORTEGA

CLAVES PARA UNA HUELGA CONTRA EL PLAN DE REAPERTURA DE LAS URGENCIAS DE LOS CENTROS DE SALUD DE MADRID

AYUSO SE ENFRENTA SOLA AL DESGASTE POR LA CRISIS DE LA SANIDAD EN MADRID

AYUSO, TRAS LAS DIMISIONES EN LA ATENCIÓN PRIMARIA: “NOSOTROS LEVANTAMOS HOSPITALES MIENTRAS OTROS LOS BOICOTEAN”

DIMITE EN BLOQUE LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE LOS CENTROS DE SALUD DEL SUDESTE DE MADRID POR EL CAOS GENERADO EN LAS URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS

LA IDEA DE MADRID PARA CAMBIAR LA SELECTIVIDAD QUE HA ACABADO POR NO DEFENDER NI EL EJECUTIVO REGIONAL

AYUSO ARRASTRA A LAS COMUNIDADES DEL PP A UNA GUERRA POR LA NUEVA SELECTIVIDAD

AYUSO PONE EN LA DIANA A LOS SANITARIOS POR EL CAOS EN LA REAPERTURA DE LAS URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS DE MADRID

AYUSO DISFRUTA DE UNOS DÍAS DE DESCONEXIÓN EN CANTABRIA



[www.losgenov](http://www.losgenov.com)

AYUSO, SOBRE SÁNCHEZ: “HA DECIDIDO DESTROZAR LA DEMOCRACIA, VAMOS CAMINO DE LA DICTADURA”

La mandataria autonómica carga contra el presidente del Gobierno tras los nombramientos del Constitucional y la expulsión de una diputada de Vox de la tribuna del Congreso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este miércoles contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una durísima intervención en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico. La líder conservadora, que ha hecho un sello de identidad de su confrontación con el secretario general de los socialistas, ha afirmado que España va “camino de la dictadura”, “sometida por un tirano que pone en peligro el estado de derecho”, unas afirmaciones que la presidenta autonómica ha sustentado sobre la polémica generada por nombrar a dos ex altos cargos para el Tribunal Constitucional (entre ellos el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo); por la aplicación de la ley del solo sí es sí; o por reformar el delito de sedición y abrirse a hacer lo mismo con el de malversación.

“Entre el nombramiento de los cargos políticos en el Tribunal Constitucional, la abolición del delito de Secesión y la arbitrariedad de la expulsión de una diputada en el Congreso, el partido socialista ha decidido destrozar la democracia”, ha dicho Ayuso, que ha justificado su intervención con la polémica surgida el martes en el Congreso, donde una diputada de Vox fue expulsada de la tribuna por emplear el término “filoetarra”, lo que derivó en que su grupo parlamentaria abandonara el hemiciclo. “Vamos camino de una dictadura, sometidos por un tirano que pone en peligro el Estado de Derecho”, ha seguido la líder conservadora. “Pedro Sánchez cree que la Ley, las instituciones y el Código Penal están a su servicio. Él decide qué delitos quedan impunes y qué delincuentes compañeros, exonerados. Él decide cómo han de organizarse los jueces. Adueñándose del Tribunal Constitucional y, por tanto, amordazando a la propia Constitución”.

Junto a Ayuso han comparecido el número dos de su Gobierno, Enrique Ossorio, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero. Ninguno ha parecido sorprendido por esas palabras. Tampoco por las posteriores. Hace tiempo que los dirigentes de la Comunidad de Madrid tienen asumido que la confrontación con el Gobierno de España es parte integral de su estrategia, y más ahora, cuando llegan las elecciones municipales y autonómicas de 2023.

“Es obligación de todos los españoles decir no al autoritarismo del Partido Socialista y la ultrazquierda”, ha dicho Ayuso, que ha llamado a la movilización ciudadana. “Expulsar del Congreso a una diputada que define como ‘filoetarra’ a un partido dirigido por miembros que han pertenecido a ETA, que incluso han sido condenados por ello, inscribe a nuestra democracia en la lista de los países que no respetan ni la libertad, ni los derechos humanos”, ha argumentado. “Que violan el Estado de Derecho”.

Desde las filas socialistas, ha respondido Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso y miembro de la dirección federal de los socialistas, informa José Marcos. “Una vez más la señora Ayuso ha vuelto a hacer gala de lo que verdaderamente es: la vocera del peor populismo en este país. Del que arremete contra todo y contra todos los que no le rinden pleitesía. Del que sube a la tribuna exclusivamente para insultar y descalificar a aquellos que no comulgan con lo que ella pretende. Del que no arregla ningún problema en su comunidad, ahí tenemos el destrozo que está haciendo en la sanidad pública. Solo utiliza su poder para generar enfrentamiento, división y confrontación”, ha dicho López, que se ha mostrado preocupado, porque Ayuso hace “llamamientos permanentes al enfrentamiento y la confrontación social”. Y ha abundado: “Es un populismo que no tiene ningún decoro, ninguna educación y ni un mínimo de cultura democrática porque no sabe lo que significa y lo que es la democracia”. Finalmente, López ha reclamado a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, que desdiga a su compañera de filas: “Una presidenta así no puede seguir ni un minuto más al frente de una comunidad como Madrid. Si el señor Feijóo no rectifica lo que está diciendo y haciendo Ayuso volverá a demostrar que es cómplice de todo esto y que ni manda, ni decide absolutamente nada en el PP. Ya está bien de ayusadas en este país”.

<https://elpais.com/espana/madrid/2022-11-30/ayuso-sobre-sanchez-ha-decidió-destrozar-la-democracia-vamos-camino-de-la-dictadura.html>

AYUSO CONVIERTE LA PUERTA DEL SOL EN UNA IGLESIA: “PROPONGO UN PACTO POR NAVIDAD PARA RECUPERAR LA CULTURA RELIGIOSA”

La presidenta madrileña ha pronunciado un discurso repleto de referencias católicas para felicitar las fiestas a los madrileños

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha inaugurado este martes el tradicional Belén de la Real Casa de Correos, la sede del Gobierno regional, con un discurso alejado de la aconfesionalidad del Estado que recoge la Constitución. Con tono y lenguaje eclesiásticos, la presidenta madrileña se ha dirigido a los ciudadanos para pedir un “pacto por la Navidad” que recupere la “cultura religiosa” de la que “viene” el pueblo español y “necesita” para “saber a dónde ir”, según ha aventurado.

Ayuso ha pronunciado un discurso de unos seis minutos que habría podido escribir cualquier sacerdote madrileño para la eucaristía de este domingo. No solo por el vocabulario teológico y alguna referencia a Juan Pablo II, también por el tono calmado y un ligero eco en la sala más propios de un escenario con olor a incienso, piedra fría y madera vieja.

“La palabra ‘adviento’ significa venida y, con la emoción que produce siempre la anticipación de la llegada de alguien querido, preparamos la celebración de la Pascua de Navidad, el paso de dios por la tierra, que nace y se hace hombre como nosotros, disfruta y muere y, según la creencia cristiana, resucita para llevar la salvación a todos los hombres”, ha comenzado la dirigente ‘popular’.

Las palabras de la presidenta, que representa a más de 6,5 millones de madrileños, no todos necesariamente cristianos apostólicos, las habría abrazado, por qué no, el cardenal Antonio María Rouco Varela: “Si con la Epifanía, la popular celebración de los Reyes Magos, el cristianismo se hace católico, esto es, universal, y el hombre celebra por primera vez que dios llega a todos los pueblos y razas; con el propio Cristo, dios se encarna como hombre. Dios se incorpora a la historia humana, este barco de siglos en el que vamos todos”.

Quizás impelida por esta inspiración católica, Ayuso se ha olvidado de sus habituales referencias dialécticas (los boicots de la izquierda, el avance del comunismo, Pedro Sánchez) y ha optado por sustantivos sacados de los evangelios (caridad, piedad, perdón, tolerancia). Así, ha ofrecido un pacto para estas fiestas: “Que nos unamos en volver a ser niños en el mejor sentido, para recuperar la cultura religiosa que es inseparable de la cultura con mayúsculas de la que venimos y que necesitamos para saber dónde ir”.

No obstante, ha incorporado alguna crítica. “Los que sufren y los que ayudan dejan en evidencia las actitudes meramente utilitaristas [de las fiestas navideñas, se entiende], que hacen que nada quede en el corazón y lo importante nos deje insensibles, indiferentes”, ha dicho, y ha continuado con la reprimenda velada, habitual por otro lado en los sermones dominicales de los sacerdotes católicos: “La propia historia de España, desde la Hispania romana y desde la monarquía de los visigodos, no se explica sin su raíz cristiana. ¿Nos lo vamos a negar? ¿Qué gana alguien con esa falsificación?”.

A continuación, el sacerdote reconvertido en ghost writer se ha gustado con una cita del fallecido pontífice polaco. “Juan Pablo II se preguntaba si se puede apartar a Cristo de la historia de cada nación, de la historia europea. Solo en él, seguía diciendo el Papa, todas las naciones y la humanidad entera pueden cruzar el umbral de la esperanza”, ha dicho Ayuso, ante la incredulidad de muchos que se preguntan si la Iglesia se ha renovado tanto con Francisco como para que una dirigente política pueda brindar una homilía.

Ayuso ha incluido alguna referencia a los “no creyentes” (solo un 22% de los españoles afirma acudir regularmente a misa), aunque solo para aclararles que pese a esa condición, la “herencia” cristiana española prevalece sobre sus credos. “El niño dios nace en Belén un año más y el mensaje es el de la paz en la Tierra. La familia se declara sagrada; la promesa es la salvación, la vida eterna; y el mandamiento único, el amor”, ha dicho, para recordar que esas palabras

impactaron, en su momento, a “quienes las oían”. Quizá también a quienes las escuchan ahora de su boca, aunque no por los mismos motivos. “Feliz Navidad”, ha concluido antes de añadir que “todos son bienvenidos” –como dicen los dirigentes de Qatar a los aficionados del Mundial– a celebrar las fiestas en Madrid.

https://www.eldiario.es/rastreador/ayuso-convierte-puerta-sol-iglesia-propongo-pacto-navidad-recuperar-cultura-religiosa_132_9754938.html

YA ES NAVIDAD EN LA PUERTA DEL SOL DE AYUSO

La Comunidad baraja ampliar las reuniones a más seis personas y un protocolo de salida y entrada de mayores en residencias. El Isabel Zendal se inaugurará el 1 de diciembre

Isabel Díaz Ayuso se fijó una vez en un frigorífico. El electrodoméstico estaba hasta arriba de imanes de recuerdo de Israel. La presidenta de la Comunidad de Madrid se encontraba de viaje. Salió a dar un paseo y se quedó petrificada al ver en una nevera un soldado muy musculoso. “Me quería quedar con él”, dijo. El imán del militar, según le contaron después, era estadounidense. “Tuvo una vida muy difícil, durísima”. Ayuso, como periodista que es, preguntó curiosa y se interesó más por su historia. “El soldado tenía un lema: Si la vida es fácil es que no la estás viviendo bien”. La presidenta contó esta historia a unos muchachos del PP el pasado verano, durante los cursos de la Universidad Complutense en El Escorial. Les puso este ejemplo como metáfora de lo que ha vivido en estos meses al frente de la región. “Solo me falta una invasión alienígena”, ironizó ante las risas de los jóvenes ataviados con pulseras de España. “Aquello que es duro es lo que da más sentido a todo. Pase lo que pase, jamás podré estar más orgullosa de haber sido presidenta de Madrid durante estos meses”. Hoy, según su círculo más cercano, está mejor que nunca. La segunda ola está encauzada. O dicho de otra manera: ya es Navidad en la Puerta del Sol.

Es más, unos operarios instalaban este lunes debajo del reloj de las uvas una cabaña gigante de madera:

— Perdona, ¿esto qué es?

Un trabajador llamó a otro compañero ante la pregunta del millón. El tipo no tenía muy claro qué estaba armando.

— Esto es el portal de Belén, que este año lo ponemos aquí por el Covid— intercedió el otro joven.

Será la primera vez que salga del edificio de la Real Casa de Correos a la calle. Fuentes regionales confirmaron después que la Comunidad prepara ya el operativo para la Navidad. “El portal navideño se inaugurará en 10 días”, apuntan. Si todo va según lo previsto, en 15 días Ayuso inaugurará el portal de Belén y el nuevo hospital de pandemias Isabel Zendal (este martes se ha conocido que la fecha de la inauguración será el martes 1 de diciembre) La presidenta tiene el viento de cara. Los datos le dan la razón. La euforia contenida se ha instalado en el Ejecutivo. Ayuso ha pasado de estar cuestionada en Génova a subirse este domingo en un coche de copiloto con Pablo Casado por las calles de Madrid. Los dos protestaron por la nueva ley educativa de Pedro Sánchez. Los dos se llevaron los flashes y las portadas, pese a que en el asiento de atrás también estaba el alcalde y portavoz del partido, José Luis Martínez-Almeida.

Ayuso ha doblegado la curva en dos meses. Sus consejeros sonríen más que nunca. Hasta Ciudadanos, siempre díscolo con el plan sanitario trazado, reconoce que las medidas funcionan. Este lunes fue uno de esos de ruta mediática. Había que vender el triunfo, pero sin triunfalismos.

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, pasó a primera hora por los micrófonos de Onda Madrid. “Hemos tenido el sábado con menos ingresos de las últimas ocho semanas”, observó. “Los contagios continúan descendiendo. La incidencia acumulada a 14 días también”. Una hora después, saludó a Ana Rosa, en Telecinco. Aquí habló de la posibilidad de establecer “excepciones” a las limitaciones sobre el número máximo de personas en las reuniones

familiares. Es decir, ampliar a más de seis las cenas en casa, siempre y cuando continúe el descenso en la curva de contagios. En este nuevo plan, que según fuentes de la región se presentará en unas semanas, también se incluiría un protocolo de salida y entrada de mayores que viven en residencias. El objetivo ahora es situar la tasa de contagios por cada 100.000 habitantes en menos de 200. Este lunes estaba en 274. Las medidas de restricción en las Zonas Básicas de Salud se aplican desde el pasado viernes en 400.

El vicepresidente, Ignacio Aguado, siguió la misma línea en otra entrevista en Radio Nacional: “No vamos tan bien como nos gustaría”, dijo. “Pero queremos blindar la tendencia descendente de la curva”. Aguado fijó como fecha probable para los anuncios de las nuevas medidas el 14 de diciembre, cuando Madrid se reabra tras su cierre perimetral del 4 al 13. “Espero que podamos levantar parcialmente algunas restricciones para poder vernos con nuestras familias y que los comercios tengan un porcentaje de facturación para salvar la campaña de Navidad”.

La presidenta Ayuso se encontraba en Rascafría, al noroeste de la región. Aquí presentó el plan de inclemencias invernales para este año. “Hemos pasado una época complicadísima”, observó. “En Madrid la vida y la libertad siguen adelante. Estamos consiguiendo que esta pesadilla termine mientras llega la vacuna”. Tras el discurso, matizó las palabras de su vicepresidente Aguado. “El plan no está cerrado”, dijo. “Es la consejería de Sanidad quien decide. Nos hemos puesto en sus manos. El propósito es vivir con normalidad. Queremos que los ciudadanos disfruten pero con precauciones. En Madrid, conjugar la vida, la salud y la economía es posible. Vamos a intentar que sea una Navidad normal”.

<https://elpais.com/espana/madrid/2022-11-30/ayuso-sobre-sanchez-ha-decidiendo-destrozar-la-democracia-vamos-camino-de-la-dictadura.html>

AYUSO TIRA DE RECURSOS PÚBLICOS PARA HACER CAMPAÑA CONTRA PEDRO SÁNCHEZ

La Comunidad de Madrid lleva desde junio de 2021 enviando cartas a cónyuges e hijos de fallecidos informándoles de que solo pagan el 1 por ciento del impuesto de Sucesiones gracias a las “distintas bonificaciones” que han aprobado. La presidenta, en realidad, saca pecho por una medida que aprobó Ruiz Gallardón en 2006. Desde la Consejería de Hacienda se reconoce a Crónica Libre que el objetivo es “informar a los contribuyentes de lo que supondría que el gobierno de Pedro Sánchez eliminase dicha bonificación”. Pero la ministra Montero dijo hace meses que no se plantea tocar la fiscalidad autonómica.

“Con fecha 27/09/2022 presentó declaración tributaria correspondiente sobre Sucesiones y Donaciones, declarando un importe a ingresar de 45´40 euros (...) En el caso de que la Comunidad de Madrid no hubiera aprobado beneficios fiscales usted hubiera tenido que pagar 4.540´39 euros”. Es un extracto de la carta que Nuria recibió hace apenas unos días en su casa del centro de Madrid. “Se te ha muerto tu madre, pero lo que te has ahorrado en impuestos, ni elegancia tienen”, explotó en redes al abrir el sobre con membrete de la Comunidad de Madrid.

Desde junio de 2021, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso manda cartas similares a estas a todos los que presenten la documentación necesaria para pagar los impuestos por recibir herencias o donaciones. En ellas, se deja patente que las madrileñas y los madrileños tributan un 1 por ciento por estos conceptos. “La Comunidad de Madrid, en el ejercicio de sus competencias normativas, ha aprobado distintas bonificaciones con el objetivo de beneficiar a los ciudadanos”, continúa la carta con una redacción que podría llevar al equívoco. Podría parecer que el ahorro es un éxito de Ayuso, pero lo cierto es que la Comunidad de Madrid bonifica al 99 por ciento la cuota tributaria a cónyuges e hijos herederos desde el año 2006. Fue el gobierno de Alberto Ruiz Gallardón quien aprobó esta rebaja fiscal.

¿Cuál es el motivo por el que la presidenta madrileña se apropie de un logro de sus predecesores 16 años después? “El objetivo es informar a los contribuyentes madrileños del ahorro que obtienen con la bonificación que se aplica en la Comunidad de Madrid y lo que supondría que el gobierno de Pedro Sánchez eliminase dicha bonificación, como ha anunciado que quiere hacer invadiendo la autonomía fiscal de las Comunidades Autónomas”, contestan a Crónica Libre desde la Consejería de Hacienda de la CAM.

El pasado mes de septiembre, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero descartó definitivamente el proyecto de armonización fiscal con el que se pretendía evitar las diferencias entre Comunidades Autónomas en impuestos como el de sucesiones. El proyecto -del que se empezó a hablar al principio de la legislatura- ya llevaba meses en el cajón, desde que estallara la guerra de Ucrania concretamente, cuando el gobierno decidió que no se tomaría la medida ni a corto ni a medio plazo. La ministra Montero se vio obligada a hablar otra vez del tema otra vez por el creciente debate por las bajadas de impuestos en las Comunidades del Partido Popular. Y zanjó el tema asegurando que la armonización fiscal solo se podría llevar a cabo “en el contexto de la reforma de la financiación autonómica” por lo que insistió en que no se iba a hacer. La Comunidad de Madrid meses después, sin embargo, sigue utilizando recursos públicos y justificando este mailing con el que Ayuso saca pecho de que en Madrid se grabe solo un uno por ciento por heredar. Se da la circunstancia de que en Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Galicia, Extremadura, Murcia y los territorios forales del País Vasco los cónyuges e hijos también pagan importes simbólicos por el impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Carta de pésame de Ayuso

Crónica Libre ha preguntado a la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid por el coste de esta campaña. “No tenemos presupuesto asignado ya que no podemos prever el número de autoliquidaciones que se presentarán cada año”, contestan. El departamento que dirige Javier Fernández-Lasquetty no ha querido responder a otras preguntas de este medio como hasta cuándo tienen previsto mantenerla, si está previsto hacer campañas similares con otro tipo de beneficios fiscales o si tienen informes sobre cómo reciben los madrileños esta polémica carta.

“No quiero rebajas en impuestos, quiero Sanidad Pública”

“No quiero dar demasiados detalles por respeto a la memoria de mi madre y a mis hermanos”, dice Nuria a Crónica Libre, pero no oculta la indignación que sintió al abrir este polémico pésame de Ayuso. “Lo primero que pensé es en romperla, pero me pudo más la rabia que el dolor y por eso he decidido hacerla pública”. Su discurso de repulsa es un alegato en defensa de la Sanidad Pública.

“Cuando ves la Sanidad desmantelada. Cuando a mi madre le han estado ajustando la medicación en consulta telefónica durante dos años porque faltaban médicos. Cuando has visto la dedicación de los profesionales, todos y todas, cuando entró en urgencias directa a paliativos... La última estancia de mi madre en la planta de paliativos del hospital Clínico de Madrid no hubiéramos podido pagarla de nuestro bolsillo”, asegura esta filóloga, que trabaja por la alfabetización de inmigrantes y refugiados. “No quiero rebajas de impuestos, quiero Sanidad Pública y un gobierno de Madrid con dignidad”, sentencia.

Nuria tapa sus datos personales de este particular ‘pésame’ que le manda la Comunidad de Madrid con un libro de su hijo pequeño para fotografiarlo para poder ser publicado Crónica Libre. En el fondo, todo tiene un poso de humor negro, así también lo ha llegado a ver ella, como en el proceso del duelo, también hay que pasar varias etapas para asimilar esta carta. “¡Se te ha muerto tu madre, pero lo que te has ahorrado en impuestos! Recuerda a un chiste de Gila: ‘Me habrán matado al hijo, pero lo que me he reído’. Solo que esto va en serio y no tiene gracia”.

La obsesión de Ayuso

Esta polémica campaña epistolar forma parte de la agresiva política de comunicación de la política liberal del gobierno de Ayuso que consiste en hablar de ‘bajada de impuestos’ en cualquier ocasión. Repetir hasta la saciedad para que cale en la sociedad. Y el impuesto de Sucesiones y Donaciones es un claro ejemplo de ello.

La Comunidad de Madrid ha aprobado en octubre una ley que amplía hasta el 25 por ciento las bonificaciones en herencias y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos. Ayuso llevaba más de un año hablando de ello hasta que ha entrado en vigor. Desde que anunciara la medida en la campaña electoral de 2021, cualquier oportunidad Ha sido buena para volver a hablar del tema:

en un viaje a Lisboa en julio y en un acto rodeada de líderes del PP en septiembre en el que la presidenta insistió en que “Madrid será la defensora de la libertad y de España”.

Los hermanos, tíos y sobrinos que reciban una herencia en Madrid ya recogen en sus buzones la famosa carta con la que Ayuso reivindica el modelo de baja fiscalidad (y libertad) que su gobierno envía con recursos públicos. La presidenta ya lo advirtió: “Seré la peor pesadilla de quien quiera subir impuestos en Madrid”.

<https://www.cronicalibre.com/investigacion/ayuso-tira-de-recursos-publicos-para-hacer-campana-contra-pedro-sanchez/>

UN TESTIGO INCÓMODO PARA AYUSO, DOS MESES ANTES DE LAS ELECCIONES

Carlos Mur, el alto cargo que firmó los protocolos que negaron la atención a personas mayores de residencias, declarará el 23 de marzo en un juzgado de Madrid sobre el origen de los documentos

La precampaña para las elecciones de mayo en la Comunidad de Madrid, en las que Isabel Díaz Ayuso buscará su reelección, tendrá el jueves 23 de marzo señalado en rojo en el calendario. Será la primera vez que declaren en un juzgado dos cargos políticos involucrados en el trágico episodio que supuso que miles de personas mayores enfermas de covid fueran rechazadas por los hospitales de Madrid la primavera de 2020. Uno de las decenas de jueces en la Comunidad de Madrid que investigan las muertes en ese período, el titular del juzgado de instrucción número 9, ha citado como testigos a Carlos Mur, el alto cargo regional que firmó los protocolos de no derivación, y a Alberto Reyer, el consejero que denunció la ilegalidad de esos documentos. La noticia fue adelantada el miércoles por el periódico InfoLibre.

La noticia tiene una doble trascendencia, política y judicial. La declaración, poco más de dos meses antes de la cita con las urnas del 28 de mayo, pondrá de nuevo en la agenda un tema que Ayuso ha querido evitar. En la campaña para la reelección de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el 4-M, apenas se habló de este asunto. Es probable que el año que viene sea distinto. Para las familias de los fallecidos, que creen que las culpas no se deberían detener en el personal de las residencias, es una esperanza en su búsqueda de justicia. “Ha sido un revulsivo porque hasta ahora todo eran malas noticias”, dice José Luis González, uno de los abogados de Marea de Residencias, una asociación que agrupa a familiares. El caso en cuestión afecta a la residencia DomusVi Albufera, un centro privado en Vallecas con 146 plazas que tiene como referencia el cercano Hospital Infanta Leonor. La querrela fue presentada por tres familiares de fallecidos que sufrieron el rechazo hospitalario.

En sus múltiples acciones en distintos partidos judiciales de la región, los abogados de Marea de Residencias diseñaron las querellas de abajo arriba, de modo que los testigos sobre el terreno (familiares, médicos, directores de residencias) implicaran a los responsables políticos. “El problema es que teníamos un tapón porque ningún magistrado se mostraba dispuesto a subir peldaños”.

De acuerdo con esa estrategia, Mur era el siguiente escalón. Él era el director general de coordinación sociosanitaria, el puesto encargado de la asistencia médica a las residencias de mayores. Fue quien trabajó con un grupo de geriatras de hospitales para diseñar el protocolo que pedía dejar en las residencias a los mayores enfermos que fueran dependientes en su día a día. Firmó digitalmente los cuatro protocolos que fueron distribuidos a hospitales y residencias, el 18, 20, 24 y 25 de marzo.

Mur, que fue cesado en mayo de 2020 y hoy es jefe de psiquiatría en la sanidad de Andorra, podría ser la clave para que las familias pasen al siguiente escalón. Él dijo en febrero de 2021 en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid que informó a sus superiores directos. Por encima de él estaban en la Consejería de Sanidad la viceconsejera Ana Dávila y el consejero Enrique Ruiz Escudero. Mur no ha contestado este jueves a una petición de entrevista de este periódico.

El plan para las residencias de mayores fue elaborado entre el lunes 9 y el viernes 13 de marzo en una reunión de la presidenta Ayuso con el asesor especial que fichó para la pandemia, Antonio Burgueño, según adelantó él mismo a este periódico y luego confirmó en la Asamblea. Se suponía que las residencias iban a ser “medicalizadas” con el personal de atención primaria, pero el hospital de campaña de Ifema absorbió a esos sanitarios. Ifema, como el resto de los hospitales públicos, también cerró sus puertas a los mayores de residencias.

El abogado de Marea de Residencias dice que su objetivo en la vista del 23 de marzo será que Mur sea más explícito que en la Asamblea. “Intentaremos que nos cuente por qué diseñó la Comunidad los protocolos para extender el ámbito de responsabilidad más allá de su estricto ámbito de actuación. Tiene que decir el nombre y apellido de sus superiores y solicitaremos diligencias para que ellos sean citados. A Mur le conviene porque le interesa dejar claro que no era responsabilidad de él. Si no lo hace, podría salir del juzgado como investigado”.

Por su parte, es esperable que Reyero mantenga que los protocolos, a su juicio, eran ilegales. Reyero ha dicho que no participó en la decisión de medicalizar las residencias y ni siquiera fue consultado al respecto. Según ha contado, se enteró de los protocolos el sábado 21 de marzo de 2020. Luego, causó un terremoto político el 1 de junio de 2020, cuando expresó en la Asamblea que las residencias no habían sido medicalizadas y que los protocolos eran probablemente ilegales. Según se supo más tarde, le trasladó esa postura a Escudero en varios correos enviados en los primeros días de la crisis. En un libro publicado el mes pasado, titulado Morirán de forma indigna, detalla cómo en las reuniones del consejo de Gobierno varios compañeros dieron evasivas a sus pedidos de auxilio para los mayores del sector que él supervisaba.

<https://elpais.com/espana/madrid/2022-11-24/un-testigo-incomodo-para-ayuso-dos-meses-antes-de-las-elecciones.html>

UN JUZGADO DE MADRID LLAMA A DECLARAR A REYERO Y MUR COMO TESTIGOS EN UNA CAUSA POR LA MUERTE DE TRES RESIDENTES

El exconsejero de Políticas Sociales del Gobierno Ayuso y el firmante del Protocolo que impidió trasladar a miles de residentes al hospital **tendrán que declarar como testigos** ante un tribunal. **Alberto Reyero** y **Carlos Mur** están citados como testigos el próximo **23 de marzo**, de acuerdo con una providencia dictada por el titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, a la que ha tenido acceso **infoLibre**.

Después de dos años y medio intentando sin éxito que el responsable del conocido como **Protocolo de la Vergüenza** tuviera que comparecer ante un tribunal, los familiares agrupados en **Marea de Residencias** han logrado por fin que un juez lo cite en una de las causas abiertas, aunque sea como testigo.

El magistrado, **Arturo Zamarriego**, investiga la querrela presentada por **los familiares de tres mujeres** que vivían en la residencia **DomusVi Albufera** y que fallecieron a finales de marzo y principios de abril de 2020.

Además de citar como testigos a Reyero y a Mur, el magistrado también solicita a **la médico forense** adscrita al juzgado que, analizada **la documentación médica** obrante en autos, indique si las pacientes tuvieron “una atención médica que haya sido inadecuada”, fueron “desatendidas” por alguno de los profesionales encargados de su cuidado “y **si la omisión de la diligencia debida a la finada pudo provocar su fallecimiento**”.

Una portavoz de Marea de Residencias mostró a **infoLibre** su “alegría” por la noticia y señaló que a los abogados “hay que hacerles un monumento porque llevan años trabajando a destajo, gratis, con decenas de querellas archivadas... Y por fin se ve un rayo de luz”. Los dos principales abogados son **Carlos Vila** y **José Luis González del Moral**.

Un 96% de fallecidos en la residencia

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó el **18 de marzo de 2020** un Protocolo que frenó casi por completo el traslado al hospital de las personas que vivían en residencias y tenían **dependencia física o deterioro cognitivo alto**. La gran mayoría de residentes se encuentran en esa situación. Se trata además de dos criterios que no están relacionados con la esperanza de vida de una persona, que no depende de ir en silla de ruedas o tener un deterioro cognitivo avanzado.

El Protocolo lo firmó **Carlos Mur**, entonces director de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño. Los días 20, 24 y 25 de marzo se firmaron otras tres versiones del mismo documento. Nada más firmarlo, el Protocolo se envió desde **la Consejería de Sanidad** a los altos cargos del Gobierno Ayuso que tenían que ejecutarlo. Y los datos oficiales demuestran que **se aplicó de forma masiva: 7.291 personas fallecieron** en las residencias en los meses de marzo y abril de 2020, sin ser trasladadas a un hospital, lo que supuso el 77% del total de residentes muertos aquellos dos meses.

El frenazo a las derivaciones hospitalarias fue total en muchas residencias. En concreto, **en DomusVi Albufera fallecieron 30 personas en aquellos dos meses y 29 lo hicieron en el propio centro**. ¡El 96,6% del total!

Las mentiras de Ayuso y de la fiscal superior

Carlos Mur tuvo que comparecer ante la **comisión de investigación** creada en la Asamblea de Madrid, en febrero de 2021, antes de que PP y Vox decidieran cerrar dicho órgano. Mur intentó lógicamente defender su actuación, pero **admitió la veracidad del Protocolo** de exclusión hospitalaria, desmontando así la versión de que había sido un simple "borrador".

La presidenta Ayuso, cuando **infoLibre** desveló el contenido íntegro del Protocolo en mayo de 2020, **mintió en la Asamblea de Madrid con las siguientes palabras**: "No hay tal orden. Hay una filtración de un borrador. Eso es todo". Este periódico publicó pocos días después **las cuatro versiones** del Protocolo, todas ellas firmadas digitalmente por Carlos Mur. **infoLibre** también publicó copia de **los correos electrónicos enviados desde Sanidad** a quienes tenían que aplicar el Protocolo.

Al contrario que Mur, **el entonces consejero de Políticas Sociales** mostró desde el primer momento su rechazo al Protocolo y a la falta de medicalización de las residencias. A principios de junio de 2020, Alberto Reyero declaró en la Asamblea: "Considero que no deben existir unos criterios de exclusión basados en niveles de dependencia y de discapacidad. **No es ético y posiblemente no sea legal**. Por eso, en mis comunicaciones al consejero de Sanidad he insistido siempre en que si no era posible la derivación al hospital, era imprescindible la medicalización, porque si no dejábamos indefensos a nuestros residentes. O lo que es lo mismo y para que se me entienda: **o el residente va al hospital, o el hospital va a la residencia**". Las comunicaciones a las que se refiere con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, son varias cartas y correos que le envió en plena primera ola de la pandemia [las puedes consultar aquí].

Alberto Reyero publicó hace dos meses un libro, **Morirán de forma indigna**, en el que relata su experiencia durante aquellos meses. Reyero sostiene que fue precisamente **la imposibilidad de contar su versión en la Asamblea**, después de que PP y Vox cerrasen la comisión de investigación, lo que le animó a escribir el libro. Entre otras muchas cuestiones, Reyero desvela cómo en un consejo de gobierno celebrado el 25 de marzo de 2020, pidió 50 médicos y 50 enfermeras para que pudieran prestar asistencia sanitaria en las residencias. **Ayuso no atendió la petición**.

Las querellas y denuncias de los familiares de las víctimas se han encontrado hasta ahora con **un muro en los tribunales**, donde se han archivado decenas de causas, **y especialmente en la Fiscalía**. Salvo contadísimas excepciones, los representantes del Ministerio Público han tenido una actuación completamente pasiva en los procedimientos relacionados con las residencias, sin pedir ningún tipo de pruebas y sin acudir ni siquiera a las declaraciones de testigos o imputados. En la Memoria anual correspondiente al año 2020, **la**

fiscal superior de Madrid intentó justificar esta actitud mediante una serie de mentiras, afirmaciones que carecen de cualquier sustento fáctico y la omisión de hechos fundamentales. **infoLibre** le envió 38 preguntas a la fiscal **Almudena Lastra** para que ofreciera su versión, pero **se negó a responder** todas las cuestiones [puedes consultar aquí las 38 preguntas].

https://www.infolibre.es/politica/juzgado-madrid-llama-declarar-reyero-mur-causa-muerte-residente_1_1370285.html

LAS MENTIRAS Y OMISIONES DE LA FISCAL SUPERIOR DE MADRID QUE NO INVESTIGA LAS MUERTES EN RESIDENCIAS

Mentiras, afirmaciones solemnes que carecen de cualquier sustento fáctico, omisiones de hechos fundamentales. No es lo que se puede esperar del escrito de una jurista, pero es lo que el lector encuentra en las trece páginas que dedica la fiscal superior de Madrid a explicar la actuación del Ministerio Público ante la hecatombe en las residencias de la región, incluidas en la Memoria correspondiente al año 2020. Ese texto fue presentado por Almudena Lastra en octubre de 2021, pero el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y otros dirigentes del PP acuden cada vez con más frecuencia a él para justificar que no se investigue lo ocurrido en los geriátricos madrileños, donde 7.291 residentes fallecieron sin recibir atención hospitalaria en los dos primeros meses de la pandemia. "La Fiscalía ha hablado y ha establecido que nunca hubo un Protocolo que impidiera la derivación de mayores de las residencias a los hospitales", dijo este mismo fin de semana Enrique López, consejero de Justicia de Ayuso.

infoLibre realizó una minuciosa recopilación de todo lo que se sabe sobre lo ocurrido en las residencias de Madrid en aquellos dos meses fatídicos y lo contrastó con el escrito de la fiscal superior. A la vista de las lagunas de la investigación y de las contradicciones entre la realidad y lo que sostiene Almudena Lastra, este periódico le envió el pasado 19 de octubre un cuestionario con 38 preguntas, para que pudiera aclarar su versión con todo detalle, indicar en qué fuentes se basa para realizar determinadas afirmaciones y explicar las razones de la actuación del Ministerio Público. El viernes 28 de octubre por la tarde llegó la respuesta del portavoz de Almudena Lastra: "La fiscal superior no va a responder a las preguntas porque ya está todo explicado en la Memoria anual". Una afirmación que también es falsa, como puede comprobar cualquier persona que lea la Memoria de la Fiscalía Superior [páginas 183 a 195 de este documento] y las 38 preguntas planteadas por infoLibre [reproducidas de manera literal en este artículo].

LAS MENTIRAS

Almudena Lastra difunde al menos tres falsedades en su escrito: sostiene que el Protocolo del Gobierno Ayuso que impedía trasladar al hospital a residentes con alta dependencia física o grave deterioro cognitivo "no funcionó como impedimento" para las derivaciones, afirma que los pacientes recibían en los geriátricos "un tratamiento hospitalario similar al que habrían recibido caso de ser derivados" y asegura que las bajas de personal durante la pandemia "se fueron solventando" con "medidas de diversa índole".

Esas afirmaciones de la fiscal tienen un nexo común: exculpan al Gobierno de Ayuso de las dos principales acusaciones recibidas por su gestión durante la pandemia. A saber, que no medicalizó las residencias como anunció públicamente que haría y que además aprobó un Protocolo de no derivación que impidió el traslado a los hospitales de los mayores más vulnerables. Una combinación que resultó mortal para miles de personas. Y que llegó a denunciar desde dentro del propio Gobierno regional el entonces consejero de Políticas Sociales. "O el residente va al hospital, o el hospital va a la residencia", advirtió Alberto Reyero en junio de 2020, pero al evitar ambas cosas al mismo tiempo se dejó "indefensos a los residentes".

Veamos cuál es la realidad sobre esos tres temas.

Primera cuestión: ¿actuó el Protocolo como impedimento para trasladar residentes a los hospitales?

Por un lado, hay múltiples testimonios que así lo confirman. Una directora de una residencia de Amavir aseguró en la comisión de investigación creada en su día en la Asamblea que el hospital rechazó a sus enfermos durante 27 días. Actas de la Policía Municipal de Madrid recogen declaraciones de directoras de residencias visitadas por los agentes que narran la imposibilidad de derivar a los residentes y se “derrumban” al contar lo sucedido. El médico de un geriátrico de la capital comunicó por escrito a los familiares de los residentes que las “autoridades sanitarias” prohibían el traslado de pacientes con covid. La médico de otro geriátrico de la localidad de Griñón explicó a una mujer la imposibilidad de trasladar a su madre al hospital en una conversación que fue grabada. Existen documentos aportados a procesos judiciales donde se reconoce que llamadas telefónicas para trasladar a enfermos ni siquiera eran atendidas por el personal del hospital que debía autorizarlo. Y, por supuesto, hay decenas de testimonios de familiares denunciando que desde los geriátricos les informaban de que no era posible derivar a residentes que caían enfermos.

Además, están los datos oficiales del propio Gobierno madrileño. infoLibre obtuvo, a través del Portal de Transparencia, la información sobre todas las derivaciones hospitalarias realizadas entre enero y junio de 2020, incluyendo la fecha del traslado, la residencia donde vivía el paciente y el hospital de destino. El análisis de esos datos permite llegar a conclusiones incontestables:

- En enero y febrero, cuando no había ningún problema sanitario en Madrid, la media diaria de derivaciones fue de 120. En marzo, esa media se redujo a 74 traslados diarios, en vez de multiplicarse exponencialmente a medida que miles de mayores caían enfermos por el virus.
- Entre el 2 de marzo, cuando falleció la primera residente, y el 30 de abril se realizaron 6.204 derivaciones. En los primeros dos meses del año, sin pandemia, habían sido 7.233.
- Los tres días con menos traslados fueron el 20, 21 y 22 de marzo, justo después de la aprobación del Protocolo el 18. Esos tres días hubo 42, 40 y 35 traslados, respectivamente, mientras cientos de personas morían sin recibir atención médica adecuada en los geriátricos.
- En las semanas posteriores a la aprobación del Protocolo, más del 80% de los fallecimientos de residentes se produjeron en el propio centro. En situación de normalidad, esa cifra está por debajo del 20%.

Pues bien, frente a este aluvión de datos y testimonios, la fiscal Almudena Lastra dice que el Protocolo “no funcionó como impedimento” para las derivaciones. ¿Y en qué documentos o datos apoya dicha afirmación? No se sabe. En la Memoria no cita ninguno. Y no respondió a preguntas claras y directas de infoLibre sobre este tema, entre otras, si la Fiscalía considera que no son correctos los datos aportados por el Gobierno de Madrid o qué información analizó el Ministerio Público para llegar a esa conclusión.

Segunda cuestión: ¿recibían los pacientes en los geriátricos “un tratamiento hospitalario similar al que habrían recibido caso de ser derivados”? O, planteado en otros términos, ¿estaban las residencias medicalizadas? De nuevo, es abrumadora la acumulación de testimonios y hechos que contradicen la versión de la fiscal Lastra.

El 12 de marzo de 2020, la Consejería de Sanidad anunció un Plan de Acción contra el coronavirus, entre cuyas medidas destacaba el establecimiento de un mando único sanitario y la medicalización de las residencias. El principal redactor, Antonio Burgueño, reconoció meses después públicamente que “la medicalización de las residencias no se llevó a cabo”.

El único intento de medicalizar las residencias fue la conocida como Operación Bicho, que fue un completo fiasco, según admitieron sus máximos responsables en la comisión de investigación creada en la Asamblea de Madrid la pasada legislatura. “La verdad es que fue caótico”, confesó Encarnación Burgueño, hija de Antonio y que estaba al frente de un operativo que duró doce días. “Vimos morir a personas sin sedación y hay personas que murieron sin condiciones dignas. Los que nosotros vimos morir, sufrieron”, admitió Eduardo Esteban, gerente de la empresa de ambulancias Transamed contratada por Burgueño. Este último desveló que sólo le dejaron trasladar al hospital a una persona de las cien residencias que visitaron en la región.

Alberto Reyero denunció por escrito, en dos cartas enviadas al consejero de Sanidad el 31 de marzo y el 11 de abril, que las residencias no se habían medicalizado. En esta última misiva, Reyero denuncia que no existe “apoyo sanitario” en las residencias y recuerda que es un compromiso que el Gobierno de Ayuso lleva incumpliendo ya desde hace un mes: “No se trata de otra cosa que de poner en marcha su tan anunciada ‘medicalización’, que como bien sabes no es una realidad en nuestras residencias, a pesar de que fuera una de las medidas más destacadas del Plan de Acción contra el coronavirus, que anunciaste el pasado 12 de marzo”.

También hay resoluciones judiciales en las que se determina que las residencias no estaban medicalizadas. En un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del 6 de mayo de 2020, en un procedimiento iniciado por el Ayuntamiento de Leganés, se indica que de los documentos aportados por el Gobierno autonómico “no se desprende que se haya procedido a dotar de personal médico, de enfermería, ni de auxiliar sanitario” a cada una de las residencias “en número que permita constatar la adecuada atención sanitaria ante la situación de emergencia en la que nos encontramos”.

Frente a estas evidencias, la fiscal Lastra abronca en su Memoria a los responsables de las residencias que “en la información a las familias” ponían el acento “en la responsabilidad del hospital, en lugar de informarles que los pacientes iban a recibir en la residencia un tratamiento hospitalario similar al que habrían recibido caso de ser derivados”.

¿Qué fuentes utiliza Almudena Lastra para sostener tal cosa? ¿Acaso dispone la Fiscalía de información sobre cuántas de las 475 residencias madrileñas estaban medicalizadas? Son otras de las preguntas que se niega a responder y sobre las que nada dice tampoco en la Memoria.

Tercera cuestión: ¿es cierto que las bajas de personal producidas durante la pandemia, “con medidas de diversa índole, se fueron solventando”?

La fiscal Lastra realiza esta afirmación cuando analiza los “problemas de recursos humanos” vividos en las residencias, que en su opinión no se produjeron esencialmente como consecuencia de las bajas por la pandemia, sino por “la inadecuada dotación de origen de unos centros que no estaban diseñados para atender sanitariamente a sus usuarios”.

Es cierto que los geriátricos tienen “de origen” un serio problema de falta de personal –en especial de gerocultoras, que es la figura clave para garantizar el cuidado de los mayores–, pero nadie relevante en el sector defiende que los centros tengan que estar “diseñados para atender sanitariamente a sus usuarios”. Para eso están los hospitales. En todo caso, al asegurar que el problema está “en origen” y no se produjo durante la pandemia, la fiscal quita del foco cualquier responsabilidad de la Administración competente. Pero, ¿es o no verdad lo que defiende la fiscal?

Una de las patronales más importantes del sector, CEAPs, realizó un informe sobre lo ocurrido en las residencias durante la primera ola, en el que desvela la magnitud del problema: “En conjunto, un número que varía entre Comunidades pero cercano al 20% del personal de atención directa de las residencias dejó de trabajar. Oscila entre el 5% en Andalucía, 18% en Cataluña, 25% en Navarra y 35%-40% en Comunidad de Madrid”.

La falta de personal médico en las residencias fue otra de las denuncias realizadas por Alberto Reyero en las cartas que envió al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero. Y es que el Gobierno madrileño no solo no medicalizó las residencias, sino que realizó ofertas a médicos y enfermeras que estaban en geriátricos para que fuesen a trabajar a hospitales, algo que muchos aceptaron ya que las condiciones laborales eran bastante mejores. Y cuando el consejero de Políticas Sociales reclamaba personal médico, no se lo daban. “La solución que hasta ahora habéis ofrecido de enviarnos listados de personal sanitario para que los reclutemos nosotros no funciona porque competimos con Sanidad y eso nos impide contratar adecuadamente”, se quejaba Reyero en la misiva del 11 de abril.

El entonces consejero, que dimitió el 2 de octubre de 2020, ha escrito un libro publicado recientemente sobre lo ocurrido en las residencias, Morirán de forma indigna, donde ofrece su testimonio sobre lo ocurrido. Uno de los pasajes más escalofriantes es aquel donde describe lo

que ocurrió en el Consejo de Gobierno del 25 de marzo, cuando pidió ayuda para las residencias, en un momento en el que ya habían fallecido casi mil personas en los geriátricos de la región: “Hice una petición concreta: cincuenta médicos y cincuenta enfermeros para reforzar la atención sanitaria en las residencias que requerían una actuación más urgente. Era una petición modesta, porque se necesitaban muchos más recursos, pero era una manera de poner en marcha aquello que habían prometido unos días antes. «La situación es límite», les resumí. No voy a dar demasiados detalles del debate porque las deliberaciones del Consejo tienen carácter reservado. Pero no recibí más que evasivas (no iban a poner a mi disposición a ningún sanitario, eso me quedó claro) y solo sentí frialdad e indiferencia a mis peticiones”. Y concluye Rejero: “Durante aquel debate, un consejero de Ciudadanos me había escrito un mensaje de WhatsApp: «Les da igual»”.

De manera que la patronal desveló en un informe escrito en el verano de 2020 que las bajas de personal llegaron al 40% en la Comunidad de Madrid, y eso es una media de todos los centros, lo que significa que en algunos ese porcentaje fue mucho más alto. Y el consejero de Políticas Sociales denunció la situación en unas cartas publicadas por infoLibre en enero de 2021. Pero todo ello no fue obstáculo para que, en octubre de 2021, la fiscal Lastra publicase una Memoria donde sostiene que las bajas de personal durante la pandemia “con medidas de diversa índole, se fueron solventando”. ¿Y cómo lo sabe ella? ¿Dispone de datos sobre el número de médicos y enfermeras que estuvieron de baja y por cuánto tiempo? ¿Conoce cuántos centros estuvieron sin personal médico? Son preguntas que forman parte del cuestionario enviado por este periódico y que se negó a responder.

LAS OMISIONES

Que en un informe del Ministerio Público figuren afirmaciones falsas es sorprendente, pero en absoluto es lo más grave desde el punto de vista de la investigación fiscal. El gran problema es la relación de hechos que la Fiscalía ha decidido obviar, como si nunca se hubieran producido.

La fiscal superior de Madrid achicó el campo de la investigación de forma tan exagerada, que al final se centró únicamente en la actuación de los directores o del personal médico de los geriátricos una vez que un residente se había contagiado. Cualquier decisión adoptada desde el poder político ha sido obviada a la hora de investigar.

Veamos a continuación todo lo que ha quedado excluido de la investigación fiscal.

1. No se investiga ningún tipo de hecho antecedente. Todo lo que ocurrió antes del contagio es irrelevante en opinión de Almudena Lastra, según explica en la Memoria: “Jurídicamente, lo relevante es valorar si, producido el contagio, las acciones que llevó a cabo la residencia para evitar el resultado lesivo finalmente producido fueron las adecuadas”. En palabras de una veterana fiscal consultada por infoLibre, “es como si en un caso de desnutrición de una persona mayor, el Ministerio Público dijese que no va a indagar las causas que provocaron la desnutrición, sino que simplemente va a analizar qué ocurrió una vez que se certificó que la persona estaba desnutrida”.

2. No se investiga la actuación de los geriatras hospitalarios. El Gobierno de Ayuso creó la figura de los “geriatras de enlace”, que eran quienes debían decidir si un residente podía ser derivado al hospital o no, de acuerdo con los criterios del Protocolo. La Fiscalía se limita en su Memoria a recoger lo que los geriatras le han trasladado que hicieron, pero no consta que haya realizado una investigación independiente sobre lo que realmente hicieron. Y ello a pesar de que existe prueba documental sobre lo ocurrido porque, como admite Lastra, “los centros hospitalarios usualmente dejaban constancia de la interconsulta”; es decir, de la llamada entre la residencia y el hospital para hablar sobre el traslado de un paciente.

Por tanto, la Fiscalía podría solicitar a los hospitales la documentación sobre las 7.291 personas que fallecieron en la residencia, sin derivación, para conocer qué consta en la interconsulta de cada caso. Pero no lo ha hecho.

3. No se investiga el Protocolo de no derivación. Más allá de la existencia del Protocolo de no derivación, desvelado por infoLibre en junio de 2020, hay múltiples preguntas sin contestar en

relación con dicho documento. ¿Por qué se decidió aprobar? ¿Quién participó en las reuniones donde se discutió y quién decidió su aprobación? ¿Por qué motivo se acordó incluir como criterios de no derivación la dependencia física del residente o su grado de deterioro cognitivo, cuando no están directamente relacionados con la esperanza de vida de una persona? ¿Cuál es el criterio médico para excluir de la derivación a una persona por el mero hecho de vivir en una residencia? ¿Cuándo se empezó a aplicar y cuándo se dejó de aplicar?

No consta que la Fiscalía Superior de Madrid haya pedido ningún tipo de información al Gobierno regional sobre dicho Protocolo, ni que haya llamado a declarar a los dirigentes políticos o responsables médicos que participaron en su elaboración o aprobación.

4. No se investiga la desatención sufrida por pacientes con otras enfermedades. En su Memoria, la fiscal Lastra escribe: “Debería llamarse la atención a todos los implicados –residencias, Administración y hospitales– sobre la alta incidencia de problemas de desatención de usuarios que derivaron en otras patologías, que debían haber recibido la misma atención que el COVID-19, en cuanto al protocolo de derivación se refiere, a fin de evitar que esta situación se repita en caso de una nueva crisis sanitaria”.

Pero, además de “llamar la atención”, si la Fiscalía ha detectado una “alta incidencia de problemas de desatención” de enfermos que se concretó en una discriminación ya que no “recibieron la misma atención” que quienes tenían el virus, ¿no debería investigar estos hechos de forma sistemática el Ministerio Público? Son múltiples las preguntas: ¿Quién es el responsable de esa discriminación? ¿Cómo se gestó? ¿Cuántas fueron las personas afectadas?

5. No se investiga la falta de medicalización de las residencias. Como se indicó previamente, son contundentes los datos y testimonios sobre la falta de medicalización de las residencias. No consta que la Fiscalía haya pedido información al Gobierno de Ayuso sobre cuántas residencias tenían personal sanitario cuando empezó la pandemia –la normativa autonómica permite a los centros de menos de 50 residentes no disponer de médico–, cuántas bajas se produjeron en cada centro, qué profesionales y material envió Sanidad a los geriátricos, cuántos médicos y enfermeras dejaron las residencias para ir a trabajar en un hospital...

6. No se investiga la razón para no trasladar enfermos al hospital de Ifema. El Gobierno madrileño creó un hospital de campaña en el recinto ferial Ifema, que estuvo operativo durante seis semanas y que tenía capacidad para 5.500 camas, según la información oficial difundida entonces. Durante esas seis semanas, fallecieron en los geriátricos madrileños más de 5.000 personas sin ser trasladadas a un hospital. Ninguna de ellas fue enviada a Ifema. A este centro sólo fueron trasladados 23 residentes, con síntomas leves.

La Fiscalía no ha indagado nada en relación con este asunto. ¿Por qué motivo se construye un hospital de campaña y se decide no trasladar allí a los enfermos que más lo necesitan? ¿Quién decidió que los pacientes de los geriátricos no podían recibir asistencia en Ifema?

7. No se investiga el uso dado a los hospitales privados. El Ejecutivo madrileño decidió, a mediados de marzo de 2020, crear un mando único sanitario por el que todos los hospitales públicos y privados pasaban a depender del consejero de Sanidad. Así lo explicó Ayuso en la Asamblea de Madrid: “Quedaban bajo las órdenes de la Consejería de Sanidad los 102 hospitales de la comunidad: 34 públicos y 68 privados; es decir, funcionaríamos como un solo hospital, que pasaba a tener 102 sucursales, y así creamos un sistema centralizado de UCI y compras. ¡Esta decisión ha salvado muchas vidas!”.

Se desconoce cuántas vidas salvó dicha decisión, pero lo que es seguro es que no fueron vidas de personas que estuvieran en geriátricos madrileños, salvo que tuvieran un seguro médico privado. ¿La razón? El propio Gobierno de Madrid admitió que no se había producido ni un solo traslado directamente desde una residencia a un hospital privado. Y ello a pesar de que, según la patronal, siempre hubo camas libres en dichos centros privados.

A la Fiscalía tampoco le ha parecido relevante indagar sobre este asunto. Si, como explicó la presidenta madrileña, todos los hospitales privados quedaban bajo el mando único de Sanidad,

¿por qué no se utilizó ese recurso para atender a los residentes que caían enfermos? ¿Quién tomó esa decisión y por qué motivos?

8. No se investiga el traslado al hospital de residentes con seguro médico privado. Aquellos residentes que tenían un seguro médico privado, pudieron saltarse el Protocolo de no derivación: llamaban a una ambulancia privada y eran atendidos en un hospital privado. A priori, y dado que todos los recursos hospitalarios estaban bajo el mando único de Sanidad, podríamos estar ante un caso de discriminación al reservar parte de los recursos existentes (los centros privados) solo para atender a determinados pacientes (los residentes que tenían seguro médico privado).

Tampoco consta que la fiscal Lastra se haya preocupado por este asunto.

9. No se investigan los hechos denunciados por testigos privilegiados. Hay decenas de testimonios de personas que denunciaron hechos que, al menos indiciariamente, podrían despertar el interés de una Fiscalía en un tema con miles de víctimas. El caso más obvio es el de Alberto Reyero, pero hay otros muchos, como por ejemplo la directora de la residencia de Amavir que declaró en la Asamblea o las afirmaciones de responsables de geriátricos recogidas en actas de la Policía Municipal de Madrid. La Fiscalía no ha considerado necesario llamar a declarar a ninguna de esas personas.

La suma de todas estas omisiones en la investigación fiscal tiene como resultado, lógicamente, que los únicos culpables que podrá encontrar el Ministerio Público son algunos médicos o directores de residencia, en caso de que no actuaran con la diligencia debida tras detectar que un paciente concreto estaba contagiado. Pero excluidas de la investigación fiscal absolutamente todas las decisiones adoptadas por la Administración autonómica, es materialmente imposible encontrar algún culpable entre los responsables políticos o altos cargos.

A ello hay que sumar otra cuestión fundamental. La Fiscalía tiene la obligación legal de abrir una investigación de oficio cuando tiene conocimiento de la posible existencia de un delito. De acuerdo con los datos de la Memoria de Almudena Lastra, los fiscales en Madrid han abierto 64 diligencias de investigación. ¿Cuántas han sido de oficio y cuántas como consecuencia de denuncias de familiares de las víctimas? Es otra de las cuestiones de infoLibre que la fiscal superior ha dejado sin contestar. Pero solo la asociación Pladigmare, que agrupa a familiares de residentes, asegura que presentó 59 denuncias ante la Fiscalía. Si esos datos son correctos, son la certificación de la pasividad total de la Fiscalía ante la hecatombe de las residencias de Madrid, puesto que como mucho habría actuado de oficio en media docena de casos.

En todo caso, el dato innegable es el siguiente: la fiscal Lastra sostiene que el Ministerio Pública ha investigado “más de 130 fallecimientos”, puesto que alguna de las diligencias de investigación afecta a más de una persona. Si tenemos en cuenta que fueron 7.291 las personas muertas en las residencias sin atención hospitalaria, ello significa que la Fiscalía ha investigado el 1,78% de las muertes.

Un dato que, por cierto, lleva a plantear otra pregunta: ¿cómo puede realizar la fiscal Lastra afirmaciones generales sobre el funcionamiento del Protocolo o la medicalización de las residencias cuando el Ministerio Público no ha investigado el 98,22% de las muertes producidas en dichos centros?

EL PROTOCOLO DE NO DERIVACIÓN

La existencia del Protocolo de no derivación hospitalaria ha centrado buena parte del debate público, desde el día siguiente a que fuera desvelado por infoLibre, cuando Isabel Díaz Ayuso mintió en la Asamblea diciendo que era “un borrador”. Desde entonces, los dirigentes del PP han mantenido dos versiones falsas diferentes: la del borrador, algo que fue desmentido por el propio alto cargo firmante del Protocolo cuando compareció en la comisión de investigación, y la de que no se llegó a “activar”, tesis defendida últimamente por el consejero de Justicia en contra de la evidencia de las 7.291 muertes en residencias. Enrique López, en la misma entrevista donde apostó por la tesis de la no activación, se inventó 9.000 derivaciones que nunca existieron. Aseguró que en marzo y abril de 2020 se habían producido “más de 15.000” traslados de residentes al hospital, cuando la cifra real fue de 6.204.

La Memoria de la Fiscalía establece como un hecho cierto que el Protocolo existió y se aplicó, aunque, como se explicó con anterioridad, Lastra sostiene falsamente que no funcionó como impedimento para el traslado de pacientes.

En todo caso, el análisis sobre la relevancia de dicho Protocolo no puede realizarse de forma aislada, es imprescindible tener en cuenta otros dos hechos fundamentales. Si el Protocolo hubiese existido en los mismos términos, pero las residencias se hubieran medicalizado, no habrían fallecido residentes sin la atención médica adecuada. Y con idéntico Protocolo y residencias sin medicalizar, si se hubiesen utilizado los recursos alternativos existentes –lfema y hospitales privados– para atender a los enfermos, tampoco se habría producido el mismo resultado. Los tres hechos son partes de un todo.

Pues bien, de los tres hechos que marcaron la hecatombe en las residencias de Madrid, la Fiscalía que dirige Almudena Lastra no ha investigado dos: la no medicalización de los geriátricos y la no utilización de los medios alternativos existentes. Y respecto al tercero, el Protocolo, ha concluido en contra de todas las pruebas y evidencias disponibles –testimonios y datos oficiales del Gobierno de Ayuso– que no fue un “impedimento” para que los residentes fuesen trasladados a un hospital.

https://www.infolibre.es/politica/mentiras-excusas-omisiones-fiscal-superior-madrid-no-investigar-muertes-residencias_1_1352248.html

EL CONSEJERO DE JUSTICIA DE AYUSO RECUA Y ADMITE QUE NO HUBO 15.000 DERIVACIONES EN LO PEOR DE LA PANDEMIA

A preguntas de infoLibre, el portavoz de Enrique López admite que esa cifra se refiere a traslados de residentes entre "la primera ola y el comienzo de la segunda", y no a lo ocurrido en lo "peor de la pandemia" como dijo en una entrevista reciente

En los dos meses más negros de la pandemia se produjeron en la Comunidad de Madrid 6.204 derivaciones, un millar menos que en enero y febrero, antes de que estallase la crisis sanitaria

El Gobierno de la Comunidad de Madrid lleva dos años esforzándose para implantar el relato de que en la región no se dejó morir a miles de personas en las residencias durante las semanas más negras de la pandemia. Una y otra vez, desde el Ejecutivo autonómico se ha mantenido que nunca se dejó "a nadie atrás", ni a personas "mayores" ni a aquellas con alguna "discapacidad". Algo en lo que insistió este mismo fin de semana el consejero de Justicia, Enrique López, quien en una entrevista aseguró que jamás se prohibieron las derivaciones. Una afirmación que sostuvo sobre una utilización interesada de las cifras oficiales. Porque el dato de traslados que ofreció sobre "la época más dura" no se refería solo a las semanas negras de marzo a abril, que es cuando se produjo el tapón, sino que era el resultado de sumar casi seis meses, el tiempo que separó la primera de la segunda ola.

Tres semanas después de que el número dos de Ayuso irritase con sus declaraciones a los familiares de fallecidos en los geriátricos, López aprovechó una charla con la agencia Efe para pronunciarse sobre la hecatombe registrada en las residencias madrileñas e insistir en el relato oficial. Así, el consejero dijo que "nunca hubo un protocolo que impidiera la derivación", a pesar de que algunas residencias y hospitales regionales recibieron aquel documento desvelado por infoLibre que fijaba "criterios de exclusión" que impedían el traslado en función de la discapacidad física o mental. "Todas las denuncias que se están haciendo al respecto carecen de esa mínima base de objetividad, pero con las víctimas hay que tener siempre empatía", completó el magistrado. Unas palabras a las que no tardaron en responder los familiares: "No queremos su solidaridad ni su empatía. Queremos justicia".

López no solo negó que se abandonase a su suerte a los usuarios de las residencias, sino que aseguró que se llevaron a cabo "un alto número" de traslados desde los geriátricos madrileños a los hospitales en aquellos duros momentos. "Se produjeron más de 15.000 derivaciones en la época más fuerte, más dura del covid, entre los meses de marzo, abril", afirmó con rotundidad el magistrado. Un dato que, sin embargo, no se parece lo más mínimo a los que facilitó el propio

Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso a este diario tras una petición de información a través del Portal de Transparencia. De hecho, los registros oficiales de la propia Consejería de Sanidad regional recogen que durante esos dos meses a los que textualmente hace alusión en su respuesta el consejero de Justicia se produjeron en realidad menos de la mitad de derivaciones de lo que López dijo durante la entrevista.

¿Quiere eso decir que Justicia maneja algún recuento diferente? ¿O que las cifras que se entregaron en su momento estaban incompletos? No, la explicación sobre la enorme diferencia es mucho más sencilla y fruto de un uso interesado de los datos. Los 15.000 traslados que pone sobre la mesa el magistrado no se circunscriben a las peores semanas de la pandemia, sino que abarca un intervalo de tiempo mucho más amplio. "Se refería al periodo comprendido entre la primera ola y el inicio de la segunda", explicaron este lunes desde el departamento de Justicia, en respuesta a preguntas de infoLibre sobre el origen de los datos difundidos por López. Es decir, desde marzo hasta aproximadamente el final del verano, que es cuando los contagios repuntaron de nuevo. Solo así lo que dice López se ajusta a la realidad oficial: entre marzo y junio, ambos incluidos, se produjeron 11.662 traslados desde los geriátricos hacia los centros hospitalarios. Así que habría que incluir incluso julio y agosto para llegar a la cifra del consejero.

Aportar una cifra total sobre un periodo tan amplio oculta la dura realidad de lo que se vivió en las residencias durante las semanas más negras de la pandemia. Solo en los sesenta días comprendidos entre el primer lunes de marzo –el día 2– y el 30 de abril de 2020 se registraron 6.204 derivaciones, frente a las 7.233 que se llevaron a cabo durante los sesenta días previos de enero y febrero. Es decir, que en pleno pico de contagios se produjeron un millar de traslados menos que cuando el covid-19 aún no había paralizado España, cuando lo lógico hubiera sido que se hubieran multiplicado las derivaciones ante la expansión descontrolada del coronavirus. Solo entre marzo y abril, los dos meses en los que los geriátricos se convirtieron en una auténtica zona cero, 7.291 mayores murieron en sus residencias sin ser trasladados a un hospital de la comunidad autónoma.

De hecho, los datos del tercer mes del año, cuando se decretó el estado de alarma, muestran cómo las derivaciones no fueron una realidad en la Comunidad de Madrid en los momentos más complicados de la crisis sanitaria. La media diaria de traslados a lo largo de marzo se situó en los 74,4, lo que contrasta con los 125,3 de enero y los 115,5 de febrero. En abril, por su parte, se elevó hasta los 133,4, fundamentalmente por el incremento de derivaciones a partir de la segunda semana del mes. Y en mayo y junio se estabilizó ligeramente por debajo de las nueve decenas diarias. Entonces, ya habían perdido la vida prácticamente un 20% de los usuarios de residencias en suelo madrileño, mientras que los que habían logrado superar el virus gozaban ya de un cierto grado de inmunidad.

Y si se desciende todavía más en el análisis de los datos, hay cuatro semanas que son clave en cuanto al frenazo de las derivaciones: las que se comprenden entre el 9 de marzo y el 5 de abril. Durante ese intervalo los traslados se desplomaron un 36,8% respecto a las cuatro anteriores, un parón que fue todavía más fuerte en las residencias más castigadas por el virus, hasta el punto de que durante ese tiempo ni uno solo de los 82 centros con mayor número de fallecidos llegó a trasladar un paciente al día de media. "Los pacientes con sospecha de estar contagiados no son derivables a hospital por criterio de las autoridades sanitarias", explicaba el 17 de marzo el médico de La Purísima Concepción a los familiares de los residentes, por medio de un escrito que reprodujo este periódico.

Al día siguiente, el 18 de marzo, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid aprobaba el Protocolo que prohibía trasladar al hospital a mayores de los geriátricos que tuvieran un mayor nivel de dependencia o deterioro cognitivo. Aquel documento fue firmado digitalmente por el entonces director de Coordinación Socio-Sanitaria, Carlos Mur, y se envió por email a los gerentes y directores médicos de los hospitales de Madrid y a los altos cargos del Gobierno de Ayuso que debían garantizar su aplicación. En los días siguientes, se aprobaron otras tres versiones de ese Protocolo, todas ellas desveladas de forma íntegra por infoLibre. En todas se establecían, con mayor o menor crudeza en el lenguaje, criterios de exclusión para trasladar a determinados enfermos.

El Gobierno de Ayuso siempre ha tratado de instaurar en el imaginario colectivo que aquel documento no era más que un simple borrador sin valor alguno. De hecho, esa es otra de las ideas en las que insistió López durante su entrevista: "El protocolo que cuestiona la izquierda nunca llegó a aplicarse". Algo que desmienten, de nuevo, los datos oficiales. En la semana del 16 al 22 de marzo se realizó un 58,6% de traslados menos respecto a la media semanal previa a la pandemia. De hecho, los tres días con menos derivaciones fueron el 20, cuando se envió a los hospitales la segunda versión del documento –la que contenía la redacción más dura–, 21 y 22 de marzo. Esos tres días hubo 42, 40 y 35 traslados, respectivamente, en toda la Comunidad. En enero y febrero la media diaria fue de 120.

https://www.infolibre.es/politica/consejero-justicia-ayuso-reclama-admite-no-hubo-15-000-derivaciones-residencias-durante-peor-pandemia_1_1352479.html

AYUSO OCULTÓ CASI UN AÑO A LA CÁMARA DE CUENTAS DATOS DE UN CONTRATO MILLONARIO QUE ACABÓ BAJO INVESTIGACIÓN

El Ejecutivo madrileño no comunicó al organismo fiscalizador la anulación de un encargo de guantes por 2,86 millones hasta que supo que el informe final sobre adjudicaciones de emergencia haría constar la imposibilidad de averiguar lo ocurrido

Del informe definitivo de la Cámara desaparecieron los párrafos que en el anteproyecto aludían a la falta de los papeles oficiales necesarios para analizar en profundidad aquella adjudicación

Adjudicado a Air Global Media, que el año del estallido de la pandemia tuvo como gran pagador a la Consejería de Sanidad, el contrato se incluye en la denuncia que Unidas Podemos interpuso hace siete meses ante la Fiscalía Europea

La falta de documentos oficiales torpedeó que la Cámara de Cuentas de Madrid fiscalizase sin obstáculos un contrato millonario de emergencia de los 4.305 de 2020 y que hace siete meses terminó incluido en una denuncia de Unidas Podemos (UP) ante la Fiscalía Europea. Adjudicado en plena pandemia por 2.860.000 euros para adquirir 22 millones de pares de guantes de nitrilo y, por lo que acaba de averiguar infoLibre, oficialmente anulado en diciembre de aquel mismo año, el suministro había sido encomendado a Air Global Media SL, una empresa sin empleados.

El Ejecutivo madrileño no comunicó al organismo fiscalizador la anulación del contrato de 2,86 millones hasta que en noviembre de 2021 supo que el informe final sobre contratos de emergencia haría constar la imposibilidad de averiguar lo ocurrido en ese caso. De hecho, ningún documento público al alcance de cualquier ciudadano indica que se haya anulado.

La Cámara había incluido esa adjudicación en la muestra de 263 contratos seleccionados por criterios técnicos entre los más de 4.400 de emergencia mayoritariamente entregados por la Administración regional en febrero de aquel año. En el citado informe final no se publicó ni una sílaba de la que se dedujese la suspensión definitiva del contrato.

La anulación por demora en el plazo para el suministro fue confirmada primero a este periódico por el propietario de Air Global Media SL: lo hizo mostrando un email donde la subdirectora general de contratación le anunciaba en noviembre de 2020 la cancelación. Y finalmente fue corroborada por la Comunidad de Madrid, que no explicó a infoLibre a qué dedicó aquellos 2,86 millones que quedaron sin gastar ni por qué no se había facilitado antes información a la Cámara de Cuentas.

A día de hoy, tanto en el portal de contratación como en el anexo del citado informe de la Cámara de Cuentas aparecen las adjudicaciones a Air Global como si ningún tropiezo hubiese interferido en la ejecución de ninguno de los cuatro contratos que le asignó el Gobierno de Díaz Ayuso en 2020 (pincha aquí, aquí, aquí y aquí).

Entre los cuatro, todos destinados al hospital de campaña montado durante la pandemia en el recinto de ferias y congresos Ifema, sumaban 10 millones de euros. Pero la empresa adjudicataria asegura que solo cobró 5,3: según su versión, por la anulación de uno de los contratos, el ya mencionado de 2,86 millones. Y porque en los otros tres se modificó la cuantía

de los pagos: bien porque constituyó un error administrativo añadir el IVA o bien porque suministró menos cantidad de material -mascarillas y monos- que la originalmente acordada.

Numerado en el anexo de “expedientes fiscalizados” que incorpora el informe final sobre contratos de emergencia aprobado por la Cámara de Cuentas el pasado 23 de marzo, el contrato de guantes se incorpora así a la lista de 263 adjudicaciones fiscalizadas. El organismo fiscalizador las extrajo de los 4.448 expedientes que el Gobierno regional puso en sus manos en febrero de 2021 (4.305) y que completó (143) al mes siguiente. La lectura del informe final sobre contrataciones de emergencia, único de acceso público universal, no permite detectar que tal compra de guantes nunca llegara a producirse. Del informe definitivo de la Cámara desaparecieron los dos párrafos que en el anteproyecto aludían a la falta de los papeles oficiales necesarios para analizar en profundidad aquella adjudicación.

Con la Consejería de Sanidad de Madrid como gran cliente en 2020, Air Global le atribuye en 2020 el pago de 5.283.169 euros: casi la totalidad (cobró de otros clientes casi 170.000 euros) de lo ingresado aquel año. Esos 5,28 millones multiplicaron por más de 20 lo facturado el año anterior. El número coincide salvo en nueve euros con el de un tuit publicado el pasado mes de junio en su cuenta oficial por la Comunidad de Madrid. El tuit vio la luz una vez trascendió que la Fiscalía Europea acababa de decretar la apertura de una investigación que sigue abierta.

El depósito de las cuentas de 2020 en el Registro Mercantil aparece fechado después de que la Fiscalía Europea iniciara sus diligencias de investigación. En cambio, Air Global Media SL asegura tajante que las entregó en julio de 2021. Un certificado del Registro Mercantil niega que estuvieran ya presentadas el 27 de abril de 2022, día en que Unidas Podemos formuló su denuncia. Pero el propietario de la empresa envió a infoLibre un documento según el cual las cuentas de 2020 se depositaron el 23 de junio de 2021.

Según el texto, de apariencia veraz aunque no ha podido corroborarlo este periódico en el Registro, un error en la fecha de la junta de accionistas –el mayoritario y sus hijos– condujo el balance de vuelta a la gestoría encargada de la tramitación. Y, por tanto, a un segundo depósito, ya datado el 2 de septiembre de 2022.

Centrada en el también empresario Óscar Leyva, supuesto responsable de la organización de vuelos desde China para transportar material sanitario –vuelos todavía envueltos en la niebla del misterio– y vinculado a la Fórmula 1 la denuncia de UP conecta con ese marco a Air Global Media, cuya principal área había sido la esponsorización y el marketing.

Unidas Podemos cree que varios hechos alimentan las dudas sobre el accionista mayoritario de Air Global, cuyo nombre omite a petición suya infoLibre porque, según el relato que traza, vive habitualmente en un país donde su seguridad no está garantizada. Y esos hechos pueden resumirse así: que Air Global Media nunca tuvo por objeto el suministro de material sanitario, aunque su propietario sostiene que opera en ese sector en países dispares como Lituania o Venezuela; que su dueño apareciese, como Óscar Leyva, vinculado a la Fórmula 1 y que en la primavera de 2022 siguieran sin conocerse sus cuentas de Air Global para 2020. La denuncia expresa la sospecha de que Air Global pudo ser utilizada como “sociedad instrumental” para hacerse con grandes contratos durante la pandemia.

El propietario de Air Global niega todo lo anterior: asegura que lo captó como potencial suministrador la subdirectora general de contratación del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), Susana Álvarez Gómez. En un email datado el 18 de marzo de 2020, la directiva le comunicaba que le habían mandado su dirección informándola de que el empresario podía tener material sanitario. ¿Y quién y por qué le dio su contacto? El dueño de Air Global responde que nunca lo supo. Señala que sí conoce a Óscar Leyva por la relación de ambos con la Fórmula 1 pero agrega que no han visto ni hablado en al menos una década. La Fiscalía Europea –sostiene él mismo– no le ha localizado ni contactado en ningún momento. Fuentes de Unidas Podemos aseguran que la investigación sigue abierta.

"Indicios suficientes"

Para la coportavoz de UP y candidata de Podemos a la Presidencia de Madrid, Alejandra Jacinto, lo sucedido con el informe de la Cámara de Cuentas destapa “la opacidad del Gobierno regional

y las maniobras para borrar el rastro y ocultar documentación esencial para la fiscalización de los contratos de emergencia celebrados durante la pandemia”. Y todo ello -añade- conforma una serie de “indicios suficientes para que la Fiscalía investigue lo ocurrido con los contratos de emergencia durante la pandemia”.

“Esperamos –subraya– que el Gobierno Regional no trate de obstaculizar la investigación de la Fiscalía Europea y se pueda determinar si en este caso, hubo irregularidades y posible desvío de fondos públicos en lo que se refiere a este contrato”. La diputada autonómica, cuya opinión requirió infoLibre tras averiguar del rumbo del fallido contrato de guantes adjudicado a Air Global Media, remachó que “necesitamos y merecemos un Gobierno regional transparente”. “Y desde luego -ese fue su diagnóstico- sobre el que no pueda haber sombra de duda sobre irregularidades sistemáticas en la contratación pública”.

Ante la pregunta de si la investigación sigue abierta, fuentes jurídicas de Unidas Podemos aseguran que, sus interlocutores en la Fiscalía Europea les comunicaron que, en caso de cerrarse, serán los denunciadores los primeros en recibir tal notificación. A fecha del pasado viernes, no se había producido ninguna notificación.

https://www.infolibre.es/politica/agujero-contable-millones-alimenta-dudas-contratos-emergencia-madrid-pandemia_1_1370457.html

AYUSO ADJUDICÓ EL TRANSPORTE DE SANITARIOS A TRES EMPRESAS VTC PRESIDIDAS POR LA MISMA PERSONA

Dos millones de euros por transportar a los sanitarios de centro de salud en centro de salud. Es el contrato que la Comunidad de Madrid adjudicó a tres empresas de vehículos con conductor (VTC) presididas por la misma persona: José Antonio Parrondo, un extaxista con miles de licencias de vehículos con conductor bien relacionado con el Partido Popular. El atasco de las urgencias extrahospitalarias madrileñas se vive también en las carreteras. Hasta tres ambulatorios en la misma guardia, ya la conocen como la ‘Ruta turística sanitaria’.

La Comunidad de Madrid adjudicó el 31 de enero de 2022 a tres empresas VTC los contratos de ‘Servicio de movilidad por medio de vehículos con conductor del personal sanitario dependiente de la Gerencia Asistencial de la Comunidad de Madrid’ cuyo presupuesto base de licitación asciende a 1.977.300,01 euros por dos años. Zater Transportation Services 1525 SL se llevó el lote de la zona centro por 229.680 euros. La empresa Autos Lavapiés S.L, se hizo con el servicio de la zona oeste, sur y sureste por 578.000 euros. Y el montante más jugoso se lo llevó Auro New Transport Concept S.L: 731.451,60 por el área este, norte y noreste, según documento oficial de la CAM al que ha tenido acceso Crónica Libre.

Tres empresas diferentes pero con la misma sede y presididas por la misma persona

Se trata de José Antonio Parrondo, presidente de la Asociación Gremial del taxi de Madrid hasta que decidió reconducir su vida haciéndose con miles de licencias VTC. Los taxistas lo consideran un “traidor” por especular con algo que puede acabar con su negocio.

Además de presidir estas tres empresas, José Antonio Parrondo está al frente también de Unauto VTC Madrid, la delegación regional de la asociación mayoritaria en el sector de alquiler de vehículos con conductor. Unauto VTC España está presidida por José Manuel Berzal Andrade, exconcejal del Ayuntamiento de Madrid en las etapas de Alberto Ruiz Gallardón, Ana Botella y con José Luis Martínez Almeida. Berzal Andrade ha sido además diputado en la Asamblea de Madrid con Ruiz Gallardón y en la legislatura 2015-2019 con Ángel Garrido. José Manuel Berzal Andrade tiene un hijo, Alberto, que es amigo íntimo y socio de José Antonio Parrondo, el hombre al que Ayuso le ha concedido la exclusividad del transporte de sanitarios en la Comunidad de Madrid.

“Este transporte lo ha hecho históricamente el taxi a través de Pidetaxi o por las diferentes radioemisoras”, explica Santiago Simón Vicente, de la Federación Profesional del Taxi de Madrid. “Estos servicios en concretos no se cobraron durante el tiempo de confinamiento y se devolvieron a la Administración unos 400.000 euros”.

Es la manera en la que la Comunidad de Madrid agradece el trabajo desinteresado que hicieron los taxistas al principio de la pandemia, en los tiempos más difíciles. “Si entramos en detalles en la licitación podemos afirmar que se los iban a adjudicar a las VTC sí o sí. No cumplían los requisitos técnicos de los vehículos ni tenían la autorización de transporte para hacer servicios urbanos y aun así se asignaron estos servicios a las VTC a pesar de que el presupuesto que se manejaba para el taxi era muchísimo más bajo que para las VTC. Todo esto se recurrió al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y no valió de nada”, añaden desde la federación de taxistas.

Dos millones para tres empresas VTC con la misma sede

“El servicio se prestará habitualmente de lunes a viernes no festivos, en horario de 8:00 a 21:00 horas, siendo posible la petición en sábados, domingos y festivos por el personal que trabaja en los Servicios de Asistencia Rural y PAC”, especifica el pliego publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 15 de junio de 2020.

Ya entonces se recoge el término PAC, Punto de Atención Continuada, que es el nombre con el que se denominan ahora los centros de salud. Hay que destacar que las urgencias extrahospitalarias estuvieron cerradas desde marzo de 2020 hasta finales de octubre de 2022. Pero en junio de 2020, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ya tenía previsto este plan.

Un traje a medida para las VTC

La presidenta de la Comunidad de Madrid no ha ocultado nunca su apoyo a las empresas de Vehículos de Transporte con conductor. En enero acudió a un acto de Uber, a quien agradeció “el esfuerzo por conseguir un modelo de convivencia entre el VTC y el taxi”. En junio, la Comunidad de Madrid aprobó la modificación de la ley de transportes para que los VTC operaran con normalidad por toda la Comunidad de Madrid gracias a la creación de una autorización para la actividad de arrendamiento de coches con conductor.

Ya entonces, desde la Federación Profesional del Taxi de Madrid se dijo que esta ley era “un traje a medida” para las VTC, llegando a señalar que “quizás el hermano de Ayuso o alguien de su familia ha pillado alguna cuestión más”.

<https://www.cronicalibre.com/investigacion/ayuso-adjudico-el-transporte-de-sanitarios-a-tres-empresas-rtc-presididas-por-la-misma-persona/>

AYUSO REGALA DOS PARCELAS PÚBLICAS VALORADAS EN 11 MILLONES DE EUROS PARA CONSTRUIR COLEGIOS CONCERTADOS: "SU LIBERTAD ES UN DESPROPÓSITO"

Serán los primeros centros concertados que se construyen desde 2013 y se encuentran en zonas donde hay escasez de públicos o estos están sin terminar

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue manteniendo el pulso a lo público, también en el aspecto educativo. Si hace unos días EIPlural.com contaba que el profesorado de FP advertía de la posibilidad de movilizarse ante la gestión de la líder regional sobre los docentes de grado, la responsable de Sol ha vuelto a dar de qué hablar después de ceder a coste cero y por valor superior a 11 millones de euros dos parcelas públicas para la construcción de dos colegios concertados. Serían los primeros centros de estas características que se hacen en la capital desde 2013, según adelantaba El País.

El primero de los lugares está previsto que se edifique en el barrio de Valdefuentes, en el distrito de Hortaleza (Valdebebas). Tiene un tamaño de 18.838,4 metros cuadrados y está valorado en 10.377.547,08 euros, según el convenio que Ayuntamiento y autonomía firmaban en el mes de mayo y que recoge el medio mencionado. La segunda de las parcelas se encuentra en el distrito Villa de Vallecas, tiene unas dimensiones superiores a los 13.450 metros y está valorada en 1.540.103,14 euros.

Más de 23.000 alumnos con “necesidades educativas” y centros públicos sin terminar

La decisión del equipo regional ha provocado un nuevo levantamiento de los sindicatos educativos, que claman contra la decisión última del departamento de Enrique Ossorio. En declaraciones llegadas a este medio, las organizaciones sostienen que estas concesiones atentan contra el sistema educativo público y nadan en agua de la privatización por la que apuesta el PP, como se ha visto últimamente en el sistema sanitario.

Comisiones Obreras (CCOO) lamenta que en Villa de Vallecas y Valdebebas hay más de 23.000 niños y adolescentes de entre 0 y 18 años con “necesidades educativas urgentes” y aún centros públicos sin terminar como son el CEIP Valdebebas y el Nuria Espert en el caso del segundo distrito.

Aunque en el primero la situación no es muy diferente. Los 50.000 habitantes del Ensanche solo cuentan con el instituto público María Rodrigo. El centro, lamentan desde la organización sindical, está “saturado”, lo que provocó que en el proceso de escolarización de 2021 se quedaran sin plaza el 42% de las familias que la solicitaron.

Supresión de aulas

Desde el sindicato se refieren también a la supresión de aulas que la Comunidad de Madrid llevó a cabo durante el proceso de escolarización 2022-2023. En concreto, en los dos distritos en los que se pondrá en funcionamiento estos centros concertados se suprimieron unas 35 aulas.

En la información remitida a EIPlural.com, CCOO revela que en Villa de Vallecas el número fue entonces de 8,5 aulas y en Valdebebas de un total de 27 (22 en Hortaleza y 5 en Barajas).

Situación público-concertada en Madrid

Un estudio realizado por UGT ahonda en la idea de la desigualdad educativa existente en la Comunidad de Madrid y de que esa “libertad” que abandera Ayuso no se traduce tampoco en la capacidad para escoger centro, sino en un “despropósito” educativo.

El análisis llevado a cabo por el sindicato y que se remonta a 2020 refleja que la Comunidad cuenta con 362 centros públicos y 434 concertados. Las cifras vienen dadas como cómputo general fruto de lo complicado que resulta llevar a cabo un estudio de este tipo, ya que los centros públicos separan las enseñanzas de Infantil y Primaria de la de Secundaria; mientras que los concertados aglutinan todas. En cualquier caso, tomando como objeto de comparación el número de Institutos de ESO al que se encuentran adscritos todos los centros de Infantil y Primaria, el resultado sería ese.

Asimismo, ciñéndose exclusivamente al caso de Madrid Capital, el 43% de los centros son públicos por el 56% concertados en Infantil y Primaria. El mismo porcentaje es de un 37% frente a un 63% en Secundaria.

Contra la LOMLOE

Tampoco es ningún secreto que la presidenta de Madrid mantiene su particular cruzada contra la LOMLOE. Siguiendo esa senda, precisamente los sindicatos se quejaban esta misma semana de que la consejería popular aún no había puesto en marcha el proceso recogido en el Real Decreto Ley que permite a los docentes beneficiarios de FP pasar del subgrupo funcional A2 al A1, lo que en la práctica se traduce en mejores condiciones laborales como la subida salarial de cerca de 200 euros.

Con la cesión de terreno expuesto en estas líneas, la presidenta madrileña podría estar incumpliendo la Ley Celaá al “regalar suelo público para construir centros privados”, así como su propia normativa Maestra “al imposibilitar la libertad de elección de enseñanza pública y limitarla a la enseñanza concertada”, según expone CCOO. Desde UGT se muestran algo más cautos y detallan que el hecho sí es legal, pero que obedece a una encrucijada perpetrada entre Comunidad y Ayuntamiento, dado que el Consistorio de José Luis Martínez-Almeida ha cedido el suelo a la autonomía y el texto no prohíbe explícitamente la operación para las comunidades.

https://www.elplural.com/autonomias/madrid/ayuso-regala-parcelas-millones-colegios-concertados-libertad-desproposito_301269102

AYUSO CONSTRUIRÁ SEIS QUIRÓFANOS EN EL ZENDAL DOS AÑOS DESPUÉS DE SU INAUGURACIÓN

La Comunidad de Madrid quiere que el Zendal absorba parte de los pacientes del hospital de La Paz cuando empiecen las obras de remodelación

Cuando Isabel Díaz Ayuso inauguró el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal hace ahora dos años, una de las polémicas fue descubrir que el edificio carecía de quirófanos. La Comunidad de Madrid se había gastado el triple de lo presupuestado para levantar un centro sanitario en tiempo récord, pero se había olvidado de los quirófanos pese a que Ayuso aseguró que serviría en un futuro para atender a pacientes de catástrofes como un accidente aéreo. El Gobierno regional ha anunciado ahora que construirá seis quirófanos para que pueda ser uno de los centros a los que se deriven los pacientes del hospital La Paz ahora que va a ser reformado.

El enclave situado en Valdebebas, al norte de Madrid, para combatir la Covid, nunca se utilizó al completo –se anunciaron 1.000 camas y solo se llegaron a abrir unas 500 en su pico de ocupación–. Y lleva más de un año con una ocupación casi testimonial de pacientes a pesar de que cuesta varios millones de euros cada año conservarlo. Como informaba elDiario.es hace un año, llegó a tener más de 400 sanitarios para apenas 38 pacientes.

La baja ocupación y el alto coste de la infraestructura ha sido criticada constantemente por oposición y sanitarios que siempre han defendido que se ha tratado de un proyecto propagandístico para tapar la “nefasta” gestión de la pandemia. Ahora, Ayuso ha encontrado una función que permita mantener abierto su medida estrella desde que es presidenta: será uno de los varios centros que acojan pacientes del hospital de La Paz ahora que va a ser remodelado. Y para ello, resulta imprescindible construir quirófanos.

No son las únicas obras que deben hacerse para que sea un hospital operativo. También deben habilitarse consultas externas y usos administrativos, al mismo tiempo que se crearán los seis quirófanos que incluyen cirugía robótica y quirófano híbrido, puestos de recuperación postanestésica y conexión a la Unidad de Críticos existente que será la futura reanimación, módulos de hospitalización de media estancia y la instalación de áreas de los servicios de Genética y Farmacia. “Estos quirófanos resultan de gran importancia para poder realizar cirugías del Hospital La Paz el tiempo en el que se construya el nuevo módulo quirúrgico”, informan desde la Consejería. Preguntada por cuál va a ser el coste de estas obras, desde el departamento de Enrique Ruiz Escudero no saben responder.

Levantar el edificio ubicado en el norte de la capital, en Valdebebas, junto a la polémica Ciudad de la Justicia que se encuentra a día de hoy en los tribunales, costó a las arcas públicas más de 170 millones de euros, más del triple de lo presupuestado inicialmente. Los sobrecostes del Zendal, solo en lo que se refiere a las obras de construcción, asciendieron al 170% del total. El edificio sanitario carece de habitaciones, se trata de un espacio diáfano en el que se comparten los baños y tampoco hay cocinas. A esos 170 millones deben sumarse otros más que se han destinado para el mantenimiento de la infraestructura.

https://www.eldiario.es/madrid/ayuso-construira-seis-quirofanos-zendal-anos-despues-inauguracion_1_9721176.html

LA CRISIS DEL ZENDAL, EL HOSPITAL MILAGRO DE AYUSO: 177 PROFESIONALES PARA ATENDER A 49 PACIENTES

En el primer semestre del año hubo al menos 40 jornadas sin nuevos ingresos en el centro, que desde abril tiene una media de un caso al día. La Comunidad gastará dinero en reformarlo para darle un cometido mientras duran las obras de La Paz

Los más de 150 millones de euros que costó levantar el Hospital Enfermera Isabel Zendal apenas sirven hoy para acoger a 49 pacientes ingresados en la unidad de rehabilitación funcional (URF), según los datos del propio centro. Ese balance resume la crisis del hospital milagro de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que atendió a más de 10.000 pacientes durante lo peor de la pandemia y ahora languidece mientras se suceden las propuestas para justificar su existencia. Desde el 11 de abril, cuando empezó a funcionar la URF, solo han pasado 225 pacientes por unas instalaciones en las que no hay otro tipo de hospitalizados. Eso equivale a 32 pacientes al mes, y a apenas uno al día de media. Y como eso es insostenible, la Comunidad busca cómo dotar de sentido a esos 80.000 metros cuadrados casi vacíos: pese a que la infraestructura se inauguró tan recientemente como en diciembre de 2020, el Gobierno volverá a gastar dinero en 2023 para habilitar consultas, seis quirófanos o puestos de recuperación con los que atender a los pacientes que se derivarán al Zendal mientras duren las obras en el Hospital de La Paz, según avanza una fuente del Gobierno autonómico.

“Es un escándalo”, se queja José Manuel Freire, profesor emérito del departamento de Salud Internacional de la Escuela Nacional de Sanidad, exdiputado del PSOE y exconsejero de Sanidad del País Vasco. “Quieren mantener abierto a toda costa el centro porque cerrarlo dejaría al descubierto, aún más, el sinsentido de esta instalación. No saben a qué destinarla”, lamenta en mitad de la crisis sanitaria de Madrid, que ha provocado dos huelgas de médicos y una multitudinaria manifestación en protesta por la falta de recursos humanos y económicos.

27 de octubre. El municipio de Ordes, en Galicia, se ha engalanado para recibir una visita muy esperada. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha viajado hasta allí para conocer el lugar en el que nació la enfermera que da nombre al hospital de emergencias que ella ha convertido en el símbolo de su mandato. Es la última acción de propaganda alrededor de una infraestructura que es el ojito derecho de la líder conservadora, y que ha costado el doble de lo que se planificó y el triple de lo que se presupuestó originalmente. Pero cuando se apagan los focos que acompañan a los actos de la presidenta, la realidad es muy distinta.

Un día cualquiera de noviembre, los ventanales de la fachada principal del Zendal dejan ver los andamios y restos de obra que permanecen apilados en su interior. El reclamo de la vacunación para la covid, que mantiene movilizados en el centro a seis enfermeras y seis técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, no conlleva ningún tipo de cola. Contra el viento aletean las cintas extendidas para organizar filas inexistentes, ya que apenas se cruzan dos parejas en la puerta. Un solitario taxi se aleja por una ancha avenida sin ningún tráfico. El parque que rodea uno de los lados del centro está vallado, lo que impide su uso. En consecuencia, el silencio que reina en el barrio de Valdebebas, en el distrito de Hortaleza, solo se ve interrumpido de vez en cuando por las pisadas de algún corredor solitario, y el ruido de la maquinaria que se emplea para construir un cercano intercambiador para el transporte público.

Hasta el 26 de octubre, ese fue el entorno laboral de la enfermera Marisa Santiago en el dispositivo de vacunación del Zendal, donde fue trasladada cuando cerraron el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) al principio de la pandemia. En su último día de trabajo antes de ser movilizada para ocupar su plaza en un centro de urgencias extrahospitalarias asegura que había en el centro 14 pacientes ingresados, en su mayoría personas mayores con “patologías provocadas por un ictus o algo similar”. “Allí ya no hay gente con covid, sino personas que están esperando plaza para ir al Hospital Cantoblanco, por ejemplo, donde les hacen la rehabilitación. Mientras, en el Zendal están atendidos, sobre todo por enfermeras y auxiliares”, explica sobre un dispositivo formado por 144 sanitarios, 17 celadores, 12 administrativos y una gobernanta, más otros profesionales (hasta un total de 177).

Santiago describe el ambiente en el hospital de pandemias como si hubiera estado en un programa de Gran Hermano. Hay cámaras por todas partes y no pueden salirse de la zona asignada. Si los trabajadores se equivocan y se encuentran fuera “del circuito que le toca a cada uno”, enseguida aparece un miembro de seguridad y les pregunta qué hacen ahí. Tampoco pueden sacar fotografías a los carteles y como consecuencia se sienten completamente vigilados. Ahora mismo, añade, en el pabellón tres hay un dispositivo de vacunación para inocular la cuarta dosis a los sanitarios, “pero se encuentran bastante aburridos, porque no va nadie”.

Es la consecuencia de la falta de pacientes para una infraestructura que los expertos definieron con palabras gruesas desde el principio: “Esta operación solo puede entenderse desde la política y la imagen. Es básicamente incomprensible desde la perspectiva de gobernanza y gestión de la sanidad”, llegó a decir José Ramón Repullo, profesor de planificación y economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad.

Desde su inauguración, en diciembre de 2020, el hospital ha atendido a más de 10.000 pacientes, lo que descargó de trabajo al resto de centros durante lo peor de la pandemia. Sin embargo, entre el 1 de enero y el 31 de mayo, el Zendal apenas contabilizó 1.048 ingresos, una media de poco más de 200 al mes. Así, entre principios de marzo y finales de mayo hubo 39 jornadas sin ningún ingreso nuevo en este centro de 80.000 metros cuadrados, según datos obtenidos por EL PAÍS en aplicación de la ley de transparencia. En ese periodo de tiempo, hubo un día con solo nueve hospitalizados (el 11 de abril) y 27 en los que no se alcanzó la veintena.

Entonces, ¿para qué sirve un hospital de pandemias cuando no hay pandemias? Responder a esa pregunta ocupa al Gobierno desde hace meses. Se ha intentado de todo. Señal de que el uso futuro de la infraestructura parece incierto.

Así, el Zendal ha sido, y es, centro de vacunación contra el coronavirus (aquí se han puesto más de dos millones de dosis) y la viruela del mono. También ha sido punto de acogida para los refugiados de la invasión rusa de Ucrania. Se ha usado como centro logístico para almacenar y organizar todo el material donado a este país; o como sede del centro coordinador del Summa 112, que también derivó allí a una parte de sus profesionales de los SUAP cuando cerraron durante la pandemia; y como Laboratorio Regional de Salud Pública. Y ahora se ha pensado en él como el hospital perfecto al que derivar pacientes de La Paz cuando comiencen las obras de remodelación de este centro.

Pero llegará el día en el que acaben esas obras y el Zendal vuelva a quedarse vacío. Y por eso el futuro no está claro. El equipo de Ayuso, que no respondió a las preguntas de EL PAÍS, sigue pensando en posibilidades para llenar de contenido estable y continuo la infraestructura. Hasta ahora solo ha echado raíces la unidad de rehabilitación funcional: 49 pacientes en un edificio de 80.000 metros cuadrados que esperan la futura llegada de los pacientes derivados desde La Paz.

<https://elpais.com/espana/madrid/2022-11-17/la-crisis-del-isabel-zendal-el-hospital-milagro-de-ayuso-150-millones-para-atender-a-49-pacientes.html>

LA CRUZ DEL VALLE DE LOS CAÍDOS: UNA “FANTASÍA” DE AYUSO QUE EXCEDE SUS COMPETENCIAS

El PP utiliza la reforma de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid para tratar de desactivar la de Memoria Democrática

Ocho años después de que el Tribunal Constitucional tumbara la reforma de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid de 2013, los sucesivos gobiernos del PP al frente del Ejecutivo regional no se han hecho cargo de la obligada reforma. El organismo sentenció que ocho de los artículos no cumplían con la Constitución. El pasado 19 de octubre, por sorpresa, el Consejo de Gobierno aprobó el inicio de los trámites legislativos con un nuevo título: Ley de Patrimonio Cultural, en lugar de Patrimonio Histórico. Este ánimo de urgencia de puesta en marcha de la reforma contradice la declaración de la consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, que en junio afirmó que no iba a salir en esta legislatura. Por lo que ha podido conocer este periódico, el PP no se sintió cómodo con esta afirmación y a la vuelta de vacaciones activó la reforma de la modificación fracasada.

Este jueves se cerró el plazo de presentación de enmiendas y ahora comienza el debate del texto, que tiene un objetivo: la defensa de la cruz del Valle de los Caídos por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La polémica se sitúa en el artículo 73c, donde aparecen enumerados los bienes que forman parte del patrimonio etnográfico de la Comunidad a proteger: “La arquitectura religiosa, incluyendo los calvarios tradicionales y las cruces, así como los elementos decorativos

y bienes muebles relacionados directamente con el bien patrimonial a proteger”, señala la propuesta. Esas cruces y calvarios se refieren al Valle de los Caídos.

Sin embargo, desde el PSOE aclaran que la referencia a esas cruces corresponde a las llamadas “cruces de término” que se sitúan en algunos parajes para señalar límites. “La cruz del Valle de los Caídos no es una cruz de término”, indica un informe interno de los socialistas. Y por lo tanto no se puede proteger según lo dispuesto en el Decreto 571/1963. Y en caso de conservarla “habría de ser protegida por el Estado, nunca por la Comunidad de Madrid”. “En conclusión, la invocación de una competencia autonómica sobre el Valle de los Caídos es una fantasía sin fundamento. Lo único que podría hacer la comunidad autónoma para protegerlo sería solicitar al Estado su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), decisión que el Estado tiene libertad de adoptar o no”, concluye el informe. Los socialistas madrileños restan importancia a las intenciones de Díaz Ayuso y creen que es “un farol para hacer daño en una herida que otros estamos tratando de sanar”.

Vox ha reclamado a Ayuso que evitara la retirada, destrucción o eliminación de los símbolos que vayan a ser censurados por la Ley de Memoria Democrática, “con el fin de preservar intacto el patrimonio histórico nacional” y promover “la incoación del procedimiento para la declaración de Bien de Interés Cultural de los bienes referidos”. El PP está convencido de que del conjunto del Valle de los Caídos, propiedad de Patrimonio Nacional, el único elemento sobre el que puede actuar es la cruz.

Desde Más Madrid aseguran que con esta ley, la Comunidad de Madrid “vuelve a invadir competencias”. “Esta ley es mejor que la de 2013, pero está lejísimos de estar bien. Hay competencias que invade. Creo que las enmiendas van a servir y los artículos que invaden competencias estatales van a desaparecer”, indica Alicia Torija, diputada en la Asamblea por Más Madrid, que recuerda que desde 2014 la Comunidad de Madrid no invierte en patrimonio cultural el 1% de cada obra pública.

Fuera de la Asamblea tampoco están contentos con el anteproyecto. El Comité Nacional Español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) ha escrito un informe en contra de esta reforma. “El enfoque del anteproyecto es poco actual. No contempla la conservación preventiva, ni las emergencias, ni el control de riesgos, ni el turismo cultural, ni la inclusión social, ni las comunidades patrimoniales, ni la digitalización del patrimonio, ni los objetivos de desarrollo sostenible, ni el cambio climático”.

Modus operandi

El patrimonio es la puerta por la que el PP ha colado sus posiciones identitarias, al menos, desde 2015. Aquel año, con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, aprobó la Ley de Patrimonio Cultural Inmaterial para proteger la tauromaquia. Solo fue respaldada por los votos del PP y fueron criticados por pretender apropiarse de competencias autonómicas para detener la prohibición de las corridas de toros en todo el país, después del paso adelantado por Catalunya. “Lo que pretenden es secuestrar, para mayor gloria de sus intereses ideológicos, la riqueza intangible y cognoscible”, dijo Ascensión de las Heras (Izquierda Plural) a José Ignacio Wert, entonces ministro de Educación y Cultura.

Desde 2013 justificaban esta protección con el argumento de la necesidad de ampliar el concepto de bien cultural inmaterial, porque la definición era insuficiente. La oposición en bloque acusó al Gobierno de Rajoy de suplir las competencias de las comunidades autónomas, que Wert negó. “Se ha redactado desde el más escrupuloso respeto” a los preceptos constitucionales, dijo. Y la tauromaquia quedó reconocida y protegida como Bien de Interés Cultural Inmaterial. “Sospechamos, y de forma fundamentada, aunque sea negado por el Gobierno, que el proyecto pretende imponer nuevamente la tauromaquia en territorios cuyo parlamento ha decidido excluir claramente dicha práctica”, concluyó la entonces portavoz de CiU, Montserrat Surroca.

Especular con el patrimonio

Un año antes, en 2012, Esperanza Aguirre puso en marcha la reforma de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid por sorpresa. No figuraba en el programa con el que habían ganado las elecciones autonómicas y no lo esperaban ni en la Dirección General de Patrimonio, como pudo descubrir este periódico. Pero en septiembre de ese año la maquinaria legislativa se

puso a pleno rendimiento para tener lista una ley en tres meses. Gracias a la reforma de la Ley de Patrimonio, Juan Miguel Villar Mir, dueño de OHL, pudo destruir siete edificios históricos del conjunto de Canalejas (en Madrid) y agruparlos en un único solar. Esta opción estaba prohibida hasta que se aprobó la nueva ley ordenada por Aguirre unos meses antes de presentar su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid y unos meses después de vender un cuadro de Goya por cinco millones de euros a Villar Mir, que sacó de la bancarrota a la familia Aguirre.

La modificación de la ley era la clave de toda la operación Canalejas: había que invertir el artículo 23, el que prohibía la agrupación de los bloques. Con la nueva redacción Villar Mir tuvo luz verde para derribarlo todo y levantar “la manzana del lujo” en la ciudad. El responsable de la redacción técnica de la nueva norma fue Luis Lafuente, actual director de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid y responsable de la instalación de la estatua del legionario de José Luis Martínez-Almeida, en la Castellana.

Iniciativas inconstitucionales

Un año después de la reforma de la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales ocho de sus artículos. El citado 23 entre ellos. Pero ya era demasiado tarde para el conjunto histórico de Canalejas. El Constitucional sentenció contra la reforma por querer legislar por encima de las competencias estatales en la protección del patrimonio histórico y artístico español. “Esta ley responde a las fuertes presiones inmobiliarias, perfectamente alineados con la política”, explicó en aquel momento Javier García Fernández, jurista autor del recurso contra la reforma, catedrático en Derecho Constitucional, padre de la Ley de Patrimonio Histórico de 1985 y, años más tarde, responsable del patrimonio con los ministros José Guirao y José Manuel Rodríguez Uribes.

García Fernández insistió en que aquella ley fue “el acontecimiento más grave” que había ocurrido durante la democracia en el campo de la protección de los bienes culturales. El fallo del TC aclaró que es competencia del Estado establecer las condiciones que determinen la calificación de Bien de Interés Cultural (BIC) y defender al patrimonio contra la expoliación. El TC especificó que con la ley la Comunidad de Madrid interfiere “claramente en un ámbito que está reservado al Estado”. El jurista García Fernández llamó la atención sobre “la especial habilidad” que existe en la Comunidad de Madrid para “regular la desprotección jurídica de los bienes culturales más importantes”.

https://www.eldiario.es/politica/cruz-valle-caidos-fantasia-ayuso-excede-competencias_1_9723995.html

EL GOBIERNO RECHAZA DECLARAR EL VALLE DE LOS CAÍDOS BIEN DE INTERÉS CULTURAL: “NO TIENE SUFICIENTE RELEVANCIA”

El Ministerio de Cultura considera que la construcción que durante décadas ofició de mausoleo de Franco no es un monumento arquitectónico de singular importancia “ni por su planta, ni por la figura del arquitecto, ni por la técnica constructiva, ni tampoco por los materiales empleados”

La que fue la tumba monumental de Francisco Franco no pasará a integrar la lista de los más de 30.000 Bienes de Interés Cultural de España. En una carta que el Ministerio de Cultura ha enviado este jueves a la Fundación para la Defensa del Valle de los Caídos, el director de Patrimonio Cultural y Bellas Artes informa que han decidido no incoar el expediente de declaración BIC del conjunto arquitectónico situado en San Lorenzo del Escorial (Madrid).

La asociación, que se constituyó en 2010 y ha sido protagonista de muchas de las numerosas disputas judiciales alrededor del Valle desde entonces, había solicitado la declaración de BIC en julio de 2014. Ocho años después, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha obligado al Ministerio, a través de una sentencia dictada el pasado 16 de junio, a pronunciarse sobre esta petición.

La respuesta es contundente: no hay elementos que justifiquen el inicio de un proceso de declaración de Bien de Interés Cultural. Y basa su rechazo en tres argumentos.

“Ausencia de interés”

Primero, señala que la construcción ha efectuado “una alteración notable del entorno natural sin haber previsto las consecuencias que la intervención podría causar en las condiciones medioambientales”. A ello adjudica que se hayan perdido “los valores paisajísticos y medioambientales del valle de Cuelgamuros”.

En cuanto a su importancia desde el punto de vista arquitectónico, el Ministerio entiende que “las aportaciones arquitectónicas exteriores, más allá de su carácter simbólico y político, no poseen suficiente relevancia en el contexto de la producción de la época”. Y abunda en esta idea: “No se trata de un monumento arquitectónico de singular importancia ni por su planta, ni por la figura del arquitecto, ni por la técnica constructiva, ni tampoco por los materiales empleados”.

Para terminar, destaca que “se percibe en la construcción (...) una ausencia de interés compositivo en cualquier dependencia o espacio alejado de la visión pública”.

Por todas estas razones, descarta que el conjunto monumental pudiera estar incluido entre los que se encuentran especialmente protegidos. La asociación se ha opuesto a todas las intervenciones que se han planificado en el Valle de los Caídos, y ha alzado la voz contra la salida del dictador Francisco Franco y también contra las exhumaciones de víctimas que están enterradas en Cuelgamuros.

Ya con la ley de Memoria Histórica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se comenzó a hablar de una resignificación del Valle de los Caídos, que desde su inauguración ha funcionado como un símbolo del poderío franquista. La nueva Ley de Memoria Democrática, que previsiblemente será aprobada en los próximos días, habla específicamente de transformar el espacio y su significado, extingue la fundación que ha gestionado el lugar gracias a un decreto franquista y señala la necesidad de trasladar los restos de José Antonio Primo de Rivera de la tumba en la que reposa, en un “lugar preeminente” de la basílica del Valle.

La sentencia que exige la respuesta

La sentencia del TSJM ha empujado la decisión del Gobierno, ya que estima “parcialmente el recurso contencioso-administrativo” de la asociación y condena a la Administración a que “resuelva sobre la iniciación del procedimiento de que se trata y notifique su decisión a la asociación recurrente”.

Sin embargo, no entra a considerar cómo debe ser esa respuesta ni los argumentos aportados por la asociación para pedir el BIC. De hecho, admite que muchas veces las solicitudes “supervaloran” lo que “una simple observación” llevaría a los especialistas a “descartar su interés histórico-artístico”. Pero el texto sí reconoce que “la Ley del Patrimonio Histórico Español exige, en su artículo 10, que se dicte y se notifique a quienes instaron la declaración”.

“La entidad demandante no es titular de un derecho subjetivo a la iniciación del procedimiento. En cambio, sí tiene un derecho a recibir una respuesta expresa y razonada sobre su solicitud, correlativo al deber de la Administración de decidir si incoa o no el procedimiento de que se trata, según hemos visto”.

La asociación puede recurrir la negativa del Ministerio. Y será un capítulo más en los recursos judiciales pendientes sobre este tema. Sobre todo desde la exhumación de Franco y tras la decisión –también con aval judicial– de recuperar los restos de las personas que han pasado enterradas junto al dictador y Primo de Rivera contra su voluntad. El pasado 21 de junio, el Tribunal Superior de Madrid estimó el recurso de la Dirección de Patrimonio y levantó las cautelares que pesaban sobre las obras necesarias para exhumar los restos de decenas de víctimas de la dictadura enterradas en el Valle, que habían sido paralizadas cautelarmente. Este tira y afloja ha llegado ya al Tribunal Supremo.

https://www.eldiario.es/politica/cruz-valle-caidos-fantasia-ayuso-excede-competencias_1_9723995.html

AYUSO SE ABRE A BLINDAR EL VALLE DE LOS CAÍDOS FRENTE A LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA, COMO RECLAMA VOX

La Comunidad comienza a tramitar este jueves una ley de patrimonio que establece la posibilidad de proteger, siguiendo criterios técnicos, las cruces y los elementos decorativos

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha abierto la puerta a blindar la integridad estructural del Valle de los Caídos, como le exige Vox desde hace semanas. La extrema derecha, único socio posible del PP en la región, reclama que se declare este complejo levantado por la dictadura franquista como Bien de Interés Cultural (BIC) para así impedir que se “resignifique” como “lugar de memoria democrática”, tal y como prevé la Ley de Memoria Democrática. Aunque Díaz Ayuso aduce que no tiene competencias para hacerlo, pues el conjunto pertenece a Patrimonio Nacional, su Ejecutivo cree haber encontrado una vía que puede garantizar que no se toque ni una sola piedra, según dos fuentes de su máxima confianza: la Ley de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, que ya se tramita en la Asamblea, y que incluye como bienes del patrimonio etnográfico “la arquitectura religiosa, incluyendo los calvarios tradicionales y las cruces, así como los elementos decorativos y bienes muebles relacionados directamente con el bien patrimonial a proteger”.

Sin embargo, matizan en el Ejecutivo, la decisión no está tomada: “Esa mención [en el articulado de la ley] a la protección de las cruces podría aplicarse a la Cruz del Valle de los Caídos, ubicada en San Lorenzo de El Escorial y gestionada por Patrimonio Nacional. En cualquier caso, como ocurre con la ley actual, el procedimiento reglado para la protección quedaría en manos de los técnicos, que tendrían que determinar el valor patrimonial de los bienes a proteger dentro de esta categoría”.

Concebido por el dictador Francisco Franco para inmortalizar su victoria en la Guerra Civil, el Valle de Cuelgamuros es también la tumba de miles de víctimas de la dictadura enterradas allí sin el consentimiento de sus familiares. En medio de la negociación para que el PP y Vox aprueben los Presupuestos de 2023, Rocío Monasterio, portavoz regional de la extrema derecha, ya puso sobre la mesa su petición de proteger el monumento de la dictadura durante un pleno de octubre. Este jueves, precisamente, la Cámara regional votará las enmiendas a la totalidad presentadas contra la ley de Patrimonio por la oposición de izquierdas (Más Madrid, PSOE y Podemos). Si la norma supera ese trámite, como es previsible, el Valle de los Caídos, con su basílica y su inmensa cruz, estará más cerca de blindarse contra cualquier cambio producto de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

El compromiso de Ayuso con el mantenimiento del complejo en su actual estado es conocido. En octubre contestó una carta que le había dirigido un representante de Manos Limpias asegurando que “nunca” dará permiso para demoler ni la cruz ni ningún otro elemento del Valle de Cuelgamuros, en caso de que el Gobierno quisiera llevar a cabo algún tipo de intervención más allá de la conservación en el complejo monumental, ubicado en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial, según publicó la web El Independiente.

Tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, la cartelería del Valle de los Caídos ya ha empezado a sustituirse por la de su nuevo nombre: Valle de Cuelgamuros. El Gobierno ultima el nuevo portal sobre el monumento, que incluirá toda la documentación reunida por expertos sobre su construcción y los traslados de restos (más de 33.000, el equivalente a la ciudad de Teruel), además de los discursos pronunciados durante la dictadura relacionados con el mausoleo y referencias a documentales y películas. Un decreto de próxima publicación establecerá el nuevo régimen jurídico del recinto y supondrá la salida de la comunidad benedictina que durante décadas ha dirigido el lugar. El plan de resignificación del monumento, iniciado con el traslado de los restos de Franco en octubre de 2019, culminará con un centro de interpretación, para lo cual el Gobierno prevé convocar un concurso de ideas.

<https://elpais.com/espana/madrid/2022-11-16/ayuso-se-abre-a-blindar-el-valle-de-los-caidos-frente-a-la-ley-de-memoria-democratica-como-reclama-vox.html>

AYUSO CONCEDE A VOX LA PROTECCIÓN DE LA CRUZ DE LOS CAÍDOS EN PLENO DEBATE PRESUPUESTARIO

Este jueves llega a la Asamblea la Ley de Patrimonio Cultural, cuyo articulado podría abrir la puerta a esta protección

En plena negociación de los últimos presupuestos de la en esta legislatura, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha atado una concesión destacada para Vox: la protección de la Cruz del Valle de los Caídos a través de la Ley de Patrimonio Cultural que este jueves comienza su tramitación en la Asamblea.

De acuerdo con el texto, que tiene como principal objetivo "adaptar y modernizar" la actual norma "a las últimas tendencias en materia de patrimonio cultural para mejorar la eficiencia y eficacia a la hora de garantizar la conservación y enriquecimiento de los bienes culturales regionales.

Para ello, se crea un nuevo tipo de patrimonio, el etnográfico, que incluye "todos los bienes muebles, inmuebles, inmateriales, espacios o elementos que constituyan testimonio y expresión significativos de la identidad, la cultura y las formas de vida tradicionales de la Comunidad de Madrid".

En esta línea, el proyecto de Ley, según ha podido saber este medio, incluye en su artículo 73c como bienes del patrimonio etnográfico "la arquitectura religiosa, incluyendo los calvarios tradicionales y las cruces, así como los elementos decorativos y bienes muebles relacionados directamente con el bien patrimonial a proteger".

Es precisamente esa mención a la protección de las cruces la que podría aplicarse a la Cruz del Valle de los Caídos, aunque el procedimiento reglado para llegar a tal fin quedaría en manos de los técnicos, que tendrían que determinar el valor patrimonial de los bienes a proteger dentro de esta categoría.

<https://www.epe.es/es/politica/20221116/ayuso-concede-vox-proteccion-cruz-caidos-madrid-78655288>

VARAPALO JUDICIAL AL PLAN DE AYUSO QUE PERMITÍA CONVERTIR REFUGIOS DE MONTAÑA EN NEGOCIOS EN LA SIERRA DE GUADARRAMA

El Tribunal Superior de Justicia anula parcialmente el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) que permitía, entre otras cosas, el desarrollo de competiciones deportivas en plena sierra madrileña. Medio Ambiente informa de que la sentencia "se refiere a artículos muy puntuales y menores que no afectan a su gestión diaria".

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado parte del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en el ámbito de la Comunidad de Madrid, aprobado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en 2020. La decisión judicial, que llega después de los recursos de Ecologistas en Acción y GRAMA, considera incompatibles con el medio ambiente algunas actividades incluidas en dicho plan y anula de manera parcial.

Entre ellas, destaca la anulación del artículo 38.1.p del PRUG que permitía el desarrollo de competiciones deportivas al considerar que es incompatible con los principios de protección de los parques nacionales. Así, el magistrado señala que sólo se permitirán eventos deportivos de manera excepcional y siempre que sean de baja incidencia ambiental.

También se echa para atrás el artículo 47.b, con el que la Comunidad de Madrid permitía la apertura de nuevas vías para la escalada, algo que no estaba permitido en el PRUG precedente.

Además, se anula el punto del plan que permitía practicar pernотaciones y vivac por encima de la cota de los 2.000 metros; así como la modificación realizada por el Ejecutivo madrileño que permitía el acceso público y el tránsito por todos los caminos y senderos del Parque Nacional, no sólo por los autorizados. Esta última cuestión obligaría a valorar todos los caminos y decidir cuáles deben ser renaturalizados o clausurados para evitar el deterioro del ecosistema.

Por último, se suspenden también las determinaciones del PRUG que permitían cambiar el uso de las edificaciones existentes en el interior del Parque Nacional. Esta cuestión, según denunciaron en su día los grupos ecologistas, podría permitir que algunas construcciones antiguas, como albergues o refugios de montaña, pudieran ser transformados en negocios de hospedaje y turismo, lo cual podría deteriorar el entorno.

El magistrado, de hecho, prohíbe expresamente el cambio de uso de los siguientes edificios: el refugio Coppel o Club Alpino Español, Venta Marcelino, Casa puerto de La Morcuera, Casas forestales de Canto Cochino (Manzanares el Real), refugio El Pingarrón (carretera de Valdesquí) y edificaciones ligadas al uso ganadero en El Jaralón y Las Hoyuelas (Soto del Real y Manzanares El Real).

Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción, celebra la decisión del TSJM y señala que está viene a certificar la desprotección que sufre la Sierra de Madrid. La conservacionista lamenta, no en vano, que sólo se haya anulado parcialmente el plan y recuerda que han quedado algunas cosas en el aire que deberían vetarse cuanto antes. "Nosotros pedimos que se incluya expresamente una prohibición a la caza en este espacio", remarca.

Esta sentencia no es firme y da un plazo de 30 días para recurrirla. Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente explican a Público que Comunidad de Madrid estudiará a fondo la sentencia que, según explican, "no anula el Plan Rector del PNSG y por lo tanto sigue vigente". "La sentencia se refiere a artículos muy puntuales y menores que no afectan a su gestión diaria y que se adaptarán", informan.

<https://www.publico.es/sociedad/varapalo-judicial-plan-ayuso-permitia-convertir-refugios-montana-negocios-sierra-quadarrama.html>

EL GOBIERNO DE AYUSO PAGA MEDIO MILLÓN A TELEMADRID POR PUBLICITAR SUS POLÉMICAS BECAS Y LA SEMANA DE LA HISPANIDAD

El Ejecutivo regional firma en octubre dos convenios que marcan los contenidos periodísticos de la compañía pública, controlada por el PP y Vox

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha acordado con Telemadrid (RTVM) el pago de más de medio millón de euros para que la televisión y radio públicas regionales publiciten su política educativa y cultural. Así consta en sendos convenios publicados en octubre en el boletín regional, y que no dejan espacio a la interpretación: comprometen a la compañía pública a incluir temas concretos con perspectivas concretas y en programas concretos de sus plataformas informativas a cambio de recibir 259.526 euros por producir La Semana de la Educación y otros 259.526 euros por La Semana de la Hispanidad. Esos dos asuntos, para cuya cobertura Telemadrid aporta un total de 129.764 euros, han concentrado algunas de las polémicas que más han desgastado al Gobierno regional en los últimos meses. En Educación, porque EL PAÍS dio a conocer que el nuevo sistema de becas autonómico permitirá optar a ayudas para estudiar cursos no obligatorios en centros privados a familias que ingresan más de 100.000 euros al año. Y en Cultura, porque la dimisión de Toni Cantó como director de la Oficina del Español ha puesto los focos sobre la principal competencia de ese ente: organizar La Semana de la Hispanidad.

Aunque el acuerdo de La Semana de la Educación explicita que se respetará la independencia y autonomía de los profesionales de la televisión y radio públicas, la realidad es que la letra pequeña del acuerdo deja un estrecho margen de acción.

Así, el convenio concreta los temas a tratar en programas específicos (como los emblemáticos Madrid Directo en la televisión y Buenos días Madrid en la radio); detalla contenidos en función del medio de emisión (televisión, radio o web); especifica hasta el texto de los gráficos que se mostrarán a la audiencia; e incluso compromete a RTVM a organizar un encuentro digital entre la audiencia y el número dos del gobierno, y consejero de Educación, Enrique Ossorio.

Por ejemplo, el convenio indica que “se empleará un grafismo con los datos sobre el aumento de becas: bachillerato es la que más crece, de 7,39 millones de euros a los 43,4 actuales” y se especifica que “se hablará con una familia que ha solicitado la beca de bachillerato”. En este caso, y pese a que el pacto se firma al amparo del servicio público que debe dar RTVM, no se explica que esas ayudas de bachillerato solo las reciben alumnos de centros privados. Además, y al menos en función del texto del convenio, también se oculta que ese aumento supone que el 60% del dinero destinado a becas lo recibirán un 10% de alumnos que van a centros privados.

En la misma línea tendente a publicitar la acción del Gobierno, RTVM se compromete a emitir un “pantallazo con un grafismo sobre el programa “Accede libros”: becas educativas con el ejemplo del programa Accede que alcanza los 50 millones de euros en libros y material o la reducción del menú escolar que asciende de 28,95 millones a 32,30. Hablamos con un centro que desarrolla el programa”.

En Telemadrid se apuesta por promocionar, entre otras cosas, el programa de enseñanza bilingüe, una de las banderas del PP regional. Así, se lee: “Programa bilingüe: reportaje sobre los profesores nativos que vienen a Madrid para participar del programa de enseñanza bilingüe. ¿Cómo se sienten en Madrid? ¿Cómo es enseñar a jóvenes de otro país? ¿Por qué decidieron venir? Se hará con los asesores lingüísticos que ayudan en para el Global Classroom (la simulación de la Asamblea las sesiones de Naciones Unidas)”.

Finalmente, también se opta por subrayar otra de las grandes apuestas del Gobierno de Ayuso, la digitalización. Esa pieza, ya emitida en Telemadrid, pues el acuerdo se conoció en octubre, pero fue firmado en septiembre, arranca con esta introducción: “Vamos a hablar de futuro. Son 80 millones de euros que va a invertir la Comunidad de Madrid durante tres años para continuar con este proceso de digitalización madrileña”.

El convenio, además, recoge el compromiso de emitir en la web de RTVM un testimonio sobre el instituto de excelencia San Mateo. La perspectiva del tema queda clara. “Telemadrid.es narrará qué es, requisitos para optar al centro, lo que ofrece a los estudiantes. Testimonio de exalumnos. Además, se añadirá un gráfico interactivo con el número de alumnos que han disfrutado de esta excelencia académica desde que se puso en marcha”, se detalla.

Con el mismo espíritu del acuerdo para La Semana de la Educación, también en octubre se firmó otro convenio entre la Comunidad y RTVM para crear La Semana de la Hispanidad y así dar cobertura al festival que promociona Ayuso desde que ganó las elecciones autonómicas de 2021. El acuerdo recoge, precisamente, que las dos partes tienen como objetivo “contribuir así a la consolidación de un evento que ha nacido con vocación de continuidad para visibilizar la cultura común de 500 millones de hispanohablantes”. También se enumera una serie de compromisos sobre los contenidos a emitir, aunque no tan exhaustiva como en el caso de La Semana de la Educación.

1,2 millones en convenios similares

¿No compromete eso la independencia de estos medios de comunicación? “Nuestra opinión es que es un convenio de colaboración en el marco de los objetivos de cada parte firmante”, responde un portavoz de Telemadrid, una compañía pública dirigida por José Antonio Sánchez, votante confeso del PP que admitió figurar en Los Papeles de Bárcenas, y al que eligieron para el cargo el PP y Vox tras un cambio legal aprobado en la Asamblea que les asegura controlar la empresa. “Hay unas pautas [recogidas en el convenio sobre lo que se va a emitir] pero el contenido lo decide RTVM hasta tal punto que como se indica en la estipulación segunda, RTVM asume la responsabilidad por la totalidad de los contenidos”, subraya. Y remata: “Nada relevante o diferente a tantos otros convenios de colaboración que se suscriben de forma ordinaria”.

Sin embargo, en ninguno de los precedentes encontrados por este diario se detalla la cobertura de la misma manera que en el convenio de La Semana de la Educación. En todo caso, en lo que va de 2022, el Gobierno ha gastado en este tipo de acuerdos con RTVM al menos 1,2 millones de euros para crear contenidos periodísticos bajo el paraguas de La semana de.

Así, se han firmado convenios para promocionar la agenda política del Ejecutivo (“Visión positiva de la maternidad, la paternidad, y la familia”), informar de asuntos concretos (como la semana de la solidaridad con Ucrania) o sensibilizar a la población sobre un “uso responsable de las tecnologías”, una adicción que Ayuso pone en la diana en todos sus grandes discursos. Ninguno de esos acuerdos, sin embargo, incluían un listado detallado de contenidos, medios y programas en los que debía publicarse la cobertura financiada, como sí ha ocurrido en el caso de La Semana de la Educación.

<https://elpais.com/espana/madrid/2022-11-14/el-gobierno-de-ayuso-paga-medio-millon-a-telemadrid-por-publicitar-sus-polemicas-becas-y-la-semana-de-la-hispanidad.html>

LA TELEMADRID DE AYUSO: CÓMO LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA NINGUNEO LA MANIFESTACIÓN POR LA SANIDAD

La primera edición del noticiario del domingo dedicó casi más tiempo a glosar los casi 3,5 millones de pacientes atendidos por las urgencias y la atención primaria que a la protesta. La edición nocturna abrió con la huelga de transportistas

Hay domingos y domingos en Telemadrid. Este último, por ejemplo, mientras 200.000 madrileños salían a las calles del centro de la capital en protesta por el nuevo plan sanitario de Isabel Díaz Ayuso —que incluye, entre otros puntos, abrir consultas sin médicos y que los pacientes sean atendidos por videollamadas— la cadena pública autonómica decidió emitir dos episodios de Madrileños por el mundo. Uno de Estonia y otro de Noruega. En el primer programa, eso sí, se ve una protesta, pero contra el presidente ruso, Vladímir Putin. La primera información que emite la cadena pública sobre la marcha sanitaria de hace tres días es en su perfil de Twitter a las 12.42 horas con un mensaje: “Multitudinaria marcha en Madrid en defensa de la sanidad pública”. El titular adjunta también una de las primeras crónicas de la concentración emitida por la agencia Europa Press. Más tarde, el título de esta pieza varía: “La izquierda toma la calle a seis meses de las elecciones municipales contra la reforma de las urgencias”. La noticia abrió el informativo del mediodía, pero decayó en la edición de noche, que apostó por la huelga de transportistas del lunes... que resultaría un fracaso.

Desde las 12.42 hasta las 14.00 horas, Telemadrid elabora dos piezas sanitarias más para su página web. Primero, una declaración de la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, sobre la marcha: “Villacís critica la ‘politización’ de los problemas de la Sanidad que afectan a toda España”. Y luego otra con las palabras del consejero de Transportes de la región, David Pérez, bajo el título: “La permanente intromisión política de la izquierda no ayuda a mejorar la sanidad”. En este texto, firmado por “redacción”, se lee: “Tras la manifestación convocada por los sindicatos contra la reforma de las urgencias extrahospitalarias planteada por el Gobierno regional, desde la Comunidad de Madrid insisten en que están intentando solucionar los problemas que hay, dotando de más presupuesto a los centros de salud y hospitales. Consideran que la izquierda está detrás de las protestas y que van más allá de la Sanidad”.

A las dos de la tarde, ya sí, la primera edición del informativo Telenoticias fin de semana abre con la protesta sanitaria: “Manifestación contra Ayuso”, dice el rótulo de la cabecera. El presentador arranca entonces con una voz en off junto a unas imágenes frontales, nunca aéreas: “La izquierda toma la calle a seis meses de las elecciones municipales y autonómicas. Manifestación contra Ayuso por la reforma de las urgencias”, explica. El rótulo de “manifestación contra Ayuso” dura 48 segundos. La segunda noticia del día es la supresión del delito de sedición. “Pedro Sánchez ataca al PP y le acusa de ser corresponsable de los delitos del 1 de octubre”, dice la presentadora. El rótulo de esta información dice: “Poner de rodillas a España”. La tercera pieza es un vídeo del independentista Oriol Junqueras aplaudido durante un paseo por un pueblo catalán bajo el rótulo: “El regreso de Puigdemont”. La cuarta noticia de cabecera era la huelga de transportes de los camioneros que comenzaba este lunes.

Tras los titulares, la pieza de la marcha sanitaria arranca de nuevo con otro rótulo: “Sindicatos e izquierda contra Ayuso”. La información dura poco más de tres minutos e incluye una breve conexión en directo desde la marcha. En esta pieza se escucha una voz en off que dice: “Durante la manifestación se han podido ver pancartas de promoción política en favor de Mónica García”.

En las imágenes, sin embargo, solo se ve una: “¿Qué mejor solución para este descontrol que una sanitaria en la Puerta del Sol?”. El presentador, al concluir la información, añade: “Desde el Gobierno nacional dicen que se suman a esta protesta y cargan contra la Comunidad de Madrid”.

La presentadora da paso entonces a una breve pieza donde se explica que el sindicato SATSE y Amyts —presentes en la marcha— ofrecen sanidad privada a sus trabajadores. Inmediatamente, el presentador se levanta de la silla y acude a una pantalla gigante donde, ya de pie, narra el número de atenciones en urgencias que ha habido en el último año: 3.421.076. Al finalizar, da paso a otro reportaje de contexto sobre los servicios de urgencias de la región que dura casi tres minutos. Prácticamente, el mismo tiempo que se ha dedicado a la manifestación que ha propiciado hacer este reportaje. Al finalizar, dice: “Por cierto, según un informe elaborado por el Ministerio de Sanidad, la atención primaria es un problema endémico en la Sanidad pública española”. Todas estas informaciones ocupan 10 de los 53 minutos del informativo del mediodía. Ya de noche, la segunda edición del informativo abrió con la huelga de transportes.

Un antiguo miembro de los servicios informativos explica que lo habitual en este tipo de manifestaciones en la cadena era movilizar un equipo que hubiera trabajado toda la semana anterior para preparar el evento y haber instalado, como mínimo, dos plataformas fijas para poder retransmitir desde arriba en dos puntos del recorrido; unas tres cámaras fijas, también en altura, y haber desplazado al menos cinco redactores y sus cámaras para hacer directos. Este fin de semana solo se envió a un redactor.

La manifestación del pasado domingo era el primer evento comprometido para el equipo de informativos bajo el mandato de José Antonio Sánchez, administrador provisional de Radio Televisión Madrid, porque afectaba directamente al Gobierno regional que lo ha nombrado. En 2017, apenas unas semanas después de la incorporación del equipo de informativos nombrado por el anterior director general de Telemadrid, José Pablo González —el único nombrado con el consenso de las fuerzas representadas en la Asamblea de Madrid— se produjo otro evento relacionado con el Ejecutivo que gobernaba, la declaración de Cristina Cifuentes en la comisión de investigación por el supuesto amaño de la adjudicación de la cafetería del Parlamento autonómico. Entonces, Telemadrid emitió en directo la comparecencia íntegra.

Para entender el peso que tiene Telemadrid en el Gobierno de Ayuso, basta con leer una respuesta que dio la presidenta al diario El Mundo en 2020: “Podría decir que soy la única presidenta autonómica y del Gobierno de España que tiene una televisión que le es crítica”. Un exalto cargo de la presidenta cuenta ahora por teléfono que, por aquel entonces, Ayuso, periodista de profesión, tenía una “obsesión constante” por la televisión pública. “Desde su llegada al poder en 2019, ella y su equipo tenían continuas peleas por el minutaje con Ciudadanos. Había auténticas batallas campales entre ambos partidos por si se dedicaban más de 30 segundos a Ignacio Aguado. Preguntaban continuamente por los tertulianos que iban a los programas y el motivo de titular así algunas noticias”, explica.

“Mentir” y “ocultar la realidad”

El actual portavoz del comité de empresa de la cadena, Luis Lombardo, cuenta que esta última manifestación sanitaria ha sido la gota que ha colmado el vaso para la plantilla. “Desde dentro se vive con mucha rabia y dificultad”, explica. “Se está poniendo el foco en cuestiones que intentan ocultar la realidad e incluso mentir. Esto está afectando mucho a los trabajadores. Tanto de los que participan en la producción como en la propia emisión de los programas e informativos. Ves cómo desde muchos departamentos te paran y te dicen: ‘Luis, hacer esto es muy duro’”.

Tras el adelanto electoral de mayo de 2021, Ayuso volvió a tomar el control absoluto de la cadena. Fue lo primero que hizo tras ganar las elecciones. El actual administrador de Telemadrid es José Antonio Sánchez, vinculado al PP durante toda su carrera profesional y también responsable del ERE que hizo la cadena pública durante su anterior etapa: despidió al 74% de su plantilla. “Voto al PP y seguiré votando al PP. A quien no he votado nunca ni voy a votar en mi vida es a Izquierda Unida”, dijo en junio de 2015 durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados como presidente también de RTVE.

En el libro *Y Aznar llegó a presidente*, de Miguel Ángel Rodríguez, el ahora jefe de gabinete de Ayuso, explica que una de sus preocupaciones como asesor del expresidente Aznar durante los debates electorales con Felipe González en los años noventa era la negociación de los planos escucha. “En un programa de televisión quien manda es el realizador: si él quiere, alguien que no habla puede tener un protagonismo superior al de quien está en el uso de la palabra. Se trata de multiplicar su presencia con gestos o planos de su escucha. Un realizador puede conseguir que un mal orador quede estupendamente solo con mantenerle más tiempo en pantalla. El protagonismo es la imagen, no la palabra”.

En la entrega de medallas que ofreció Ayuso en abril de 2021, solo una semana antes de las elecciones y antes de tomar el control de Telemadrid, el equipo de comunicación de la Comunidad decidió por primera vez en 30 años encargar la señal institucional a una empresa privada. Telemadrid, por tanto, no pudo realizar la emisión. Retransmitió el acto —donde Nacho Cano se quitó la medalla para entregársela a Ayuso— con una señal controlada por el equipo de la presidenta.

Desde la toma de control, Telemadrid ha emitido muchas manifestaciones de la capital. Pero quizá la más llamativa y la que pone de manifiesto su control absoluto de la cadena fue la del pasado 20 de febrero. Ese domingo, alrededor de 3.000 madrileños salieron a manifestarse en la emblemática sede del PP de la calle de Génova. El principal partido conservador vivía sus peores horas desde su fundación. El entonces presidente Pablo Casado puso en duda la ética de la presidenta Ayuso unas horas antes. “No es ejemplar que un hermano cobre de un contrato adjudicado por mi gobierno”, dijo en referencia a la líder madrileña. El resto ya es historia de la política española. Casado se marchó. Ayuso siguió. Y Alberto Núñez Feijóo llegó.

¿Cómo se contó esta protesta espontánea en la televisión pública madrileña? El informativo de mediodía abrió con esa noticia bajo el rótulo: “Concentración en Génova en apoyo de Díaz Ayuso”. El presentador, con una voz en off, añadía: “Gritos contra la dirección nacional del partido. Hasta 3.500 personas en la sede. Es una protesta no autorizada que se ha hecho para apoyar a Ayuso. [...] la imagen ha sido impactante. Génova se ha colapsado”. En las imágenes se ven continuamente pancartas de Ayuso hacia La Moncloa para 2023, insultos contra Casado y muchos gritos de “Isabel, Isabel”. El informativo de por la noche, sin embargo, fue modificado. En lugar de abrir con el rótulo de “concentración en Génova en apoyo de Díaz Ayuso”, se cambió por “concentración en Génova para respaldar a Díaz Ayuso”.

<https://elpais.com/espana/madrid/2022-11-16/la-telemadrid-de-ayuso-como-la-television-autonomica-ninguneo-la-manifestacion-por-la-sanidad.html>

AYUSO INTENTA FRENAR LA HUELGA SANITARIA CON 2.000 CONTRATOS DE INTERINO, PROMESAS YA INCUMPLIDAS Y MEDIDAS IMPUESTAS POR EUROPA

La presidenta de Madrid promete acabar con la eventualidad laboral, pagar más a los médicos que vean a más pacientes de los programados, y fidelizar a los MIR de medicina de familia y pediatría con contratos de tres años

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha intentado frenar este miércoles la huelga de Atención Primaria con una batería de propuestas que incluye renovar a los 2.000 sanitarios eventuales que acaban su contrato a 31 de diciembre 2022, y hacerlos interinos, algo a lo que en realidad está obligada por una normativa estatal si quiere mantenerlos en sus puestos y no echarlos a la calle; también ha prometido avances que en realidad supone aplicar la legislación europea obligatoria (para bajar la temporalidad de interinos y eventuales); además recupera compromisos incumplidos desde 2007 (como incentivar económicamente las plazas de difícil cobertura, como las del turno de tarde); o mejorar medidas que ya se aplican (como pagar más a los médicos que atienden a más pacientes). El anuncio, hecho durante una rueda de prensa en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, ha provocado las críticas de Amyts, sindicato convocante del parón profesional, que ha conocido los detalles a través de los medios de comunicación. La huelga de médicos de familia y pediatras, que arrancó el 21 de noviembre, se mantiene.

“La Comunidad de Madrid va a poner fin a la eventualidad laboral en la sanidad pública madrileña. Convertiremos a todos los eventuales en interinos. De aquí a dos años, el 86% [del personal del servicio sanitario] será fijo. Es un avance histórico en la mejora de las condiciones laborales de nuestros sanitarios”, ha dicho Díaz Ayuso. “Habrá un nuevo sistema tecnológico que nos va a ayudar a aprovechar al máximo los huecos libres en la agenda de medicina de familia, y a remunerar de manera ágil el exceso de demanda asistencial que realizan nuestros médicos”, ha seguido. “Las plazas de difícil cobertura tendrán una mejora en su retribución”, ha añadido. “Habrá un programa de fidelización de los residentes MIR de medicina de familia y pediatría de Atención Primaria que ofrecerá a los residentes que acaben su formación en 2023 contratos de tres años”.

Sin embargo, esas propuestas no han convencido a los representantes de los médicos. Al contrario. Incluso puede decirse que les han molestado, pues han visto anunciadas medidas que ya se les prometieron en el pasado, sin cumplirse.

“Todo esto es humo”, ha lamentado Ángela Hernández, secretaria general de Amyts, que ha conocido el anuncio de Ayuso tras una nueva concentración masiva de médicos de familia y pediatras. “Es lamentable”, ha subrayado. “Han mezclado cosas que prometieron para que desconvocáramos la huelga en 2020, y que no han cumplido, con cosas que están obligados a hacer, como lo de la interinidad, por imperativo de la UE, con cosas que negociamos con la Administración en el Comité de Huelga y por la que no llegamos a un acuerdo porque no explican cómo van a hacer eso y ya no nos fiamos”.

“Todo parece indicar que Amyts estaba en una huelga política y la propuesta de la presidenta Díaz Ayuso de terminar con la eventualidad en la sanidad pública madrileña les ha pillado descolocados”, ha contrapuesto una fuente que cuenta con la confianza de la líder conservadora. “Es una propuesta que nunca defendieron”.

La UE obliga a bajar a un 8% la temporalidad en los trabajadores de las administraciones públicas. En Madrid, en Atención Primaria, hay una temporalidad (trabajadores eventuales o interinos) del 35% y en los hospitales, del 52%, que es especialmente grave en las urgencias, con una temporalidad del 85%. Unos datos a los que no ha hecho referencia la presidenta en su batería de propuestas de este miércoles.

Entre los detalles del plan presentado por Ayuso se recoge que todos los eventuales que terminen su contrato el próximo 31 de diciembre pasarán a ser interinos, una medida que afectará a más de 2.000 profesionales, 213 de ellos de Atención Primaria, algo a lo que, en realidad, la Comunidad de Madrid está obligada según especifica el estatuto marco estatal para acabar con la temporalidad: si quiere mantener a los sanitarios en sus puestos, y no despedirlos, debe hacerlos interinos. También en diciembre se van a adjudicar casi 1.000 plazas fijas de médicos de familia (609) y pediatras (355). En total, en 2022, habrán adquirido la condición de personal fijo más de 10.000 profesionales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS): 10.088. Y, entre 2023 y 2024, se sumarán otras 22.390 plazas fijas más. Es decir, con los distintos procesos de estabilización en marcha, en los próximos dos años el 86% de los trabajadores del SERMAS será fijo.

“Dice [Ayuso] que va a acabar con la precariedad, faltaría más, eso es algo que viene impuesto desde Europa y que afecta a toda la Administración española y por supuesto a la Sanidad madrileña, que es una de las que la tiene más alta”, dice Hernández, de Amyts. “Que va a hacer plazas fijas... también faltaría, se examinaron los médicos de familia y de atención primaria el 17 de noviembre de 2019 y tres años y unos días más tarde aún no hay ninguno fijo”, ha añadido. Es decir, que las plazas fijas que va a adjudicar ahora están pendientes de adjudicarse desde hace años. “Son medidas para salir del paso y para no escuchar a los médicos de familia y a los pediatras de la atención primaria madrileña”.

La presidenta también ha anunciado que va a retribuir con un extra a aquellos profesionales que más citas atiendan, si superan voluntariamente los pacientes programados en su agenda: 34 en Medicina de Familia y 24 en Pediatría. Asimismo, el Ejecutivo madrileño va a incentivar aquellas plazas de difícil cobertura en turno de tarde que no se hayan podido cubrir en los últimos tres meses, aunque no ha detallado la cuantía económica. Finalmente, se establecerá un programa

específico de fidelización de residentes en Medicina de Familia y Pediatría de Atención Primaria, por ser especialidades deficitarias, a los que se les ofrecerá un contrato de tres años cuando terminen su formación.

“En el punto en el que anuncian que van a retribuir adecuadamente a aquellos profesionales que atiendan a más citas, eso ya se hace como parche desde septiembre de 2020, cuando se crearon módulos de cuatro horas en turnos contrarios, donde se atienden a seis pacientes extra a la hora por 200 euros”, recuerda Hernández, que apunta que por lo tanto no hay novedad. “Pero muchos no quieren hacer eso porque acaban hasta arriba con sus propios pacientes. No se puede dejar esto en manos de la voluntariedad porque, ¿qué pasa si no hay voluntarios para atender a esos pacientes? ¿Quién los atiende?”.

Otro punto en el que ha hecho hincapié la Administración regional es que ofrecerá contratos de tres años para los MIR [Médico Interno Residente]. “Bienvenido sea”, ha ironizado Hernández, del sindicato médico. “Hay otras comunidades que ya llevan tiempo ofertándolo”. Y ha agregado: “Aunque nos gustaría saber qué tipo de plazas van a ofertar, porque si siguen siendo las de área [que los médicos atienden varios centros de una zona] en las que van a estar haciendo suplencias o saltando de una plaza a otra, los MIR van a seguir eligiendo los contratos de mayor estabilidad donde van a poder desarrollar una auténtica medicina de familia, como en Castilla la Mancha o Castilla-León y en otros países”

Tras sortear la huelga de las urgencias extrahospitalarias, todo apunta a que el conflicto de la Atención Primaria se mantiene: la mesa de negociación ni siquiera se ha citado desde el miércoles de la semana pasada.

<https://elpais.com/espana/madrid/2022-11-30/ayuso-intenta-frenar-la-huelga-sanitaria-con-promesas-ya-incumplidas-y-medidas-impuestas-por-europa.html>

AYUSO SE CIERRA EN BANDA A AMPLIAR EL PRESUPUESTO SANITARIO PESE A LAS PROMESAS REALIZADAS A LOS MÉDICOS EN HUELGA

La Comunidad de Madrid, que es la que menos invierte en sanidad por habitante, se niega a contratar más médicos y pide que los sanitarios hagan horas extras voluntariamente para responder a la sobrecarga asistencial

Las negociaciones entre la Comunidad de Madrid y los médicos de familia y pediatras en huelga se han encallado esta semana por la cerrazón del Gobierno regional a ampliar el presupuesto para la Atención Primaria. El comité de huelga se levantó este miércoles de la mesa de negociación tras corroborar que la propuesta de la Consejería de Sanidad para mejorar las condiciones de los profesionales no venía acompañada de una partida económica. En la memoria de muchos sanitarios están todas las promesas incumplidas por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Y en esta ocasión, que han dado por fin un paso al frente y se sienten “fuertes”, piden garantías de que el plan va a cumplirse. Eso solo pasa, defienden, por ampliar la partida presupuestaria en las cuentas de 2023 que aún tienen que aprobarse.

La cerrazón del Ejecutivo regional a destinar más dinero a la Atención Primaria en los presupuestos contrasta con las declaraciones que Díaz Ayuso hizo públicamente este martes. La masiva manifestación del 13 de noviembre y las huelgas de los sanitarios – primero en las urgencias extrahospitalarias y ahora en la Atención Primaria–, forzaron a la presidenta de la Comunidad de Madrid a comprometerse a mejorar las condiciones de los médicos tanto salarial como asistencialmente y a contratar a más profesionales. Era un cambio radical de discurso tras afirmar que “no hay médicos” y que Madrid tiene “la mejor sanidad del mundo”.

La dirigente madrileña se comprometía a que su Gobierno velará por mejorar las condiciones laborales y salariales de los sanitarios así como por retener a los médicos residentes. Reconocía por primera vez que ha existido una fuga de médicos que terminan su residencia en Madrid, que los sanitarios han operado en la región encadenando contratos temporales y precarios o que la sobrecarga asistencial es “inasumible” para cualquier profesional. De este modo, Ayuso prometió acabar con la precariedad, asegurar listas limitadas y mejorar las condiciones para que los residentes no emigren a otras comunidades u otros países.

Sus promesas sin embargo se han quedado en papel mojado porque la dirigente madrileña no tiene ninguna intención de ampliar la inversión sanitaria en los presupuestos que aún deben pasar el trámite parlamentario. Según trasladaron desde la Consejería de Sanidad el miércoles al comité de huelga, el presupuesto “está cerrado” y no puede haber un incremento adicional, a pesar de que aún pueden hacerse cambios en los mismos vía enmiendas.

Madrid, la comunidad que menos invierte en sanidad por habitante

A finales de octubre, el consejero de Economía y Hacienda de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, presentaba las cuentas regionales para 2023 tras aprobarse en Consejo de Gobierno –paso previo a que lleguen a la Asamblea regional– y presumió de haber elaborado un presupuesto con “un incremento del 11,4% respecto a 2022” en la partida sanitaria. 9.789,6 millones de euros en total, que tienen trampa si se bucea por la letra pequeña. A falta de que termine este ejercicio, en 2021 el gasto sanitario real en la región ascendió a 10.300 millones de euros, 511 millones más que lo presupuestado para el año que viene. La Atención Primaria se queda de nuevo con el 10% de la inversión sanitaria, muy por detrás del resto de comunidades autónomas y muy lejos de lo que pide la Organización Mundial de la Salud que recomienda que sea el 25%.

Además, la inversión estimada por la Comunidad de Madrid en Sanidad para 2023 supondrá el 38% total del gasto, el porcentaje presupuestado más bajo de los últimos años. De este modo, Sanidad vuelve a perder un año más peso en las cuentas madrileñas, una disminución que viene produciéndose desde 2015, cuando el gasto en sanidad ascendió al 45,16% de las cuentas. En 2016, cayó hasta el 44,13% y así sucesivamente. En 2019, año previo a la pandemia, el porcentaje se situó en el 42,52% del total y en los últimos, los de 2022 –Madrid estuvo dos años sin cuentas– este porcentaje disminuyó hasta el 38,1%.

Madrid es la comunidad más rica del país pero está a la cola de gasto por habitante en Sanidad, con 1.171 euros por persona. La media nacional se sitúa en 1.478 euros.

Estas cifras de gasto sanitario son “inaceptables” para los sanitarios. Y aunque el martes por la noche tras siete horas de reunión parecía que solo faltaban algunos flecos para cerrar un pacto que desconociera la huelga indefinida que comenzaba el lunes, el miércoles tras la reunión con más de 400 sanitarios en huelga las expectativas fueron otras. Los médicos de familia y pediatras quieren más compromiso, más presupuesto, más profesionales (unos 1.250 de familia y otros 750 pediatras). En definitiva, más seguridad de que las promesas se van a cumplir de verdad.

“Hemos planteado a los afectados el punto en el que estábamos y para ellos no es suficiente. Les ha costado mucho decir “basta ya” pero ahora que lo han dicho no les basta con un parche o con creerse el siguiente acuerdo a incumplir. Necesitan que alguien les dé la seguridad de que esto va a ser el principio de la mejora de la atención primaria”, asegura Ángela Hernández, portavoz del comité de huelga. “Seguimos quebrando a los profesionales y esto necesita que alguien venga a solucionarlo. Yo no sé quién va a ser, pero hoy por hoy la huelga continúa. Y vamos a ver cómo se van desarrollando los próximos días para la próxima reunión”. De momento, la Consejería de Sanidad también se ha plantado y no ha vuelto a convocar la mesa de negociación.

Negativa a contratar más personal

Las promesas incumplidas por parte de la Comunidad de Madrid no han sido pocas a lo largo de los últimos años. La sobrecarga asistencial, las largas agendas, con “más de 50 o 60 pacientes en su jornada laboral”, y las malas condiciones de trabajo y laborales son denuncias que los profesionales de Atención Primaria llevan haciendo desde hace años, una realidad que se agravó tras la pandemia. En la anterior legislatura, ya con Isabel Díaz Ayuso en la puerta del Sol, se atajó una huelga con un plan que contemplaba rebajar la carga de trabajo y mejorar los salarios de los profesionales que finalmente no se cumplió. Los sindicatos convocaron entonces una nueva huelga, que comenzó el mismo día que la presidenta convocó elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid, en 2021, con lo que se interrumpió la convocatoria.

Uno de los principales escollos en la negociación de estos días se centra precisamente en el exceso de pacientes en las agendas de los profesionales. En este sentido, el comité de huelga

reclama un máximo de 31 pacientes por consulta de Medicina Familiar y Comunitaria, con el objetivo de dedicar un mínimo de 10 minutos por paciente, y 21 pacientes para Pediatría, para un mínimo de 15 minutos por niño. La última propuesta de la Consejería pasa por 24 pacientes en el caso de los pediatras y 34 en el de los médicos, pero tiene trampa. Todos los pacientes que se excedan de esas agendas en horario laboral, deberán atenderse con horas extras por los mismos profesionales, aseguran los médicos. Desde la Consejería de Sanidad no se plantean contratar a más personal, pese a las promesas.

Para los médicos en huelga las promesas son “buñuelos de aire”. Ayuso se comprometió este martes, después de repetir hasta la saciedad que no hay médicos, que mejorarían las condiciones laborales para que los médicos residentes que terminan la especialidad familiar y pediátrica en Madrid, se queden, esta promesa no viene acompañada de más gasto. De nuevo, la falta de inversión real hace dudar a los sanitarios de que esto vaya a ser así.

La administración no es capaz de retener a los médicos residentes a pesar de que la mayoría de médicos que afrontan su MIR optan por hacerlo en Madrid, según los propios datos de la Consejería. En junio de este año, la Gerencia de Atención Primaria convocó a 338 médicos de familia que habían terminado su especialidad, para repartir 197 plazas. El fracaso fue mayúsculo: solo logró cubrir 59. Y con pediatría ocurrió algo similar: de 26 plazas, completaron cinco.

La Inspección reclama mejores condiciones

Los sindicatos esperan ahora que la Consejería de Sanidad vuelva a mover ficha después de que haya decidido no seguir con la mesa de negociación desde que se suspendiera la reunión del miércoles. Y en medio de las protestas, un requerimiento de la inspección laboral a la Comunidad de Madrid ha entrado en escena para incidir precisamente en la sobrecarga de trabajo de los sanitarios y pedir más recursos.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social pide que en el plazo máximo de un mes se ponga en marcha una “adecuada planificación preventiva para solucionar riesgos en los profesionales de Atención Primaria. Entre esos riesgos señala factores como la carga de trabajo, las demandas psicológicas o desempeño de rol.

En el documento remitido a la Consejería de Sanidad, la inspección laboral reclama al Gobierno de Díaz Ayuso que se resuelva cuanto antes “el nombramiento de responsables, de los recursos humanos y materiales para su ejecución, prestando especial atención a los centros de trabajo que de manera permanente o puntual tienen una carencia significativa de personal”. El plazo empieza a contar desde el 23 de noviembre. La pelota, de nuevo en el tejado del Gobierno de Madrid, que es incapaz de convencer a los profesionales tras demasiadas promesas incumplidas.

https://www.eldiario.es/madrid/ayuso-cierra-banda-ampliar-presupuesto-sanitario-pese-promesas-realizadas-medicos-huelga_1_9745525.html

RADIOGRAFÍA DEL CAOS DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE MADRID: HASTA 12 DÍAS PARA VER AL MÉDICO Y 13 PARA LA ENFERMERA EN 2021

Los datos de espera del último año marcado por el coronavirus resumen el desbordamiento que han sufrido los profesionales, que este lunes van a la huelga

“¡Una bolsa, una bolsa! Que la niña va a vomitar”, grita una madre el pasado jueves nada más entrar en el centro de salud de Collado Villalba Pueblo, a unos 40 kilómetros al noroeste de Madrid. De los 437 centros de salud de la región, cifra que incluye los consultorios, es en este donde el año pasado se esperó más que en ningún otro para una cita presencial con el médico de familia: una media de 12,5 días. Hay unas 12 personas en la sala de espera, además de las cinco que esperan a ser atendidas en el mostrador de administración. Son las 12 del mediodía y el ritmo de trabajo es tranquilo. En la puerta hay pegado un cartel de la convocatoria de la manifestación celebrada el pasado domingo y que congregó a más de 200.000 personas en defensa de la sanidad pública.

En la Comunidad de Madrid hubo en 2021 centros de salud en los que citarse con el pediatra fue un milagro (La Cabrera: 14 días de espera media); donde ver al médico de familia fue una odisea (Collado Villalba: 12 días), y en los que fue más fácil curarse uno mismo que aguardar a la enfermera (Villa de Vallecas: 13 días). Esos datos, enviados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a la Asamblea, son la consecuencia del caos provocado por la pandemia y de los déficits estructurales que ya arrastraba antes la atención primaria, que han conducido a una convocatoria de huelga de médicos de familia y pediatras que comenzará este lunes. En 2021 pasaron 5,4 días de media en el conjunto del sistema entre que un paciente pidió una cita presencial con su médico y la primera fecha que se le ofreció. En el caso de las enfermeras, la espera fue de ocho días. Lo peor llegó en diciembre, cuando los centros colapsaron con la variante ómicron de la sexta ola del coronavirus: la mitad tardó siete días naturales o más en dar cita. Este diario solicitó a la Consejería de Sanidad la cifra media de espera en 2022, sin obtener respuesta, para comprobar si el descenso de casos de coronavirus ha mejorado la situación.

“Hoy [por el jueves] no es un mal día, tengo 24 pacientes citados”, dice uno de los médicos de familia que atienden en Collado Villalba, que cuenta con recibir a cuatro o cinco personas más que vengan de urgencia, sin cita. El martes vio a 45 personas en una mañana. “La tranquilidad es momentánea. Si falta más de uno... ahí estamos fastidiados. Y eso ocurre a menudo”, advierte.

Se refiere a que no siempre están todos los médicos. Hasta hace unos días eran 10, pero una de sus compañeras lo ha dejado y se ha mudado a Irlanda: “Estaba harta de pelear por contratos basura y quedarse con los rastros”. Nadie ha cubierto el puesto y lo mismo ocurre con las bajas o las vacaciones. Las consultas del facultativo que falta se reparten entre el resto de los compañeros.

“Desde hace un par de meses la situación es más llevadera y no hay tanta sobrecarga”, cuenta el mismo médico. “Prácticamente hasta julio hemos seguido bastante saturados, porque todavía había que hacer seguimiento a los pacientes de covid-19 y sus contactos: pedir el test, llamar a su familia, gestionar el aislamiento... Igual te tirabas una hora por persona y eso lo desmadraba todo”, recuerda. Ahora trabaja más tranquilo, sí, pero tiene previsto sumarse a la huelga convocada por médicos de familia y pediatras a partir de este lunes 21 de noviembre: “No puede ser que haya días que tenga 50 pacientes y otros, como hoy, casi la mitad. Unos 30 pacientes al día es factible, pero si la cifra se acerca a 40, ya tienes que hacer malabares. Y más de 50, como todavía teníamos el año pasado, es insostenible”.

La pediatra que trabaja por las mañanas en el centro —por la tarde son dos— coincide con su compañero en que el ritmo de trabajo se ha relajado “un poco”. Lleva 12 años en Collado Villalba y también prefiere mantener el anonimato. Todos temen represalias de la Consejería de Sanidad por contar su experiencia. Este jueves tuvo programadas 28 consultas, y el lunes, por ejemplo, fueron 37: “Para mí esto no es nada, no es la peor época. Ha habido momentos, el año pasado o en lo más duro de la pandemia, en los que veíamos pacientes cada cinco minutos o menos. Ahora tengo 10 por niño, y si es revisión, 20”.

La cosa cambia para recibir la vacuna de la covid-19 o de la gripe: la campaña de vacunación ha empezado hace poco y hay bastante demanda. De hecho, las citas que ofrecen son ya para la segunda semana de diciembre. A la una y media de la tarde, siete personas esperan a ser atendidas. No hay mucho movimiento. “Has sido un niño muy valiente, vamos a comprar un bocata”, consuela una mujer a su hijo.

Sin embargo, las mejoras en los tiempos de espera que celebran unos profesionales acostumbrados a vivir la parte más desagradable y agotadora de su profesión contrastan con el nivel de exigencia de otros sectores. Por ejemplo, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) ha suscrito acuerdos con entidades de seguro que garantiza a los empleados públicos un tiempo máximo de espera de tres días para acceder a médico de familia o enfermera. Esa cifra está por debajo de la media de Madrid en 2021 (cinco y ocho días, respectivamente), aunque hay centros concretos que la mejoran.

Ese es el caso del centro de salud de Los Pintores, en Parla, que el año pasado solo tardaba 2,7 días de media en ofrecer a quien lo pidiera una cita presencial para el médico de familia, el pediatra o la enfermera. Un año después, la instalación recibe un goteo de gente en la mañana de un día lluvioso de esta semana. Los facultativos atienden a una población de 26.404 cartillas sanitarias. En la entrada, con colores blancos y azules, tres administrativos reciben a los pacientes. “Mi madre no está segura de a qué hora tenía la cita, si me lo pudieran mirar se lo agradecería”, consulta una mujer que viene con su hija. Un simple tecleo sirve para resolver su duda. En la primera planta hay varias consultas de médicos de familia, pediatras y enfermería. Solo dos personas esperan sentadas su turno frente a la docena de puertas. En el piso superior hay más consultas a las que los usuarios acceden mediante un ascensor.

Marta Jiménez, de 45 años, sale a mediodía por la puerta después de renovar su baja. “No he esperado ni 10 minutos. También he pedido cita para el pediatra y me la daban para esta misma tarde, pero me venía mal y me han ofrecido para mañana o el lunes. Vamos, que puedo elegir”, indica. “Eso sí, cuando tienes que ver a algún especialista hospitalario, la cosa se complica y tienes que esperar seis, ocho meses...”, apunta la usuaria.

Jennifer Mijas, de 22 años, entra con sus dos hijas y cuenta que no han tenido problema para que les atendieran, ni cuando ha venido de urgencia con alguna de ellas. En este ambulatorio también hay odontólogo, un trabajador social y una matrona.

Precisamente de una visita con esta última sale Eva, que prefiere no dar su apellido, de 45 años. “Nunca hay que esperar mucho a la cita, la matrona ha tardado menos de 15 días en verme y la vez que más esperé a ver a mi médico de cabecera fueron cinco días”, comenta.

Este centro de salud, y el de Collada Villalba Pueblo, reflejan dos extremos del sistema: lo que funciona y lo que no. Pero el conjunto, la media, está tensionado tras dos años de pandemia. Los médicos se quejan de que los problemas ya venían de antes y reprochan la falta de inversión en atención primaria. Por eso, los profesionales van a la huelga a partir de este lunes.

<https://elpais.com/espana/madrid/2022-11-21/radiografia-del-caos-de-la-atencion-primaria-de-madrid-hasta-12-dias-para-ver-al-medico-y-13-para-la-enfermera-en-2021.html>

AYUSO ENCAJA EL PRIMER GOLPE

Los médicos ganan el pulso a la presidenta madrileña, obligada a rectificar tras un mes desdeñando el conflicto sanitario

Isabel Díaz Ayuso ya es cinturón negro de yudo. La combativa presidenta madrileña lo recibió el viernes, a título honorífico, de manos de la responsable de la federación regional de ese deporte, Neli Lorenzo, a quien se le quebraba la voz ante la heroína de la derecha. “Usted para nosotros lo representa todo”, se sinceró Lorenzo al borde de las lágrimas. “Gracias, presidenta, no se puede olvidar lo que hizo durante la pandemia. En esa época de sombra, toda la luz nos venía de usted. Fuimos la envidia de España”.

Desde su arrollador triunfo en las elecciones autonómicas de mayo de 2021, Ayuso ha vivido entre nubes de alabanzas como estas, provenientes de su partido, de amplios sectores de la sociedad madrileña, de los altavoces de los tertulianos y de los requiebros literarios de las columnas de prensa. También entre las descalificaciones incesantes de la izquierda, pero eso no ha hecho más que engrandecer su figura ante los suyos. Con los oídos arrullados por los elogios de la presidenta de los yudocas, Ayuso agradeció las atenciones, ensalzó la “bravura” de los madrileños y se reservó para el final de su discurso el anuncio de una “gran noticia”: el fin de la huelga de los médicos de urgencias.

La presidenta ya puede respirar más tranquila tras la que seguramente ha sido su peor semana del último año y medio. La mayor manifestación que se recuerda en mucho tiempo en Madrid — 200.000 personas, según el recuento oficial, contra la política sanitaria del Ejecutivo regional — sonó el pasado domingo como una alerta inesperada entre los efluvios victoriosos que acompañan desde mayo de 2021 a Ayuso, capaz de erigirse en la némesis de Pedro Sánchez y

de derribar a un líder nacional de su partido, Pablo Casado, que había intentado cortarle las alas. La nueva cinturón negro, siempre arrolladora y desafiante, había quedado expuesta durante unos días no solo al esperado ataque de la izquierda, también a las críticas en voz baja de parte de su partido, que no entendía su actitud en un asunto tan sensible como la sanidad.

La desconvocatoria de la huelga en urgencias —la de atención primaria sigue en pie a partir del lunes— ha sido un alivio para la presidenta, aunque a la vez ha dejado en evidencia su estrategia desde que se desató el conflicto, a finales de octubre. Durante este mes, Ayuso empleó a fondo todo su arsenal dialéctico, fraguado en los laboratorios de su consejero áulico, Miguel Ángel Rodríguez. La presidenta tildó de vagos a los sanitarios, los despreció como marionetas de la “ultraizquierda” —la huelga estaba convocada por un sindicato, Amyts, sin adscripción partidista— y ridiculizó sus reivindicaciones. La cosecha fue la multitud que abarrotó el centro de Madrid.

Después de un mes confrontando a cara de perro con los sanitarios, el Gobierno madrileño tuvo que sacar bandera blanca el jueves. De momento, ya no se abrirán urgencias extrahospitalarias sin médicos, una medida que la Comunidad venía defendiendo obstinadamente, ni se sustituirá la presencia física de los facultativos por videoconsultas, eso que hace solo unos días Ayuso defendía como “parte del futuro sanitario”. Una rectificación en toda regla después de haber perdido días y días atizando el fuego.

Hace dos semanas, la figura de la presidenta madrileña aún refulgía con todo su esplendor, a despecho de una protesta sanitaria que no hacía más que enconarse. Tras el periodo de relativo silencio que siguió a la caída de Casado y la llegada de Alberto Núñez Feijóo al timón del PP, Ayuso volvía a estar en el primer plano de la escena nacional. Su propio equipo se había encargado de airear que fue ella quien reclamó al líder del partido que suspendiese las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial. El ariete del sector más guerrero de la derecha había regresado y casi todos estaban de acuerdo en atribuirle a ella la decisión de romper con el Gobierno. Los suyos, para abrillantar la figura de la presidenta. La izquierda, para intentar desacreditar a Feijóo como líder débil.

El 7 de noviembre, seis días antes de la manifestación, Ayuso había comenzado la semana con las mejores noticias: una encuesta de El Mundo la situaba al borde de la mayoría absoluta en las elecciones de mayo. Esa mañana se fue a la televisión, al programa de Ana Rosa Quintana, y se despachó como nunca. Acusó a Sánchez de tramar un plan oculto para acabar con la Monarquía, “sacar a la Guardia Civil” y encarcelar a sus opositores “como en Nicaragua”. El martes pudo recrearse en las 19 páginas que le dedicaba el diario La Razón, donde había protagonizado otro acto, mientras en la tele Quintana volvía sobre la entrevista del día anterior: “Ayer estuvo on fire. Entre el conflicto este y las encuestas que salían ayer, es para estar eufórica”. Y Ayuso siguió a lo suyo, despreciando la protesta y, al tiempo, agitando la guerra cultural contra la izquierda. El jueves 10 de noviembre, en la Asamblea de Madrid, negó que exista una emergencia climática y la atribuyó a “intereses de empresas y lobbies” conectados con el “comunismo”.

Retórica conspiratoria

La magnitud de la marcha ciudadana del domingo 13 superó todos los cálculos previos. Aun así, un portavoz del PP madrileño se lanzó de inmediato a calificarla de “fracaso”, mientras en las redes sociales algunos diseminaban el rumor de que se había nutrido con autobuses llegados de otras comunidades. Al día siguiente se esperaba con impaciencia la respuesta de Ayuso, que tenía programada a primera hora una conferencia en el club Siglo XXI. La presidenta habló de la sanidad, pero, tras un largo preámbulo para contextualizar la cuestión. Se remontó a hace 25 años, a la enorme reacción ciudadana al asesinato por ETA de Miguel Ángel Blanco. “Los totalitarios no lo pudieron digerir”, ilustró Ayuso, quien fue vinculando a aquel origen una serie de acontecimientos posteriores: el pacto de Estella del PNV con la izquierda abertzale; el Gobierno del PSC con ERC en Cataluña; la “sorprendente” victoria electoral de José Luis Rodríguez Zapatero o la Alianza Bolivariana en Latinoamérica, que emparentó a la izquierda española con “grupos terroristas y narcotraficantes de todo el mundo”. Y al final de ese camino, el Gobierno de Sánchez, cuyo propósito es “acabar con el Estado de derecho y con siglos de historia” y, como

fenómeno asociado, la huelga de los médicos, otra prueba de “la estrategia desestabilizadora de la izquierda a ambos lados del Atlántico”.

Nadie en el PP nacional secundó ese discurso. Feijóo se pasó la semana evitando a los periodistas para no tener que dar explicaciones. Incluso en el PP madrileño algunos confesaban en privado que era un error minimizar la protesta. Y la retórica conspiratoria de Ayuso perdió fuerza. El jueves, en la Asamblea regional, bajó el tono y, por primera vez, mostró comprensión con los médicos y los manifestantes. Esa noche, la Consejería de Sanidad consumaba la rectificación.

Ayuso ha echado un pulso y lo ha perdido, pero nada indica que eso la vaya a hacer desistir de su retórica flamígera. En los seis meses hasta las elecciones, su equipo ya se ha marcado una meta: arrebatarse a Vox la bandera de la derecha más airada.

<https://elpais.com/espana/2022-11-20/ayuso-encaja-el-primer-golpe.html>

DÍAZ AYUSO DISPARA UN 42% EL NÚMERO DE MADRILEÑOS EN LISTA DE ESPERA SANITARIA

Con la actual presidenta, el número de pacientes que esperan para una operación, una prueba diagnóstica o la visita de una especialista ha pasado de 653.288 a 929.760 según los últimos datos de la Comunidad.

El número de madrileños que se encuentra en una lista de espera se ha disparado desde que Isabel Díaz Ayuso accedió a la presidencia de la Comunidad de Madrid. En octubre de 2019 eran 653.288 los madrileños que aguardaban su turno para una operación, una prueba diagnóstica o para la visita de una especialista. Esa cifra se ha incrementado un 42% desde entonces, con 276.472 personas más.

Los últimos datos publicados por el gobierno regional apuntan a que ahora, en octubre de 2022, son 929.760. El dato es también superior al de hace solo un año, cuando eran 792.930 las personas que formaban parte de esas listas, un 17,2% de incremento.

Tampoco mejora el tiempo de media que los madrileños tienen que esperar. Para una operación, en 2019, la espera media estaba en 45,88 días, ahora es de 65,8. En las de especialistas se pasa de 36,6 a 62,88 días y en las diagnósticas de 46,47 a 60,63 jornadas.

La situación es especialmente dramática en el acceso a los médicos especialistas. El mayor tapón en las listas de espera en la sanidad del gobierno de Ayuso se encuentra en esa estadística que acumula ya 642.905 pacientes frente a los 430.397 de octubre de 2019, el año en que comenzó la gestión de la presidenta. El año pasado, a estas alturas, esa lista se situaba en las 536.635 personas.

El doble de madrileños esperando más de tres meses

Sí consigue mejorar, ligeramente, el gobierno de la Comunidad de Madrid respecto a los datos del mes de septiembre de este año. En ese mes eran 933.367 los madrileños en alguna de las tres listas de espera, 3607 personas más. También ha descendido levemente la espera media, de 71,26 días a 65,8 en operaciones, de 64,4 a 62,88 en especialistas y de 63,05 a 60,63 en pruebas diagnósticas. Eso sí, son más de medio millón los madrileños que esperan más de tres meses para alguna de estas opciones sanitarias, concretamente 514.888. En el mismo mes de 2019, la cifra era de solo 221.246.

<https://cadenaser.com/cmadrid/2022/11/16/ayuso-dispara-un-42-el-numero-de-madrilenos-en-lista-de-espera-sanitaria-radio-madrid/>

AYUSO FRENTE A LA MAREA BLANCA DE LAS PROTESTAS SANITARIAS: "MANIFESTACIONES, SÍ. BOICOTS, NO"

La oposición reclama a la presidenta que destituya al consejero de Sanidad y le advierte de que su futuro está en peligro si no lo hace

La advertencia llega alta y clara a través de la voz de Alejandra Jacinto, la portavoz de Podemos: "Madrid no tiene mar, pero tiene mareas. Y si usted no cambia, esa marea se la va a llevar por delante". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha escuchado ese mensaje este jueves en la Asamblea de Madrid sin que le hiciera mella alguna. La líder conservadora ha ido al Parlamento regional a hablar de otra cosa. De Irene Montero —"Su ministra, que ataca a los jueces [por la aplicación de la ley del solo sí es sí], y los culpa de sacar a los violadores cuando es ella la responsable, debería dimitir", ha dicho—. De proteger el Valle de los Caídos. O de derogar la ley de memoria democrática —"Será lo primero que hagamos cuando tengamos mayoría en el Congreso", anuncia en nombre de su partido—. Pero la oposición es tozuda. Quiere que Ayuso hable de los problemas que afectan a Madrid y no de asuntos sobre los que no tiene ninguna competencia. Que deje, en definitiva, de desviar la atención para no enfrentarse al gran elefante en la habitación: que hay dos huelgas de médicos en la región por la crisis de la sanidad pública, que reunió a 200.000 personas en una manifestación celebrada el domingo.

"Si no destituye al señor consejero por la chapuza sanitaria, la chapuza sanitaria le hará dimitir a usted. Y si no, pregunte al señor Lasquetty", le lanza a la presidenta regional Mónica García, la líder de Más Madrid, recordándole que al hoy consejero de Hacienda le costó el puesto en Sanidad, allá por 2014, una movilización similar a la que hay ahora en la sanidad madrileña.

"Tras haber despedido a 6.000 sanitarios, ¿asume la responsabilidad del caos en la sanidad pública?", le pregunta Juan Lobato, el líder del PSOE en Madrid.

"Ha conseguido poner de acuerdo a miles de madrileños, que piensan distinto en muchas cosas por este maltrato", le dice Jacinto, de Podemos.

Hay momentos en los que Ayuso hasta parece disfrutar de las críticas. Mientras habla Lobato, por ejemplo, mira cada poco de reojo el reloj que tasa cuánto le queda de intervención a su rival, y se sonríe, como relamiéndose con la réplica que ya prepara en su fuero interno. Pero al final tiene que hablar de sanidad. Y se corrige a sí misma. Porque si el lunes la presidenta minusvaloró la manifestación del domingo, considerándola como el producto de la politización de la izquierda, este jueves introduce matices en esa afirmación que asombró incluso a Vox, su único socio posible en el Parlamento regional.

"Si la manifestación fuera para defender la sanidad pública, habrían acudido los siete millones de madrileños", arrancaba la líder conservadora. "Por un lado están las protestas de los sanitarios, que comprendemos, y están en su derecho, y por el otro sus pretensiones [las de la oposición], que son vivir de lo público, reventarlo y privatizarlo para sus intereses electorales, desanimando a los ciudadanos, a los profesionales, llegando a acusarme a mi de asesina, de que mato", se queja. "Va más allá de la sanidad. De aquí a mayo intentarán reventarlo todo", opinaba. Para rematar, mirando a Mónica García: "Aquí lo que gobierna es la democracia representativa. Usted tendrá la ira, pero no la razón. Manifestaciones, sí. Boicots, no. La sanidad pública es de todos".

La referencia a la ira no es casual. Retrotrae subliminalmente a una canción, Libertad sin ira, de Jarcha, íntimamente vinculada a la Transición, y luego a las manifestaciones y protestas contra el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco por parte de ETA. Es la banda sonora de las movilizaciones ciudadanas en boca de la líder regional, que precisamente ahora se enfrenta a las protestas contra su Gobierno para defender la sanidad pública en la región que preside.

<https://elpais.com/espana/madrid/2022-11-17/ayuso-frente-a-la-marea-blanca-de-las-protestas-sanitarias-manifestaciones-si-boicots-no.html>

QUÉ OCURRE EN LA SANIDAD MADRILEÑA: CAOS EN URGENCIAS, DOS HUELGAS DE MÉDICOS, DIMISIONES Y UNA PROTESTA MASIVA

El sector presenta graves carencias, más allá de la reapertura de este servicio cerrado durante la pandemia, pese a que Ayuso insista en reducir el problema laboral y social a un conflicto político azuzado por la izquierda

Tras la masiva protesta en defensa de la sanidad pública del domingo en la capital, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusó el lunes a la izquierda de “incendiar Madrid” con el fin de ganar las elecciones de mayo y volvió a reducir un complejo problema laboral y social a un mero conflicto político. Pero ¿qué pasa realmente en la sanidad madrileña? ¿De qué se quejan los que salieron a la calle en esta reedición de las mareas blancas contra los recortes sanitarios de finales de 2012? ¿Qué ha ocurrido con el plan de reapertura de las urgencias extrahospitalarias, que sigue sumido en el caos casi un mes después y que ya va por la enésima rectificación? ¿Qué reclaman los médicos y por qué hay dos huelgas en el sector?

Las urgencias extrahospitalarias

El origen del conflicto está en el plan para la reapertura del servicio de urgencias extrahospitalarias, cerradas el 22 de marzo de 2020, una semana después de que se decretara el estado de alarma por la covid-19. La clausura, que no se decretó en ninguna otra comunidad, afectó a 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de la capital y de grandes municipios del cinturón, que atendían por las noches y fines de semana. En cambio, los 41 Servicios de Atención Rural (SAR) siguieron abiertos. En estos dos años y medio, la saturación de las urgencias hospitalarias se ha agravado y se han sucedido las protestas de trabajadores y ciudadanos.

En junio, el Gobierno regional anunció el cierre definitivo de los 37 SUAP. En su lugar, abrirían 17 puntos de atención continuada (PAC), 10 con médicos y 7 solo con enfermeras. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, habló de “reorganización”, pero para los sindicatos era un paso más en el desmantelamiento de la atención primaria. Ayuso defendió la medida en la Asamblea, pero 10 días después y ante las protestas vecinales, rectificó y aseguró que abrirían todos los SUAP y con médicos. El 20 de octubre, la Comunidad anunció el plan definitivo: 80 puntos —41 SAR, 37 SUAP y dos centros en El Molar y Alcalá de Henares—, que pasarían a llamarse centros sanitarios 24 horas.

El problema radicaba en que antes de la pandemia entre los SUAP y los SAR sumaban 360 médicos, pero el nuevo plan los reducía a 210: los que ya trabajaban en los SAR más voluntarios para cubrir huecos. Imposible, concluyeron los sindicatos. Y así ha sido. Los 80 centros 24 horas debían abrir el 27 de octubre y menos de 24 horas antes los profesionales no sabían a cuál debían acudir ni a qué hora, notificación que muchos recibieron de madrugada. Se dio de baja más de un 40% de todo el personal y el 60% de los médicos. Unos 30 facultativos renunciaron al puesto. En muchos centros no había —ni hay casi un mes después— médico, mientras que otros, sin ningún sanitario, no abrieron ni abren todavía. Por ejemplo, en la noche de Halloween 26 funcionaron sin médico y 12 estuvieron cerrados. El domingo, día de la manifestación, 6 estuvieron cerrados y en 37 faltaba personal.

En el primer día de huelga en contra del plan, el día 7, convocada por el sindicato médico Amyts, Ayuso anunció una tercera rectificación, que introdujo las polémicas videoconsultas para paliar la falta de médicos. Sanidad mantenía los 80 centros 24 horas, pero los dividía en 46 puntos presenciales con médico y enfermero, y 34 con dos enfermeras y teleconferencia con un facultativo. El rechazo de los profesionales vuelve a ser total, mientras el desconcierto en los centros de salud donde se implantará la videollamada es absoluto. Y el día 11, llegó la cuarta rectificación del plan inicial: apertura de 49 centros 24 horas con equipo completo y de otros 29 sin facultativo presencial, de los cuales unos 11 o 12 serán de cuidados (sin médico y sin videoconsulta). La respuesta del sindicato médico Amyts a este informe fue la petición de dimisión de Escudero, y el rechazo del modelo.

¿Es el único problema?

El conflicto ha estallado por las urgencias, pero sus raíces son múltiples y profundas. Aunque Madrid es la comunidad más rica de España, es la que menor porcentaje de inversión destina a sanidad, en contra de lo que afirma el Gobierno regional. Esta partida supuso en 2021 el 31,58% del Presupuesto madrileño, cifra que lleva cayendo desde 2005. Está a la cola, solo superada por Baleares, en médicos de familia por 1.000 habitantes y, mientras el conjunto del sistema ha aumentado su oferta de plazas de primaria en un 36%, en Madrid ha disminuido un 2% desde 2018, según los datos ofrecidos por la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

Además, los MIR no quieren trabajar en la Comunidad: en los últimos dos años terminaron la residencia 443 especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria y, de ellos, solo 37 se quedaron en Madrid; y en el caso de los pediatras, solo 6 de 155. Según los convocantes de la marcha, esta carencia de médicos hace que en Madrid haya 600.000 personas sin médico asignado y 212.000 niños sin pediatra.

Ante unas citas para ver al especialista para el dos mil nunca agravadas por la covid —la espera media en días (53) coloca a Madrid en la mitad de la tabla y el porcentaje de quienes aguardan más de 60 días sitúa a la región en antepenúltimo lugar—, el 38% de los madrileños tiene una póliza privada, el mayor porcentaje de un país en el que la media está en el 25%. La situación también está saturando los hospitales privados, con escenas de masificación que recuerdan a los públicos.

Dos huelgas convocadas por Amyts (y dos más de sindicatos minoritarios)

El rechazo al plan de reapertura de las urgencias extrahospitalarias con 150 médicos menos fue frontal, y los sindicatos llamaron a la huelga indefinida a partir del 25 de octubre. La víspera, la Comunidad consiguió 48 horas de tregua y los sindicatos accedieron a consultar las condiciones pactadas con los afectados. Al final, solo el sindicato de médicos (Amyts) decidió no suscribir el plan, que sí firmaron los otros cuatro sindicatos de la mesa sectorial, Satse, CC OO, CSIT UP y UGT, que consideraban que habían conseguido mejoras en las condiciones laborales, aunque no aumentar los efectivos. La huelga se desactivó, pero Amyts lanzó otra convocatoria de paros indefinidos, que comenzó el lunes 7 de noviembre con unos servicios mínimos del 100%. Tres días antes de iniciarse la huelga, los sindicatos firmantes rompieron unilateralmente el acuerdo en vista del caos con el que había comenzado el plan.

Además, del 4 al 6 de noviembre los sindicatos SummAT y Mats llevaron a cabo una huelga de tres días, a la que estaban llamados el Summa 112, los SAR y los SUAP. También ha habido otra huelga del 11 al 13 de noviembre, convocada por cinco sindicatos minoritarios —SummAT, Mats, CSIF, Afem y AME—. Y, al día siguiente del inicio de los paros en urgencias, Amyts llamó a los 5.000 facultativos de Atención Primaria y Pediatría a la huelga, también indefinida, a partir del día 21. La situación de este sector, sostiene el sindicato, es insostenible debido a la fuerte carga asistencial que soporta: mientras los organismos internacionales recomiendan que cada facultativo atienda a unas 20 o 25 personas al día, en Madrid tienen 50 o 60, lo que ha provocado que el 92% de los médicos de cabecera hayan sufrido o sufran agotamiento emocional. La carencia de pediatras es alarmante: Madrid necesitaría entre 900 y 1.200, pero solo hay 720.

Dimisiones en la Consejería

Ocho días antes del inicio de la huelga, la gerente de Atención Primaria, Sonia Martínez Machuca, dejó el cargo “por motivos médicos y personales”, según un portavoz del Gobierno regional. Ayuso la reemplazó con una doctora vinculada a la sanidad privada, Almudena Quintana. De julio a noviembre, ha habido seis salidas, ocho cambios de funciones y siete nombramientos en la Consejería de Sanidad. Y continúa el goteo: la noche del día 3, todos los miembros de la dirección asistencial sudeste —una de las siete que hay— registraron su dimisión en bloque debido al desastre en las urgencias ambulatorias. La gerente adjunta de Asistencia Sanitaria de Atención Primaria, Nuria Fernández de Cano, también dimitió ese día ante la “imposibilidad de seguir ejecutando las instrucciones que se reciben por parte de la gerencia”. Y el día 7, el Gobierno regional destituyó a Pedro José Suárez Sánchez, gerente adjunto de Gestión y Servicios Generales en la Gerencia Asistencial de Atención Primaria.

Ayuso culpa a la oposición

El consejero de Sanidad y diferentes representantes de la Comunidad, incluida la presidenta, evitan asumir responsabilidades en lo ocurrido, repiten la idea de que los médicos están organizándose para boicotear el plan, reiteran que investigarán una a una las bajas solicitadas y culpan a la oposición y a los sindicatos. “Es evidente que hay una inmensa mayoría de los profesionales sanitarios que quieren seguir trabajando con total normalidad y que hay una parte política que intenta boicotearlo todo. [Esta parte política] no quiere que la sanidad pública avance”, dijo Ayuso el día 2. Al día siguiente, habló de “terror sindical” y “terror político”. “La líder de Más Madrid [Mónica García], con su sindicato Amyts, lo que quiere hacer es reventar el sistema público y la sanidad madrileña”, ahondó el día 9. En cada comparecencia, Ayuso minimiza el problema y llegó a preguntarse en la Asamblea si la falta de “34 médicos dan para una huelga, un boicot y manifestaciones”. Cero autocrítica.

El papel de la oposición

La oposición de izquierdas ha hecho bandera de esta causa, pero todos los grupos políticos, incluido Vox, reprochan a la presidenta que ponga a los profesionales sanitarios en la diana y critican el plan de urgencias por precipitado y poco realista. Más Madrid es el grupo que más iniciativas ha puesto en marcha para frenar el plan: el día 3 lo denunció ante la Dirección General de Inspección, Ordenación y Estrategia Hospitalaria y el día 7, llevó el caso al Defensor del Pueblo.

Manifestación

El conflicto desembocó el domingo 13 en la primera gran protesta contra Ayuso desde que llegó al poder. Cientos de miles de personas —la Delegación del Gobierno los cifró en 200.000, cifra que los convocantes elevaron a 670.000— salieron a la calle en defensa de la sanidad pública, convocadas no por ningún partido o sindicato, sino por colectivos vecinales. La marcha, según los sindicatos, estuvo a la altura de las mayores movilizaciones durante la marea blanca que inundó Madrid hace una década contra las privatizaciones y los recortes del Gobierno de Ignacio González. Al día siguiente, la presidenta mantuvo su discurso, sin un atisbo de autocrítica: acusó a la izquierda de “incendiar” Madrid y de instrumentalizar la sanidad para llegar al poder “con juego sucio”.

Negociación

Ocho días después del inicio de la huelga y dos después de la protesta en las calles, Sanidad y Amyts se han reunido para tratar de acercar posturas y poner fin a la huelga indefinida. La cita ha acabado sin acuerdo, aunque se han acercado las posturas. El Gobierno regional ya prepara el enésimo plan de urgencias extrahospitalarias, en el que acepta que de los 80 puntos que presentaron no todos actuarán como un centro de urgencias; y que el sindicato elaborará ahora una contraoferta para presentar “lo antes posible” porque “los profesionales están sufriendo”.

<https://elpais.com/espana/madrid/2022-11-15/que-ocurre-en-la-sanidad-madrilena-caos-en-urgencias-cuatro-huelgas-de-medicos-dimisiones-y-una-protesta-masiva.html>

AYUSO RENUNCIA A 700 MILLONES DE EUROS ANUALES PARA LAS ARCAS PÚBLICAS CON SEIS REBAJAS FISCALES EN DOS AÑOS

El Gobierno regional da por cumplido el programa ideológico de su presidenta al enviar a la Asamblea un paquete de bonificaciones del IRPF en medio de la crisis sanitaria, energética y económica

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha aprobado desde las elecciones de mayo de 2021 seis rebajas impositivas que supondrán que las arcas públicas autonómicas dejen de ingresar por esos conceptos más de 700 millones de euros cada año. La última llegó el martes pasado, y consolidó a Madrid como la región que concentra la mitad de las rebajas fiscales de las comunidades en plena crisis por la sanidad, según un informe de la Autoridad Fiscal (Airef). Aunque el Ejecutivo defiende que eso redundará en un aumento de la

recaudación, y apoya esa tesis en que así ocurrió con el tramo autonómico del IRPF entre 2015 y 2019, su decisión llega en medio de las huelgas de médicos por la falta de recursos en la sanidad pública, en un difícil contexto económico, y tras aprobar en la Asamblea una ley para intentar evitar cualquier corrección al alza del Estado.

“Ayuso ha vuelto a aprobar otra ronda de regalos fiscales para un porcentaje bajísimo de las rentas más altas de Madrid”, critica Juan Lobato, líder de los socialistas madrileños y técnico de Hacienda del Estado. “Y además lo hace vendiéndolo como unas ayudas contra la inflación actual, pese a que no van a tener efecto hasta dentro de seis u ocho meses y a que van a tener un coste para las arcas públicas, justo cuando peor lo están pasando nuestros servicios públicos y la sanidad pública, y las urgencias están al borde del colapso”, recuerda el diputado, que lamenta que la mayoría de las bonificaciones del IRPF anunciadas no tengan un tope de renta para beneficiar solo a quien más lo necesita, como recoge el PSOE en las que ha propuesto. “No tiene sentido dar cientos de millones de euros en regalos fiscales a las rentas más altas, las que menos sufren la inflación, a costa de sustraer dinero público de las arcas, cuando nuestras urgencias están sin médicos y la sanidad pública está al borde del colapso y cuando 33.000 chavales se han quedado sin plaza de FP”.

Una opinión compartida por el resto de los partidos de izquierdas de la Asamblea (Más Madrid y Unidas Podemos), que contrasta con la del Gobierno y su único aliado, Vox.

“Son ya seis las leyes de bajada de impuestos aprobadas por el Gobierno de Ayuso”, defendió el martes pasado Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Hacienda, que dos días después, el jueves, celebró aprobar en la Asamblea una ley para defender la autonomía fiscal de la región que intenta equiparar a la Comunidad con el Estado. “Es el mayor impulso de bajada de impuestos que se ha hecho en la Comunidad de Madrid desde la primera legislatura en la que esto empezó, a principios de la década pasada: eso ha significado un ahorro para los madrileños de 60.000 millones que han generado actividad económica, empleo, y que han permitido por tanto también finalmente financiar mejor los servicios públicos”, argumentó.

Esa última afirmación resume un dogma del PP que Ayuso y Lasquetty aplican con fervor. Madrid, como el resto de España, afronta un contexto económico extremadamente complicado. Se superponen las crisis del coronavirus y los precios de la energía. El Ejecutivo regional predice que la recaudación de sus impuestos se resentirá un 4% en 2023. Y al mismo tiempo, ha planteado los Presupuestos con más gasto de su historia: 25.700 millones de euros.

Curva de Laffer

Frente a la tormenta, el PP ha aplicado una de sus recetas más clásicas, sobre todo en Madrid, donde gobierna ininterrumpidamente desde 1995. Todo se confía a la curva de Laffer, teorizada sobre una servilleta y mil veces negada por múltiples académicos: se supone que a menos impuestos, más recaudación, porque los ciudadanos tienen más dinero para gastar.

¿De dónde salen, entonces, los 700 millones de euros que dejará de recaudar Madrid porque así lo quiere? La principal reforma llegó en 2021: una rebaja de medio punto de todos los tramos autonómicos del IRPF valorada en 330 millones y que favorece especialmente a las rentas altas, como ocurre en todos los impuestos progresivos. Ese mismo año llegó un gesto de valor ideológico, propagandístico y político, aunque no económico: suprimir todos los impuestos propios (3,4 millones de euros, que apenas representaban un 0,02% de la recaudación). A esas dos decisiones se les han unido en 2022 deducciones para fomentar la natalidad (34,7 millones, aún en tramitación en la Asamblea); la ampliación al 25% de la bonificación del impuesto de Sucesiones y Donaciones para hermanos y tíos y sobrinos (48,3 millones de euros); la deflactación del IRPF (casi 200 millones, que de nuevo concentran el beneficio en las rentas más altas); y las seis bonificaciones anunciadas el martes pensando en 2023 (92 millones, aún por tramitar en la Asamblea).

Porque cuando Lasquetty habla, y se sonríe, feliz de que ya no esté Ciudadanos para impedir el pacto del PP con Vox (como ocurrió en 2020), está pensando en las elecciones del año que viene. El próximo mayo, Ayuso se juega doblemente su futuro, pues se la medirá tanto por el resultado autonómico (aspira a la mayoría absoluta) como por el municipal (preside desde mayo

el PP de Madrid y busca desplazar a la izquierda de sus principales bastiones). Y a esa cita quiere llegar con las rebajas de impuestos como una de sus cartas de presentación.

<https://elpais.com/espana/madrid/2022-11-15/ayuso-renuncia-a-700-millones-de-euros-anuales-para-las-arcas-publicas-con-seis-rebajas-fiscales-en-dos-anos.html>

AYUSO, LA BROMA INFINITA

Por Xose Hermida

La presidenta madrileña y Miguel Ángel Rodríguez reinventan el género del esperpento para aplicarlo a la política

Seguramente usted no lo sepa, pero si estos días ha sentido preocupación ante la eventualidad de que un médico le atienda de una emergencia a través de una pantalla, desde decenas de kilómetros de distancia, es que usted ha sucumbido al bolchevismo. Si vive en un pueblo de Madrid y está inquieto porque le hayan vaciado el centro de salud, su diagnóstico no ofrece dudas: le han infectado el virus de la ultraizquierda. Han pasado más de tres décadas desde la caída del Muro de Berlín y los tentáculos del marxismo llegan hasta las grandes empresas. Son esas corporaciones las que, según la presidenta de la Comunidad de Madrid, se han inventado una emergencia climática contra “la evidencia científica” para abrir paso al comunismo.

Si usted no ha seguido estos días a Isabel Díaz Ayuso, se ha perdido una ristra de revelaciones sensacionales como estas. Pedro Sánchez, sin ir más lejos, está urdiendo un golpe para acabar con la Monarquía, la religión y la Guardia Civil, instaurar una “República Federal Laica de facto” y meter en la cárcel a la oposición “como Daniel Ortega en Nicaragua”. Cuesta creerlo, sí, pero en los últimos tiempos, en diversas partes del mundo, otros visionarios han sacado a la luz cosas que jamás hubiésemos sospechado. Los seguidores de Trump revelaron al mundo la red de pederastia que manejaban los demócratas bajo la tapadera de una cadena de pizzerías. Y los de Bolsonaro abrieron los ojos a millones de brasileños sobre el plan de la izquierda para repartir en las escuelas chupetes con forma de pene.

Hace tiempo que desaparecieron del madrileño callejón del Gato los espejos deformantes que hizo célebres Valle-Inclán. Pero una mente creativa los ha rescatado a solo unos centenares de metros de distancia, en la Puerta del Sol, donde tiene su sede la presidencia madrileña. Como una nueva corte de los milagros, allí han reinventado el género del esperpento para aplicarlo a la política, con la presidenta como protagonista de escena y el incombustible Miguel Ángel Rodríguez —condenado en 2011 por llamar “nazis” a los médicos que sedaban a enfermos terminales— reescribiendo cada día el guion.

Hasta ahora, el éxito de crítica y público ha sido clamoroso. La obra cosechó una gran ovación en las urnas y tiene entusiasmado al grueso de la derecha local. Cada día nos obsequia con un nuevo ejemplo de los conmovedores esfuerzos estilísticos de buena parte del periodismo de la capital por perfeccionar sus loas a esta Agustina de Aragón reencarnada. “Principal valedora, si no la única, contra la voracidad irresistible del nacionalsanchismo”, se escribía estos días en uno de los grandes periódicos madrileños.

Durante una conferencia este lunes en el club Siglo XXI, Ayuso repitió y enriqueció algunas de las referidas denuncias. Luego se fue a una reunión al PP, donde el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, abjuró de “los histrionismos y las estridencias” en política. A saber en quién estaría pensando.

<https://elpais.com/espana/2022-11-14/ayuso-la-broma-infinita.html>

“ULTRAIZQUIERDA”, “AGITACIÓN” Y “JUEGO SUCIO”: AYUSO ACTIVA TODOS LOS RESORTES ANTE EL ÉXITO DE LA PROTESTA POR LA SANIDAD PÚBLICA

La presidenta madrileña evita hacer autocrítica, pero se abre a “mejorar las condiciones” de los sanitarios pese a que considera que la manifestación “no tiene nada que ver” con “reclamar derechos laborales”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido responder a la exitosa manifestación del domingo en defensa de la sanidad pública elevando aún más el tono contra la oposición de izquierdas, a la que ha llegado a acusar de buscar con la protesta un cambio de régimen en España. Lejos de hacer autocrítica, Ayuso utilizó este lunes el rosario de críticas habitual que le había servido hasta ahora para afianzarse en la Puerta del Sol y no asumir responsabilidades por el caos de las urgencias o la situación de la atención primaria en la región, dos de las razones que motivaron la masiva movilización del fin de semana. “Ultraizquierda”, “activistas”, “juego sucio” o “fracaso” son algunos de los calificativos que ella y su círculo de más confianza profieren ahora contra una multitud que salía a la calle para sacar músculo en defensa de lo público.

Fueron 200.000 personas según la Delegación del Gobierno y 670.000 según los organizadores. Es una cifra mayor, en cualquier parámetro, que la que consiguieron congregarse en Colón las tres derechas de PP, Ciudadanos y Vox en 2019 para exigir la dimisión de Pedro Sánchez. Pero la presidenta madrileña considera que los manifestantes eran pocos y sus reivindicaciones, ilegítimas. “Si fuera por la sanidad pública, hubiesen acudido dos millones de madrileños”, afirmó en un desayuno informativo este lunes.

Esas eran las primeras palabras de Ayuso sobre la multitudinaria manifestación. Antes había pronunciado un discurso, que luego difundió desde su cuenta de Twitter, en el que atacaba duramente al presidente del Gobierno a cuenta de la reforma del delito de sedición. Durante su parlamento, la presidenta madrileña recuperó sus grandes bazas: ETA, el independentismo y Venezuela. Frente a un auditorio entregado, en el Club Siglo XXI, dibujó una línea entre Miguel Ángel Blanco –el concejal del PP en Ermua asesinado por ETA en 1997– y el supuesto plan de Sánchez para “desmembrar España como nación”. “Detrás de este deterioro y asalto a las instituciones, hay un plan con una ideología clara detrás: instaurar en España, al margen de los mecanismos constitucionales, una república federal laica de facto”, afirmó.

Ayuso obvió mencionar, sin embargo, el deterioro de la sanidad pública que denunciaron el domingo en las calles los ciudadanos. Ni las listas de espera quirúrgicas, que han pasado de 75.000 a 99.000 personas desde que gobierna. Ni las demoras de hasta 15 días para una consulta con el médico de familia. Ni el caos en la reapertura de las urgencias extrahospitalarias urbanas a cuenta de desmembrar la atención continuada en el mundo rural.

“¿Que hay que boicotear la sanidad en Madrid, tomar las calles y los hospitales y hacer creer a los ciudadanos que tienen una mala sanidad, cuando, aun en medio de una crisis internacional de los modelos sanitarios, es excelente comparada con cualquier lugar del mundo? Pues se hace”, se refirió Ayuso al conflicto sanitario. En su discurso, en el que no mencionó la manifestación, señaló que “el problema es que además del deterioro de unos servicios públicos que ha costado décadas levantar, se impide el debate sereno para una reforma necesaria en un mundo que envejece”.

Tras reclamar ese debate sereno, Ayuso saltó al ataque. “Si los activistas de la izquierda acudieran a nuestros hospitales, a lo mejor habría menos demagogia”, acusó. “La izquierda, en lugar de buscar soluciones a través del acuerdo y la negociación, en lugar de pedir un pacto nacional para solucionar la falta de médicos que afecta a toda España, que es el problema real, el verdadero asunto, ha optado por politizar las dificultades. Esa es la estrategia desestabilizadora de una izquierda irresponsable que busca desesperadamente aferrarse al poder o llegar a él, como es el caso de Madrid, a través de la confusión, la agitación y el juego sucio”, continuó.

Es la fórmula que han encontrado en la Puerta de Sol para desviar la responsabilidad de los problemas sanitarios –cuya gestión está transferida a las comunidades desde hace casi dos décadas– al Ejecutivo central. En España faltan médicos, pero en ninguna comunidad la situación se ha tensado hasta el punto de Madrid. Este lunes, los presidentes autonómicos del PP han evitado pronunciarse sobre la manifestación, mientras Ayuso extiende la sospecha de sus

problemas sanitarios sobre el resto de territorios. Lo único que han reclamado los consejeros de Sanidad conservadores ha sido que el Gobierno les facilite una solución consensuada ante la escasez de médicos de familia.

“Cuando desde el activismo de izquierdas tratan de confundir a la opinión pública diciendo que un centro sanitario 24 horas (como ha rebautizado a los servicios de urgencias extrahospitalarias) debe funcionar como un pequeño hospital o cuando meten miedo diciendo que la videoconferencia sustituye a un médico en urgencias, hacen eslóganes desde la falsedad”, argumentó la presidenta para salir al paso de las críticas por los 34 centros en marcha sin personal médico presencial, solo con teleconsulta. Una medida que han criticado profesionales y sindicatos y que impediría, por ejemplo, realizar una reanimación cardiopulmonar avanzada.

“Cuando dicen que nuestro sistema sanitario atenta contra la Sanidad Pública, sabemos, simplemente, que sus discursos los han escrito aquellos que no utilizan nuestro sistema público porque les atienden en hospitales privados”, cargó Ayuso sin miramientos. Desde que anunció su intención de reabrir los 37 servicios de urgencias de Atención Primaria que cerró por la pandemia con los cerca de 200 médicos que trabajaban en los Servicios de Atención Rural (SAR), han renunciado una treintena de ellos, según han contabilizado los sindicatos, alegando cambios de horarios, destinos forzosos y la imposibilidad de prestar una atención óptima a sus pacientes.

“Mejorar sus condiciones”

Ayuso, desde cuyo Gobierno se llegaron a deslizar acusaciones de boicot contra los médicos, ha afirmado ahora que siempre estarán “dispuestos” a “intentar mejorar sus condiciones”. “Sabemos que son indispensables porque la protección de la salud es un derecho constitucional y hay que contar con ellos y que su bienestar profesional es esencial para que podamos disponer del mejor sistema sanitario”, dijo en un doble y contradictorio discurso en el que terminó acusando a la izquierda de “llegar al poder a través de la agitación y el juego sucio”.

Como en sus intervenciones cabe todo, Ayuso pasó del compromiso de mejorar las condiciones laborales de los sanitarios a afirmar que “lo que está pasando en Madrid no tiene nada que ver con el derecho de todos los profesionales a reclamar derechos laborales”. Casi a la vez, su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en el punto de mira y de quien oposición y sindicatos piden la dimisión, aseguraba en Telecinco que esta “manifestación política” no va a “desviar” al Gobierno regional. “Tenemos un plan trazado”, advirtió. Sin embargo, esa estrategia ha ido sufriendo cambios desde que la presidenta anunció la reapertura de los SUAP. Primero no serían todos y no todos con médicos. Luego serían todos con médico paulatinamente. Después, todos a la vez. Ante el caos, unos con médicos y otros con teleasistencia. El del viernes fue el quinto cambio en apenas cinco meses.

Este martes, la Consejería ha convocado al comité de huelga a la primera reunión desde que el conflicto se materializara en un paro el pasado 7 de noviembre, hace ahora ocho días, y con las posturas igual de distanciadas ante la perspectiva de mantener servicios sin personal médico.

La utilización de Telemadrid

Para su plan, Ayuso cuenta con un aliado en la televisión pública. Tras dos reformas de la ley del Ente, que ha utilizado para poner una dirección afín, la estrategia mediática madrileña ha dado sus frutos. Este domingo, la cadena minimizó la manifestación. “La izquierda toma la calle a seis meses de las elecciones municipales y autonómicas. Manifestación contra Ayuso por la reforma de las urgencias extrahospitalarias. Miles de personas convocadas por sindicatos y partidos políticos para defender, dicen, la sanidad pública. Sus portavoces atacan a la presidenta y exigen responsabilidades políticas. Para el Gobierno regional, la izquierda utiliza políticamente la sanidad”, relataba el presentador del informativo al mediodía.

Una entradilla en línea con el objetivo de la presidenta madrileña de acotar las reivindicaciones a meras proclamas políticas al servicio del líder de izquierdas que mejor convenga. El jueves, el sindicato que convocó la huelga estaba a las órdenes de Mónica García. Este lunes, la manifestación había sido convocada por el PSOE. “El Partido Socialista en Madrid montó una manifestación contra el PP y se la entregó a Más Madrid”, dijo, para acusar de un supuesto “giro a la ultraizquierda” en manos “de una escisión de Podemos”.

https://www.eldiario.es/madrid/ultraizquierda-agitacion-juego-sucio-ayuso-activa-resortes-exito-protesta-sanidad-publica_1_9710187.html

AYUSO DESACREDITA LA MANIFESTACIÓN POR LA SANIDAD E INSISTE EN QUE SÁNCHEZ PLANEA UN GOLPE DE ESTADO

La presidenta regional ha desviado el foco de las reivindicaciones y apunta al "activismo de izquierdas" como el culpable

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a desacreditar las manifestaciones protagonizadas por los profesionales sanitarios este domingo en las calles de la capital y ha insistido en acusar al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de estar planeando un golpe de Estado. "Quiere instaurar en España una República federal laica", ha afirmado este lunes en un desayuno del Club Siglo XXI.

"No fue en defensa de la sanidad"

En el que ha sido el primer acto de la lideresa tras las multitudinarias manifestaciones por la sanidad pública de este domingo, Ayuso ha vuelto a culpar al "activismo de izquierdas" como azuzador de las protestas y que "busca aferrarse al poder a través de la confusión, la agitación y el juego sucio". "No fue en defensa de la sanidad pública sino para buscar el liderazgo de la ultra izquierda por el debacle del PSOE", ha cargado.

A su juicio, si hubiera respondido a una lucha por la sanidad hubiera habido "más de dos millones de madrileños" en las calles, por lo que "fue otra cosa, se mezclaron varios colectivos". Así, ha acusado a Más Madrid de monopolizar las protestas, en las que dice se produjeron proclamas como "Ayuso asesina". "No era solo de médicos. Ayer el porcentaje era muy diferente y eso tiene que hacer pensar qué ocurre en el PSOE, que se la entregó a Más Madrid", ha dicho.

"Se ha utilizado un pretexto sobre las urgencias 24 horas, sobre las que se ha vertido muchas mentiras. Algo distinto es afrontar la situación de los médicos de la Atención Primaria y otra el pretexto de los centros", ha justificado sobre la puesta en marcha de las nuevas urgencias extrahospitalarias, que han derivado en las protestas y en las denuncias por todo el sector por el "caos" que se ha producido desde el primer día de entrada en vigor de este plan.

"No son hospitales. Cuando alguien tiene una urgencia real llama al 112 y va al hospital. Estos centros sirven para cuestiones menores", ha dicho antes de explicar que es "rotundamente falso" que se puedan atender a pacientes con ictus ya que "no son centros para urgencias de gravedad", en contra de los que dice se empeñan en defender desde la oposición.

Según sus palabras, esto responde a una "campaña en contra y una movilización absoluta de plataformas", entre las que destacan "algunos sindicatos que no quieren llegar a acuerdos". Con todo, ha rebajado el tono con los profesionales sanitarios, a los que ha querido manifestar su "respeto". "Seguiremos trabajando por la sanidad pública, donde no ha habido nunca tanta inversión ni tantos médicos".

"Nosotros siempre estaremos dispuestos a escuchar a los médicos y enfermeros; a intentar mejorar sus condiciones porque sabemos que son indispensables, porque la protección de la salud es un derecho constitucional y que hay que contar con ellos y que su bienestar profesional es esencial para que podamos disponer del mejor sistema sanitario", ha asegurado.

Sánchez "quiere instaurar en España una República federal laica"

Ayuso ha querido desviar el foco de las protestas cargando una vez más contra el presidente del Gobierno, a quien ha acusado de "asaltar las instituciones". "La motivación de Sánchez es el poder a toda costa. Utilizan las instituciones para beneficiarse de manera autoritaria. Tienen un plan de instaurar en España una República federal laica", ha asegurado en la misma línea que la pasada semana, cuando aseguró que preparaba un golpe de Estado para "acabar con la monarquía".

Además, ha denunciado una suerte de boicot por parte de la coalición en contra de su gobierno y ha asegurado que "Madrid es una pieza a batir" a la que "se la persigue, denigra e incendia". "Sánchez ha entrado en una deriva peligrosa. Es una estrategia de la carcoma al servicio de los independentistas. Para él hay españoles de primera y de segunda", ha sostenido antes de afirmar que el socialista "invade" algunas de sus competencias al frente de la región, como la fiscalidad, para "hacer daño" a través de un "chantaje".

"Animo a no dormirse a quien crea que el peor de los modelos no va a llegar. Sánchez firma nuestra rendición, nadie lo votó para tal cosa", ha afirmado antes de denunciar que "peligra la prosperidad y la libertad" de la región en manos de los "comunistas". "Son los comunistas los que intentan destruir lo conseguido", ha advertido para reivindicar su modelo como "alternativa proyecto autoritario que nos amenaza".

https://www.elplural.com/autonomias/madrid/ayuso-desacredita-manifestacion-por-sanidad-insiste-sanchez-planea-golpe-estado_301110102

FEIJÓO PIDE "MODERACIÓN" FRENTE A LOS ATAQUES DE AYUSO A SÁNCHEZ: "NO ESTAMOS AQUÍ PARA INSULTARLE"

El líder del PP critica la postura del Gobierno sobre la sedición y apela a los barones del PSOE para que "se posicionen"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado un dardo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al respecto de su tono duro y sus constantes ataques contra Pedro Sánchez. Ha pedido "moderación" y ha asegurado que no están aquí "para insultarle". Además, ha vuelto a apelar a los barones del PSOE al respecto de la reforma de la sedición para que "se posicionen". "O se está con el interés particular de Sánchez o con los intereses generales de España", ha afirmado tras insistir en que va a presentar una propuesta para que este delito vuelva a estar tipificado en el Código Penal.

"No estamos para insultar a Sánchez"

De esta forma se ha manifestado el líder de los populares este lunes en el Comité Ejecutivo Nacional frente a la cúpula de la formación y algunos dirigentes regionales, entre los que ha destacado Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, Paco Núñez, líder en Castilla La Mancha, o Ayuso, entre otros. Precisamente a esta última ha querido mandar un mensaje de "moderación" frente a los "despropósitos" y las "crisis" que -dice- lleva protagonizando en las últimas semanas el Ejecutivo de coalición.

"Tenemos que trabajar para que el cambio que necesitan las familias sea una realidad", ha comenzado a esgrimir. "Os propongo hacerlo con serenidad, por mucho que nos provoquen; con moderación, por mucho que se alteren; y con la centralidad que unen a la mayoría de los españoles", ha afirmado frente a los miembros de la formación, un argumento que ha ido más allá. "No estamos para insultar a Sánchez, ni para poner más radicalismo, ni más histrionismo ni ocurrencias", ha continuado. Unas palabras que chocan frontalmente con las manifestadas por la lideresa este mismo lunes en un desayuno, donde ha insultado y lanzado graves acusaciones contra el socialista.

Feijóo busca el voto del PSOE

Con todo, su intervención en el Comité ha estado muy centrado en el debate sobre la reforma del delito de la sedición y de la posibilidad de abrirlo también a la malversación, algo de lo que ha acusado directamente a los políticos independentistas y a Sánchez y su intento de seguir en el poder. "Todo se hace por intereses particulares", en referencia a sus palabras y las de Ayuso de que el presidente "hace lo que sea por seguir en La Moncloa".

Así, Feijóo ha lanzado un mensaje a los "moderados" socialistas para intentar atrapar su voto, a través de una suerte de referéndum para que se "pronuncien" sobre lo que ha calificado de "cacicada". "El PSOE hasta ahora era inquebrantable pero ya no es fiel a algunos de los valores constitucionales ni a sí mismo. Nosotros no abandonaremos esos principios, lo seguiremos

haciendo con todos aquellos que nos quieran acompañar en la centralidad y en la moderación con absoluta determinación", ha dicho.

Ha asegurado que muchos votantes socialistas le han trasladado "su malestar, estupefacción y tristeza" ya que "saben que se acepta desproteger el Estado por una razón: la necesidad de que una persona se mantenga en el poder". Por eso, ha apelado a todos los barones de la formación que "traten de frenar la deriva de su partido". "En esto no caben medias tintas. Están obligados a dar un paso al frente para hablar y posicionarse para votar", ha afirmado.

A su juicio, esto "no es asunto de Ferraz" ya que los diputados del PSOE "participarán directamente en esta decisión como representantes de sus comunidades autónomas", y les advierte. "Las consecuencias no solo será para ellos sino para nuestro país. En este tema o se está con el interés particular de Sánchez o con los intereses generales de España", ha asegurado.

Tipificar la sedición contra "Junqueras, Puig u Otegi"

Así, el presidente de los populares ha anunciado, como ya ha hecho en las últimas semanas, que va a presentar una propuesta "para mantener la sedición en el Código Penal y que se introduzca cualquier convocatoria ilegal para separar del resto de España", algo que responde a una labor "imprescindible" frente a los "sedicionistas", de los que dice "no ofrecen nada a cambio" y "se jactan de haber logrado facilidades". En realidad, el dirigente del PP se refería a su petición de volver a tipificar este delito, que fue retirado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque desde el Génova, sin embargo, no avanzan cómo van a hacer esta propuesta ni en qué formato.

Con todo, Feijóo ha vuelto a avisar de las "consecuencias de enorme gravedad" que conlleva la reforma de la sedición y ha alertado de que "después pueden venir otras cosas, como legalizar el referéndum ilegal para mantenerse en el poder". "No es una concesión que los demócratas podamos hacer a cambio de renunciar a su principal objetivo", ha afirmado antes de acusar a Sánchez de mentir y tras asegurar que este está supeditado a los deseos de "Junqueras, Puig u Otegi". "Ellos son los interlocutores principales de los que nos piden que callemos. A mí no me van a silenciar", ha sostenido.

"Falta a la verdad como cuando dijo que no aprobaría los indultos políticos y los aprobó", ha comenzado a esgrimir y poner como ejemplo que "dijo que el delito de sedición no existe", que los países europeos tienen penas más laxas "cuando algunos incluso recogen la prisión permanente" o que "lo hace por Cataluña". "Hace dos semanas dijo que no lo haría, hace una que no tenía los votos, hace unos días que no tenían la iniciativa. Pretendían engañarnos, querían nuestra complicidad. Ni la tienen ni la tendrán", ha manifestado en referencia a su decisión unilateral de hacer volar por los aires las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Sin menciones a la Sanidad

Sobre lo que no ha hecho mención alguna es al respecto de las manifestaciones en defensa de la sanidad pública madrileña que este domingo han inundado las calles de la capital. Unas reivindicaciones que Ayuso ha desacreditado para poner el foco, una vez más, en los planes que dice tiene Sánchez para "instaurar en España una República federal laica".

https://www.elplural.com/politica/fejoo-pide-moderacion-frente-ataques-ayuso-no-estamos-aqui-insultarle_301123102

AYUSO ACUSA A LA IZQUIERDA DE "INCENDIAR" MADRID Y DE USAR LA SANIDAD PARA LLEGAR AL PODER "CON JUEGO SUCIO"

La líder regional vincula las huelgas de los profesionales y las protestas de los ciudadanos con las elecciones de mayo, dice que la región "es una pieza a batir" y acusa a Sánchez de "desmembrar España"

La manifestación en defensa de la sanidad pública, que el domingo reunió a 200.000 personas en las calles de la capital de España, es un tema aparentemente secundario para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. ETA, la caída del muro de Berlín o sus acusaciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez —que “busca desmembrar España como Nación [e] instaurar en España una República Federal Laica de facto”, dice— aparecen antes que esa movilización ciudadana en el discurso que ha pronunciado este lunes la líder conservadora en el Club Siglo XXI. Pero las más de 100 personas congregadas para escucharla esperaban esa referencia. Y cuando llega el momento, Ayuso mantiene su táctica de obviar cualquier responsabilidad en una crisis que ha provocado dos huelgas indefinidas de médicos: acusar a la izquierda de “incendiar” la capital para llegar al poder “a través de la confusión, la agitación y el juego sucio”; e intentar enfrenar a Mónica García (Más Madrid) y Juan Lobato (PSOE) al reducir la movilización del domingo a un pulso para decidir “un nuevo liderazgo de ultr Izquierda en la Comunidad”.

A primera hora de este lunes, con Madrid atascada por la huelga de transportistas y la lluvia, Ayuso se abre camino entre un torrente de admiradores y cámaras. Es un éxito de convocatoria, pues se llena a rebosar un inmenso salón de actos en el hotel NH Eurobuilding. Y la presidenta regional no defrauda a sus seguidores. “Sostengo que Sánchez y sus socios, más allá de mantenerse a toda costa en el poder, siguen una estrategia que busca desmembrar España como nación [e] instaurar en España, al margen de los mecanismos constitucionales, una República Federal Laica de facto”, dice. Y acusa: “Madrid es una pieza esencial a batir, una vez que saben que no la consiguen ganar en las urnas. Por eso se la persigue como capital, se la denigra e incendia a toda costa”.

Esa acusación con el peso de una bomba nuclear no genera el más mínimo murmullo entre los espectadores, quizá acostumbrados a las hipérbolas de la presidenta regional, que ha llegado a ese punto dejando duras críticas contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero —“es difícil exagerar el daño que este hombre le ha hecho a España, Hispanoamérica y el Estado de derecho”, dice— o los independentistas —“los une el afán de destruir la nación española”, acusa—. Y entonces, sí, llega el momento de que Ayuso se refiera a un asunto de su competencia, la crisis sanitaria de Madrid. Y de nuevo, como en los últimos días, la líder conservadora evita el problema laboral que ha llevado a los médicos a la huelga para transformar el asunto en un conflicto político.

“Cuando desde el activismo de izquierdas tratan de confundir a la opinión pública diciendo que un Centro Sanitario 24 horas debe funcionar como un pequeño hospital; o cuando meten miedo diciendo que la videoconferencia sustituye a un médico en Urgencias, hacen eslóganes desde la falsedad”, defiende la presidenta de la Comunidad de Madrid. “La izquierda, en lugar de buscar soluciones a través del acuerdo y la negociación, en lugar de pedir un pacto nacional para solucionar la falta de médicos que afecta a toda España, que es el problema real, el verdadero asunto, ha optado por politizar las dificultades”, afirma.

“Esa es la estrategia desestabilizadora de una izquierda irresponsable que busca desesperadamente aferrarse al poder o llegar a él, como es el caso de Madrid, a través de la confusión, la agitación y el juego sucio”, añade. Y remata: “Madrid es una pieza esencial a batir, una vez que saben que no la consiguen ganar en las urnas”.

El Gobierno de Madrid sabe que las posibilidades de llegar en estos momentos a un acuerdo con los sindicatos son pocas: los trabajadores se han visto reforzados por la manifestación que colapsó el domingo el centro de la capital. Sin embargo, los estrategas gubernamentales también ven en el conflicto una posibilidad política. Durante los dos últimos años, el PP de Madrid ha trabajado para convertir a Mónica García, líder de Más Madrid, en la némesis de Ayuso. Esa apuesta busca alentar el miedo a su posible llegada al poder para movilizar al voto conservador en las próximas elecciones. Hasta ahora, el PP no había considerado posible aplicar la misma receta con Juan Lobato, el líder del PSOE, que ha enviado una veintena de cartas a la presidenta ofreciéndole pactos y soluciones; que se ha ofrecido para negociar los Presupuestos en lugar de Vox y que tiene un estilo propositivo que huye de la confrontación. Hasta ahora. En la manifestación, piensa Ayuso, está la oportunidad de radicalizar la percepción de Lobato.

“Lo que está claro es que Sánchez, ya que no va a poder gobernar la Comunidad de Madrid y que el proyecto socialista en Madrid está hundido, ha decidido entregárselo a la ultrazquierda, como ha hecho a nivel nacional”, ha dicho la líder conservadora. “Las bases socialistas dedicaron todo el día del domingo para ir a una manifestación que han entregado a Más Madrid. Han permitido que la ultrazquierda, a la desesperada, sea directamente quien gestiona el liderazgo en la Comunidad”, ha seguido. “Va a ser muy difícil para los alcaldes socialistas de Madrid explicar lo que está ocurriendo con el delito de sedición”.

Un ejemplo de que todo lo que ocurre ahora mismo en la región se interpreta en clave electoral. También la crisis de la sanidad autonómica.

<https://elpais.com/espana/madrid/2022-11-14/ayuso-acusa-a-la-izquierda-de-incendiar-madrid-y-de-usar-la-sanidad-para-llegar-al-poder-con-juego-sucio-y-a-sanchez-de-desmembrar-espana.html>

CIENTOS DE MILES DE PERSONAS TOMAN LAS CALLES DE MADRID FRENTE AL MALTRATO DE AYUSO A LA SANIDAD PÚBLICA

200.000 personas, según la Delegación del Gobierno, han llenado el centro de la capital tras dos semanas de caos en la gestión de la reapertura de las urgencias extrahospitalarias de la región

A favor de “una sanidad 100% pública, universal y de calidad”, ciudadanos convocados por colectivos sociales, organizaciones médicas, enfermeras, sindicatos y partidos políticos han tomado este domingo las calles de Madrid. Cientos de miles de personas ha inundado el centro de la capital en una multitudinaria manifestación contra el “plan de destrucción” de la atención primaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Bajo el lema “Madrid se levanta en defensa de la sanidad pública”, cuatro columnas de ciudadanos desde los cuatro puntos cardinales han caminado hasta la plaza de Cibeles. Desde Nuevos Ministerios, la plaza de Ópera, el hospital La Princesa y la estación de Atocha han desfilado cuatro riadas de personas que han confluído más tarde en la céntrica plaza. Al concentrarse alrededor del escenario, los manifestantes han guardado un minuto de silencio en memoria de los mayores fallecidos en las residencias. La Delegación del Gobierno cifraba, sobre las 13.30 horas, en 200.000 los asistentes a la marcha mientras que los organizadores elevan esa cifra a 670.000 personas.

Horas antes de que comenzara la movilización, circulaban por redes sociales fotografías de trenes de cercanías repletos de personas con destino a la marcha. Sobre las 12.00, hora de inicio de la marcha, el paseo del Prado aparecía repleto de personas con destino a Cibeles. Mercedes González, enfermera, camina por esa calle junto a sus hijas Sofía y Gabriela, vestidas con la indumentaria de la profesión de su madre. “Es importante luchar por las enfermeras, que son muy maltratadas”, afirma con fuerza Sofía. “Es mucho más que esto”, matiza Mercedes: “Lo que están haciendo es darnos una mala atención sanitaria. Es un problema que nos importa a todos, tanto a los sanitarios como a los pacientes”.

Teresa González, de 72 años, ha acudido sola, con su propia reivindicación que se puede leer en una pancarta que levanta sobre el mar de cabezas: “Ayuso, ocho meses para una cita con un especialista”. Tiene una ciática que le provoca muchas molestias y solo le dan cita a partir de abril. “Mientras tanto, hago fisioterapia, pero no me está ayudando mucho. Es absurdo que haya que esperar tanto para un problema de salud”, lamenta. No muy lejos de allí, precisamente un grupo de fisioterapeutas criticaba la desatención de ese sector. “En nuestro sector, fisioterapia, también hacen falta más profesionales porque somos uno por cada 35.000 pacientes. Con más fisioterapeutas podríamos hacer más prevención y promoción de la salud, pero no llegamos”, protestaba en declaraciones a este diario Elena Bejarano, informa María García Arenales.

Al frente de la marcha, las asociaciones de vecinos de barrios y pueblos de Madrid, organizadoras de la manifestación, sostienen una pancarta gigante: “Contra la destrucción de la Atención Primaria, Madrid se levanta por su sanidad pública”. Inmediatamente detrás, levantan una caricatura de Ayuso, rodeada por cientos de carteles en contra de la gestión de la presidenta. “Con Ayuso, hay abuso”, “Ayuso nos mata”, “El PP nos arruina la Atención Primaria” o “Que se

note a la hora de votar” , rezan los mensajes. La columna que sale de Atocha y que encabeza la protesta es la que menos recorrido tiene hasta llegar a Cibeles, por lo que han transformado la espera en una fiesta, con cantos y bailes reivindicativos.

Los médicos del sindicato Amyts, que llevan ya una semana de huelga indefinida, han salido del hospital La Princesa, junto a otros profesionales de sector. “No es boicot, es mala gestión”, han cantado los manifestantes de ayer, en respuesta a las palabras de Ayuso, que estos días ha acusado a “la izquierda” de boicotear la sanidad en la región. El centro se ha convertido en un símbolo de oposición a la privatización de la sanidad madrileña diseñada por los gobiernos del PP desde hace más de una década.

“Volvemos a sentirnos ninguneados y maltratados por la gestión sanitaria de la Comunidad de Madrid”, ha afirmado desde allí la portavoz del sindicato Ángela Hernández, que ha criticado la reestructuración de las urgencias a partir del personal de los centros de atención rural. “No es de recibo la disminución de la calidad de asistencia en esos municipios. Hay que sentarse, retrotraer este plan y negociar un plan de urgencias en la Comunidad de Madrid que lleva sin abordarse en la mesa sectorial desde 2007”, ha dicho.

Lucía García, enfermera del hospital 12 de Octubre, ubicado al sur de la ciudad, ha agradecido el apoyo de los miles de ciudadanos que ya marchan por la capital: “Este es el mejor aplauso que podemos recibir”. “Solo pedimos poder cuidaros como merecéis, como necesitáis. Unidos todos, ciudadanos y sanitarios, lo vamos a conseguir. La sanidad no se vende, se defiende. ¡A luchar!”, ha proclamado.

En el punto de inicio de otra de las columnas, la plaza de Ópera, los manifestantes han sacado sus pañuelos en señal de protesta. María Luisa Collazo y Maricarmen Sánchez se acaban de conocer, pero gritan juntas y de la mano las consignas de la convocatoria: “Ayuso, escucha, estamos en la lucha”. “Hay dos principios básicos para que una sociedad sea igualitaria: la educación y sanidad. Y ahora nos los están quitando todo, lentamente. Y se piensan que somos tontos”, explica Collazo.

Las cuatros cabeceras han llegado a Cibeles poco antes de las 13.30. Después de guardar un emotivo minuto de silencio en memoria de los mayores que murieron en las residencias durante la pandemia, la multitud ha estallado al grito de “No son muertes, son asesinados”. Cibeles se ha convertido en una marea de pañuelos blancos que se movían al ritmo de la música de la batucada. “Esto no ha hecho más que empezar. De aquí hasta mayo hay mucho tiempo para seguir la lucha”, han dicho los manifestantes desde el escenario.

Durante los discursos desde el escenario de Cibeles, los organizadores han abordado los problemas con la gestión y los problemas de la sanidad pública madrileña. Desde los “protocolos de la vergüenza” de las residencias o la salud mental, pasando por la precariedad de los médicos y el desmantelamiento de los Servicios de Atención Rural (SAR) o la COVID persistente. Rebeca Justo, que padece esta enfermedad, ha recordado la importancia de invertir en la investigación para ayudar a los “miles de madrileños” que han visto sus vidas cambiadas a causa de las secuelas de la COVID: “Perder la salud es de las peores cosas que pueden pasarte, pero la siguiente peor es que intentar recuperarla dependa de si tienes el dinero suficiente. La Comunidad de Madrid no solo no está haciendo nada, sino que además incumple con nuestros derechos institucionales”.

Por último, los convocantes han leído el manifiesto, titulado 'Madrid se levanta'. El texto que sintetiza las principales reivindicaciones carga contra “el plan de destrucción de la Atención Primaria impuesto desde el Gobierno regional”. “Se está atentando contra los derechos laborales de los trabajadores obligándoles a trabajar en condiciones de maltrato; se está atentando contra la seguridad de la ciudadanía, sin cubrir con médicos los centros de urgencia e intentando suplir la relación terapéutica con videollamadas, no sustituible bajo ningún concepto”, reclama.

Por ello, los organizadores han exigido un aumento de la inversión en Atención Primaria hasta los estándares que reclaman las organizaciones internacionales, el “blindaje de la” sanidad

pública “con la derogación de las leyes que privatizan el servicio, el aumento de las plantillas y el fin de la “caza de brujas“ contra quienes denuncian irregularidades.

“Queremos dejar a nuestros hijos y nietos el más valioso de los legados, que nosotros hemos recibido gracias al esfuerzo de nuestros padres y mayores. Porque HOY, aquí, no solo estamos defendiendo el derecho a la Sanidad Pública, sino también el derecho a una sociedad más justa y democrática”, han concluido para reclamar: “LA DEFENSA DE LA SANIDAD 100% PÚBLICA, UNIVERSAL Y DE CALIDAD”.

Caos en las urgencias de atención primaria

La protesta, que las asociaciones vecinales venían gestando desde el verano, se ha producido dos semanas después del arranque del plan de reestructuración de las urgencias de atención primaria, cuya reapertura tras dos años de pandemia ha sido un caos sin precedentes. Entre falta de personal –no hubo ni un día con médico y enfermera en todos los centros desde el 27 de octubre–, traslados forzados de los profesionales y urgencias que han permanecido cerradas, hubo incluso facultativos que renunciaron a su puesto.

Las reivindicaciones de los manifestantes pasan, así, por el incremento del presupuesto de la atención primaria y el aumento de las plantillas en todas las categorías profesionales, hasta la derogación de las leyes que permiten la privatización sanitaria y la necesidad de garantizar una atención presencial.

La manifestación ha sido organizada por diferentes plataformas de vecinos de los distritos y pueblos de Madrid, que desde hace dos años se concentran en frente de los centros de salud todos los jueves para protestar contra el desgaste de la sanidad pública. “Esta protesta lleva consigo un mensaje importante. No la convocaron los comunistas, ni los bolivarianos, ni alguna otra sigla de partido. Han sido los ciudadanos, que se empiezan a empoderar. Con todas las diferencias que existen entre los barrios de Madrid, nos hemos puesto de acuerdo para trabajar juntos”, ha precisado José Luis Youguero, coordinador de la manifestación.

Apoyo de sindicatos, artistas y políticos

Desde que fue anunciada, la manifestación no ha hecho más que ganar simpatizantes. Actores como Luis Tosar, Alberto San Juan o el cantante Marwán, entre otros, han compartido en las redes sociales su apoyo. En la marcha, Pedro Almodóvar ha agradecido a la multitud de personas que se ha acercado hasta Cibeles. “Estos son los aplausos que les dábamos desde el balcón [a los sanitarios] durante la pandemia”, ha dicho, al tiempo que ha pedido al Gobierno regional que, si es tan constitucionalista, recuerde que la sanidad es un “derecho constitucional”.

También los sindicatos UGT, CC OO, la CGT han anunciado que acudirán a la marcha. Asimismo, los partidos de la oposición como Más Madrid y Unidas Podemos también se han unido a la convocatoria en las últimas semanas. Mónica García, portavoz de Más Madrid en la asamblea regional, ha pedido desde la marcha a la presidenta madrileña que cese a su consejero de Sanidad o se marche ella. “Basta ya, la política se tiene que hacer cargo”, ha reclamado la líder de la oposición en la Comunidad, que ha celebrado una movilización así. “Es maravilloso volver a ver a Madrid levantarse contra quienes quieren desguazar nuestra sanidad”, ha dicho.

También ha acudido a la marcha el secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, que ha pedido una rectificación a Ayuso. Lobato ha subrayado que miles de ciudadanos están defendiendo “el derecho a vivir con tranquilidad y con seguridad, y a tener una gran sanidad pública”. La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea regional, Alejandra Jacinto, ha defendido que esta manifestación es una muestra de que “empieza el cambio” en la Comunidad de Madrid con una “moción de censura ciudadana” a las políticas sanitarias de la presidenta.

A la marcha han acudido asimismo dirigentes de la política nacional, como la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que ha expresado después en redes sociales su “orgullo” por participar en una protesta en defensa de “lo público”. “Basta ya de regalar dinero a los ricos y de quitárselo a la sanidad pública, de quitárselo a la gente y a los profesionales que salvan la vida de las personas”, ha dicho. Junto a ella ha acudido a la manifestación el exvicepresidente de Gobierno Pablo Iglesias.

La primera reacción por parte del Gobierno del PP ha llegado por parte del consejero de Transportes, David Pérez, que ha agitado el argumentario de su partido y su presidenta con críticas hacia el “boicot” que supuestamente ha hecho la izquierda contra la sanidad pública. “La permanente intromisión de la izquierda no ayuda a la mejorar la sociedad”, ha dicho. Posteriormente, el portavoz del PP en la Cámara regional, Pedro Muñoz Abrines, ha calificado la movilización de “fracaso”, porque, ha argumentado, un “un 99% de los madrileños no la han apoyado”, a pesar de que los cálculos más conservadores confirman que la marcha ha reunido a mucho más del 1% de la población madrileña este domingo.

Además de criticar la gestión de la Consejería de Sanidad y el modelo de colaboración público-privada, los convocantes hacen hincapié en la “caótica desorganización de las urgencias de atención primaria”. “Se está atentando contra los derechos laborales de los trabajadores, obligándoles a trabajar en condiciones de maltrato, y contra la seguridad de la ciudadanía”, alertan. “Queremos dejar a nuestros hijos y nietos el más valioso de los legados. Porque hoy, aquí, no solo estamos defendiendo el derecho a la sanidad pública, sino también el derecho a una sociedad más justa y democrática”.

https://www.eldiario.es/madrid/lucha-sanidad-publica-toma-calles-madrid-frente-maltrato-ayuso_1_9705685.html

MADRID DESPIERTA A FAVOR DE LA SANIDAD PÚBLICA CON CIENTOS DE MILES DE VOCES: “SIENTO INDIGNACIÓN, NOS LO ESTÁN QUITANDO TODO”

La primera gran protesta contra Isabel Díaz-Ayuso como presidenta de la Comunidad saca a una multitud de madrileños desde distintos puntos de la capital para unirse a una espectacular marcha que confluye en Cibeles

Pocos asuntos en España unen a decenas de miles de personas para salir a la calle. Una de estas excepciones es la defensa de la sanidad pública. Al menos, cuando la sociedad percibe multitud de señales de que está siendo atacada. Madrid se ha teñido de blanco este domingo contra la gestión del Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso y en favor de un servicio “público, universal y de calidad”. ¿Cuántos? La Delegación del Gobierno cifra en 200.000 a los asistentes, las asociaciones vecinales convocantes han asegurado en el cierre de la protesta que han reunido a 670.000 personas. Las manos se han alzado en todo el recorrido con pañuelos y kleenex blancos. Ha regresado una marea blanca, que ya inundó Madrid hace una década contra las privatizaciones de los hospitales que impulsó el Gobierno de Ignacio González. Hacía años que no se celebraba una manifestación de este calibre. Esta vez, el destino de los gritos era Isabel Díaz-Ayuso, en la primera gran protesta que afronta bajo su mandato. Desde la Casa de Correos, sede de la presidencia de la Comunidad, no había salido ningún comentario al respecto varias horas después de celebrado el evento. A las cinco de la tarde, ni un mínimo tuit.

Las razones para acudir se mezclaban en la marcha masiva que ha confluído en la plaza de Cibeles, después de salir de cuatro puntos distintos de la capital: Nuevos Ministerios, Ópera, Atocha y el hospital de La Princesa. Y no todos los que han salido a la calle eran sanitarios. Escuchando el manifiesto al final del recorrido se encontraba Louis M., consultor de 24 años, vestido con la camiseta verde en contra de los recortes en Educación, la otra gran competencia regional: “Somos la comunidad más rica y una de las que menos invierte en sanidad. Los jóvenes venimos aquí porque estamos comprometidos y creemos en la defensa de nuestros derechos”. Cuando se enteró de la convocatoria, avisó por un grupo de Whatsapp a sus amigos y se unieron a él Gonzalo, Ismael y Diego, todos veinteañeros. “Desde que tengo seis meses, la sanidad me ha salvado la vida varias veces: por el asma, ataques de alergia, apendicitis, infecciones...”, comentaba este último. Al pasar por delante del Ministerio de Sanidad, el profesor Juan Garrido ha levantado su cartel naranja casero por una “sanidad universal”. “No me manifiesto todos los días, pero obviamente esto es algo que me mueve. No tengo problemas de salud, pero a mi madre la acaban de operar y necesitamos un servicio de calidad”, explica.

El plan de reapertura de las urgencias extrahospitalarias en Madrid, único servicio de este tipo en toda España que permanecía cerrado dos años después de la pandemia, ha sido el último ladrillo en una torre de agresiones que los sanitarios llevan percibiendo años. Todo sumado al desgaste que supuso la crisis sanitaria de la covid. El Gobierno regional anunció la reapertura de estos centros y una semana después los sanitarios comenzaron a recibir emails de madrugada anunciándoles sus nuevos horarios, su nuevo destino —en ocasiones a kilómetros de distancia— de la noche a la mañana. Ayuso ha modificado este plan tres veces en tres semanas y el último proyecto incluye que los puntos de atención sanitaria abran solo con enfermeras y que los médicos atiendan por videoconsultas.

El caldo de cultivo para esta protesta multitudinaria se adereza con más ingredientes. Una de las asistentes, Cristina Ávila, auxiliar administrativa de 34 años, expone algunos: “Estoy aquí porque mi padre ha estado un año en lista de espera para que lo operen, porque hay colapso en urgencias y porque mi hermano es sanitario. Es la sanidad de todos”. Poco antes, sonaba por un altavoz en Canto a la Libertad, de José Antonio Labordeta, que muchos han cantado al unísono, mientras algunos grupitos buscaban la letra en el móvil porque no la recordaban de memoria. Tarea complicada, la masiva afluencia ha provocado que durante casi dos horas la cobertura de los teléfonos funcionara a trompicones.

Había muchos más signos de que la protesta de este domingo iba a ser potente, una hora antes del inicio de la marcha, los autobuses de la capital y el metro estaban prácticamente colapsados. En la estación de Nuevos Ministerios, uno de los puntos de partida, la gente ya iba coreando “sanidad pública” por las escaleras mecánicas de salida. Algo parecido ha pasado en Atocha, donde la columna ha comenzado a formarse antes de salir a la calle. Entre los gritos de la multitud, el más repetido ha sido “¡sanidad pública!”, pero también se ha escuchado: “¡A la hora de votar, se tiene que notar!” y “¡Menos banderas, más enfermeras!”.

A la convocatoria han acudido todos los partidos de la oposición y los principales sindicatos. No ha faltado casi ningún representante político, allí estaban los líderes regionales de Más Madrid, Mónica García; el del PSOE, Juan Lobato, y la de Podemos, Alejandra Jacinto. También estaban ministras como Ione Belarra, Yolanda Díaz e Irene Montero. Además, se ha visto a representantes del mundo del arte y la cultura como Pedro Almodóvar, Ana Belén, Ismael Serrano o Daniel Guzmán.

Ha sido un día de primeras manifestaciones para muchos. Como Diego, de siete años, que ha ido con sus padres María González y Sergio Garrido. “Es complicado explicar algo así a un niño tan pequeño. Pero, bueno, la conciencia se va forjando”, resume la madre. Por su parte, la familia Barrio ha venido al completo desde el barrio de Moratalaz. “Queremos enseñarle los valores de lo público”, comenta el padre al señalar a su hijo. “Nosotros nos manifestamos cuando consideramos que hay cosas muy importantes. Salimos a la calle por Miguel Ángel Blanco, por la anterior marea blanca, por el 8-M. Siento indignación, he tirado mucho de sanidad pública por historias personales y ver gente que se tira horas en su trabajo y que hay un desaliento brutal...”.

Entre la multitud, también hay gotas que formaron parte de la anterior marea blanca. Se las distingue porque llevan la misma camiseta que lucieron en las calles hace una década. “La he desempolvado hoy. Hace 10 años, creímos que habíamos conseguido mucho, pero nos hemos dado cuenta de que no, de que han seguido privatizando por lo bajini hasta que ya se han quitado el freno”, explica Paloma, médica del hospital Gregorio Marañón, que prefiere no meterse en el tumulto porque ha venido con su galgo. También ha acudido Ángeles Herrera, que trabajó más de 30 años como auxiliar de enfermería y ahora está jubilada: “Antes lo vivía desde dentro y ahora, como usuaria, siento indignación. Nos lo están quitando todo”.

Al acabar la protesta, los miles de asistentes se reparten por las calles adyacentes. Algunos se van a casa, a otros tantos se les oye proponer ir a comer por ahí o tomar un aperitivo aprovechando el buen tiempo. En la calle Hortaleza, en una terraza, una mujer pregunta en voz alta a los amigos con los que ha ido a la manifestación: “¿Qué ha dicho Ayuso? ¿Que somos bolcheviques?”. Cuando el camarero llega con el datáfono los felicita: “Hoy lo habéis hecho muy bien, porque venís de luchar por nuestros derechos”. “Pero hay que luchar hoy y mañana”, le replica la comensal. Porque defender la sanidad y tomar cañas no tiene por qué estar reñido.

<https://elpais.com/espana/madrid/2022-11-13/madrid-desperto-a-favor-de-la-sanidad-publica-con-cientos-de-miles-de-voces-siento-indignacion-nos-estan-quitando-todo.html>

AYUSO DESAFÍA LA LEY EDUCATIVA Y CONVOCA DOS CONCURSOS PARA CONSTRUIR COLEGIOS CONCERTADOS EN SUELO PÚBLICO GRATUITO

La Comunidad de Madrid retoma su política de ceder parcelas para levantar centros educativos privados, una práctica contra la que trató de ir la Lomloe sin llegar a prohibirla del todo y luego el Ejecutivo regional blindó en su ley autonómica

La Comunidad de Madrid va a construir dos colegios que vendrán con un concierto debajo del brazo desde antes de existir y se levantarán sobre suelo público por el que los beneficiarios no tendrán que pagar nada. Esta medida –habitual en los Gobiernos regionales del PP en este siglo pero que se había paralizado en los últimos años– va directa contra las previsiones de la Lomloe y las intenciones del Gobierno, que trató de evitar estos episodios en la nueva ley, aunque no los llegó a prohibir directamente.

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) ha publicado este jueves la convocatoria de dos concursos públicos para construir sendos “centros educativos privados concertados” – aunque no exista tal cosa como los colegios concertados: se conciertan aulas, no centros– sobre suelo público que se cederá de manera gratuita a los beneficiarios. El trato, simplificando, es que la Comunidad de Madrid pone el suelo –valorado en 11,5 millones de euros entre las dos parcelas y por el que no cobrará nada– y el concierto, con lo que financia el coste de mantenimiento del centro una vez activo. El ganador del concurso solo tiene que pagar la construcción de las instalaciones.

La cesión de las parcelas públicas está prevista inicialmente para 40 años, prorrogables a 75. Uno de los centros se ubicará en Villa de Vallecas y el otro, en Valdebebas. Este último será el primer instituto que ofrezca Secundaria en todo el barrio, donde no hay posibilidad de estudiar la ESO en uno público, según datos de la Comunidad de Madrid.

La administración autonómica y el Ayuntamiento han conseguido esquivar la Lomloe para convocar estos concursos. Ambas parcelas pertenecían hasta hace unos meses al Ayuntamiento, pero las corporaciones municipales no pueden ceder suelo público para construir centros educativos privados, tienen que ser públicos, según estipula la Lomloe en la disposición adicional decimoquinta. Las comunidades autónomas, sin embargo, sí pueden.

¿Solución? En mayo se firmaron sendos acuerdos de cesión por los que el Ayuntamiento de Madrid regalaba las dos parcelas a la Comunidad para que construya dos colegios. Se explica en los acuerdos que esto se hace porque es el Gobierno regional el que tiene las competencias en Educación, pero el Ayuntamiento ya había cedido parcelas en otras ocasiones para colegios cuando no estaba prohibido. Por ejemplo, en el colegio JH Newman, donde además se ha permitido la construcción de un gimnasio privado en un suelo público también cedido gratuitamente.

Esta práctica de ceder parcelas públicas de manera gratuita –o a cambio de un canon simbólico– para la construcción de colegios ya concertados antes de levantarse ha sido muy propia de la Comunidad de Madrid en este siglo, durante buena parte de él contra los postulados de las leyes de educación. Hasta julio de 2020 había levantado por este método al menos 45 centros, según su propia información. Este fue el método que utilizó Francisco Granados, exconsejero de Presidencia de Esperanza Aguirre, para lucrarse con una veintena de centros cobrando mordidas. Acabó en la cárcel por ello.

Si está prohibido, se regula

Como este proceder iba contra las leyes educativas –que establecen que los conciertos se otorgan a centros privados ya existentes que cumplen determinados requisitos–, el PP las regularizó explícitamente en su Lomce en 2013 incluyendo un octavo punto de nuevo cuño en el artículo 116, que regulaba los conciertos: “Las Administraciones educativas podrán convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público

dotacional”, una previsión muy concreta para algo que básicamente solo hacía Madrid y algo la Comunitat Valenciana.

La Lomloe –que incluye varias medidas pensadas directamente para controlar la escuela concertada a raíz de las políticas madrileñas, según admitieron responsables socialistas– vino a reparar esto. Eliminó la disposición, introdujo varias en las que daba preferencia a lo público a la hora de asegurar la oferta de plazas educativas e introdujo la palabra “pública” en la disposición adicional decimoquinta, artículo cuatro, que explicita que “los municipios cooperarán con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes”. Desde diciembre de 2020 estos suelos solo pueden destinarse a la construcción de centros públicos. Pero se quedó a medio camino: esta disposición adicional es para municipios, no cubre a las comunidades autónomas. Fuentes del Ministerio de Educación explican en cualquier caso que “la ley pretende limitar la cesión del suelo a centros públicos”.

Además, como no hay acción sin reacción, la aprobación de la Lomloe provocó un efecto casi inmediato en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Poco más de un año después de que se publicara la nueva ley estatal en el BOE y tras más de dos décadas sin una ley educativa propia, Ayuso aprobaba su Ley Maestra, dirigida contra la Lomloe desde su propio título: Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa. En su norma, destinada a blindar la concertada, se incluyó específicamente esta práctica: “Se contempla la posibilidad de que en la Comunidad de Madrid se puedan convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional”.

Nueve meses después se ha “contemplado la posibilidad” y ejecutado. El primero de los centros está previsto en el barrio de Valdebebas, de reciente creación y que apenas tiene servicios públicos. Se levantará sobre una parcela de 13.456 metros cuadrados entre las calles de Leandro Silva, Félix Candela, Antonio Miró Valverde y César Cort y será, como mínimo, línea seis (seis clases por curso), desde infantil hasta la ESO. La parcela está valorada en 10,3 millones de euros, según el acuerdo de cesión entre Comunidad y Ayuntamiento.

El segundo será construido en el distrito de Villa de Vallecas, sobre una parcela de 13.045 metros cuadrados sita entre la Gran Vía del Sureste y las calles Cerro Murmullo y Cerro Millano, y está previsto que sea línea cuatro. Este suelo tiene un valor estimado de millón y medio de euros, según figura en el documento de cesión.

https://www.eldiario.es/sociedad/ayuso-desafia-ley-educativa-convoca-concursos-construir-colegios-concertados-suelo-publico-gratuito_1_9699986.html

LOS SINDICATOS RECHAZAN EL QUINTO PLAN DE AYUSO PARA LAS URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y MANTIENEN LA HUELGA INDEFINIDA

El proyecto que ha presentado el consejero de Sanidad solo contempla aumentar el número de centros dotado con médico presencial de 44 a 49

Cinco planes en cinco meses, una convocatoria de huelga y la movilización de una ciudadanía hastiada de encontrarse cada vez con más obstáculos para acceder a la asistencia sanitaria pública. Es el balance que deja, de momento, el intento de reapertura de los antiguos Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) en la Comunidad de Madrid y que este viernes ha vivido un nuevo capítulo en forma de reunión de mesa sectorial. Un encuentro que el consejero, Enrique Ruiz Escudero, ha calificado como “constructivo”, pero en el que el sindicato mayoritario entre los médicos madrileños, AMYTS, ha pedido formalmente su dimisión “para que conste en acta”, recalca su secretaria general, Ángela Hernández.

Estas dos visiones dispares definen a la perfección el punto en el que se encuentran las relaciones laborales en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), con cada vez menos puntos de encuentro. En la convocatoria de hoy, a la que ha asistido personalmente el consejero -no es lo habitual-, la Consejería de Sanidad ha trasladado un nuevo modelo de reapertura de las urgencias extrahospitalarias, a medio camino entre los planes que tenía inicialmente -antes de que Ayuso los rectificara públicamente- y el "modelo transitorio" que se está aplicando ya y que contempla la apertura de centros sin equipo médico y apoyo facultativo en remoto, a través de la teleconsulta. <https://cadenaser.com/cmadrid/2022/11/11/los-sindicatos-de-la-sanidad-rechazan-el-quinto-plan-de-ayuso-para-las-urgencias-de-atencion-primaria-radio-madrid/>

El plan recoge la reapertura de 49 centros con equipo sanitario completo -médico, enfermera y celador- y una treintena más sin atención presencial de un facultativo. La Comunidad de Madrid aumentaría así en cinco los consultorios que tendrían asistencia médica 'in situ' y asume que no puede reabrir todos los centros para atender urgencias propiamente dichas, ya que una parte de los centros sin facultativo se reservarían para proporcionar cuidados de enfermería durante los fines de semana, como contemplaba el plan que elaboró en junio el entonces director general de Asistencia Sanitaria, ya dimitido, Jesús Vázquez.

"No es un nuevo plan", ha negado el propio Ruiz Escudero. Insiste el consejero en que la hoja de ruta sigue pasando por reabrir los 80 centros con equipos completos, así que prefiere hablar de "ajustes asistenciales", como consecuencia del "análisis permanente del comportamiento del modelo". Esas explicaciones no convencen a las organizaciones sindicales, que creen que quiere "incumplir los compromisos adquiridos", apunta Mariano Martín-Maestro desde Comisiones Obreras. Se refiere al acuerdo de la mesa sectorial al que llegaron con la Consejería y, según el cual, ningún centro abriría sin la dotación íntegra de personal", pero que el Gobierno regional ha vadeado con el recurso de la teleconsulta.

Un sistema que no convence tampoco al sindicato de enfermería SATSE, que pide "unos protocolos de actuación que avalen la actividad de esas enfermeras -las que atienden urgencias sin la presencia física de un médico-", señala Juan Antonio Hervás, su portavoz en Madrid. Este colectivo pide sobre todo seguridad jurídica para esas profesionales, garantías que para Hervás no contiene el esquema planteado hoy por la Consejería de Sanidad. "No podemos permitir que se abran esos centros así", zanja.

Las organizaciones sindicales, que aún no tienen en su poder los detalles de esta última propuesta, pueden presentar ahora alegaciones, aunque las posturas siguen muy alejadas. La distancia es enorme sobre todo con el colectivo de médicos, ahora en huelga en los servicios de urgencia extrahospitalarios, y que a partir del 21 de noviembre van a extender a toda la Atención Primaria. "Nos ha parecido una chapuza", resume desde AMYTS Ángela Hernández, que cree que una propuesta como esta podría haber tenido sentido hace muchos meses. "A estas alturas -añade- nos parece una afrenta a los profesionales".

<https://cadenaser.com/cmadrid/2022/11/11/los-sindicatos-de-la-sanidad-rechazan-el-quinto-plan-de-ayuso-para-las-urgencias-de-atencion-primaria-radio-madrid/>

MADRID CIFRA EN MÁS DE 1.000 MILLONES LA DEUDA QUE ARRASTRA CON LOS HOSPITALES PRIVADOS

La Intervención de la Comunidad reconoce ya oficialmente que las "liquidaciones pendientes" con los cuatro de Quirónsalud, más el de Ribera Salud y el del Ministerio de Defensa, ascendían al cierre de 2021 a 1.050810.463 euros

En un momento de crisis aguda por la sobrecarga sanitaria, las obligaciones de pagos atrasados superan en más de 300 millones lo que las cuentas para 2023 destinan a los cinco centros hospitalarios de titularidad privada

La deuda que arrastra la Comunidad de Madrid con los hospitales de gestión privada y concertados ha superado definitivamente la frontera de los 1.000 millones de euros. El informe oficial que detalla el cierre de cuentas de 2021 del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) desvela

por primera vez la cuantía asignada a “estimaciones liquidaciones pendientes conciertos”: 1.056.810.463 euros.

En un momento álgido de la crisis desatada por el colapso de la sanidad pública, la envergadura de esos 1.000 millones es tal que superan de largo –en más de 300 millones– lo que el proyecto de Presupuestos madrileños para 2023 asigna a los cinco hospitales de gestión privada. De ellos, tres del gigante Quirónsalud tienen, al igual que el de Ribera Salud en Torrejón, una concesión administrativa. El cuarto, también de Quirónsalud y conocido como el Jiménez Díaz, funciona en régimen de concierto. El sexto hospital que ajeno a la estructura del Sermas atiende a una parte de la población es el Gómez Ulla, del Ministerio de Defensa.

La Comunidad provisiona esos 1.000 millones: es decir, garantiza que dispone de ellos para un fin determinado, en este caso su pago por atrasos. Eso significa que los contratos con los hospitales de gestión privada resultan en realidad más caros para el erario madrileño de lo que señalan los presupuestos.

Los 1.056.810.463 euros que se corresponden con liquidaciones pendientes sí aparecen ahora en el apartado sobre información “complementaria” en materia de provisiones. En 2020, no.

El informe de la Cámara de Cuentas sobre los números del ejercicio 2020 –el del estallido y el desastre de la pandemia– cuantificó en 1.177 millones las provisiones derivadas “de liquidaciones pendientes de ejercicios anteriores de los convenios y conciertos con los hospitales gestionados de forma indirecta”. Sin embargo, y como publicó el diario El País, Quirónsalud elevaba la deuda ya acumulada en esa fecha –2020– con su grupo nada menos que en 1.248,7 millones.

Un desfase millonario en los números

De esa discrepancia surge una pregunta para la que nadie ha ofrecido respuesta: ¿cómo es posible que haya un desfase de casi 72 millones de euros entre los cálculos de la Administración madrileña y el de un grupo privado cuyos servicios adicionales a la sanidad pública y por tanto no previstos con antelación deben quedar acreditados al milímetro?

Lo único que deja claro el hecho de que la deuda por liquidaciones pendientes haya pasado de 1.177 millones a 1.056 es que todo indica que la Comunidad ha pagado ya a los hospitales privados 121 millones del conjunto de la deuda. ¿Por qué servicios, a cuáles de los centros sanitarios? De momento, esos datos no han salido a la luz.

Este jueves, infoLibre preguntó a los portavoces de la Consejería madrileña de Sanidad por qué en la liquidación de las cuentas del Sermas en el ejercicio 2021 sí figura la cifra pendiente de pago y no en cambio en las de 2020. No hubo respuesta. Puedes ver el documento de 2021 pinchando aquí y el de 2020, aquí.

Si, como es previsible, los Presupuestos se aprueban en los términos plasmados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, los cinco centros hospitalarios de gestión privada recibirán el próximo ejercicio 715,2 millones. Los recibirán como anualidad por los contratos que les unen a largo plazo con la Comunidad: hasta 30 años desde su ya añeja firma. Esos contratos son los que ya en 2011 comenzó a poner en marcha Esperanza Aguirre y que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso enarbola como una de las señas de identidad de su política sanitaria: la “colaboración público-privada”.

Penúltima en cuanto a gasto sanitario por habitante –1.491 euros frente a los 1.638 de media en 2020– y primera en haber eliminado el impuesto de patrimonio que afectaba a los 19.000 madrileños más ricos y se traducía en una recaudación de 900 millones, Madrid ha llegado a amenazar al Gobierno central con acudir al Tribunal Constitucional si se aprueba la ley que limita la privatización de la sanidad pública. En septiembre, la exministra de Sanidad del PP Ana Pastor afirmó en el Congreso que la futura ley no es “transparente”. Y que “intenta censurar la colaboración privada”.

Como buque insignia de la flota de hospitales privados nutridos con dinero público se sitúa el Jiménez Díaz, que tiene asignada una población de 447.588 habitantes. Pero –se lee en un

documento oficial– “en determinadas especialidades de alta complejidad, es referente para más de 800.000 habitantes”. La población de Madrid ronda los 6,6 millones de residentes.

El proyecto presupuestario para 2023 asigna al Jiménez Díaz 383.808.345 euros. Le sigue el hospital Rey Juan Carlos (Móstoles), con 114.647.516. En tercer lugar queda el de Torrejón (85.808.345 euros. En cuarto, el Hospital General de Villalba. Y clausura la relación el de Infanta Elena (Valdemoro), con 63.073.898. Salvo el de Torrejón, los demás pertenecen a Quirónsalud, ahora bajo control del gigante sanitario alemán Fresenius.

Cuando a comienzos de la pasada década arrancó su actividad concertada en Madrid se llamaba Capio, que finalmente se fusionó con Quirón.

https://www.infolibre.es/politica/deuda-madrid-hospitales-privados-aumenta-1-000-millones-coste-sanidad-publica_1_1359572.html

AYUSO DICE QUE LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO FAVORECE EL COMUNISMO Y QUE LA IZQUIERDA VA “CONTRA LA EVIDENCIA CIENTÍFICA”

La presidenta de Madrid defiende que el fenómeno es cíclico “desde que la Tierra existe” y acusa a la izquierda de imponer una agenda de reformas para paliarlo “contra la evidencia científica”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este jueves que “desde que la Tierra existe” ha habido cambio climático, y que la izquierda no puede “seguir contra la evidencia científica porque tienen en su cabeza el comunismo” para impulsar una agenda de reformas que, “en algunas ocasiones es una gran estafa” y “empobrece cada vez más a más ciudadanos”. Sus palabras, pronunciadas en la Asamblea de Madrid en respuesta a una pregunta de la portavoz de Podemos, Alejandra Jacinto, refuerzan la estrategia polarizadora con la que la líder conservadora quiere afrontar las elecciones de 2023. A finales de octubre, Ayuso dedicó la primera de las cinco convenciones regionales con las que lanzará su candidatura precisamente al medio ambiente: “La izquierda, junto a diferentes grupos económicos y de poder, está describiendo los peores escenarios para infundir terror”, dijo. Un planteamiento que ha ampliado este jueves en el Parlamento regional, provocando el estupor de los portavoces de la oposición.

“Yo creo que aquí hay algo diferente, una agenda que se está propagando por muchos lugares del mundo, no solo por España, que a mi juicio, en algunas ocasiones, se convierte también en una gran estafa”, ha opinado Ayuso. “Responde a lobbys, responde a empresas y responde a imposiciones de nuevos mercados para que empresas emergentes a las que ustedes les hacen siempre el caldo se hagan fuertes a manos de empobrecer cada vez más a más ciudadanos (...)”, ha seguido. “Hay una ola internacional que impone unos usos y costumbres que favorecen pobreza a manos llenas. Esto tiene una agenda que va directamente contra el consumo”, ha añadido. Y ha concluido: “Desde que la tierra existe, desde el origen, ha habido siempre cambio climático, ciclos. Nosotros tendremos que poner medidas para paliarlo, pero no pueden seguir contra la evidencia científica única y exclusivamente porque siempre tienen detrás en su cabeza el comunismo”.

Desde que llegó al poder, en 2019, Ayuso ha dicho que “el ecologismo es una ideología totalitaria dirigida contra el campo”. Que “nadie ha muerto” por contaminación, uno de los grandes aceleradores del calentamiento global. E incluso quiso borrar de los currículos de ESO y Bachillerato, cuyo contenido decide mayoritariamente el Estado, el término “emergencia climática” por considerarlo ideológico. Sin embargo, sus afirmaciones de este jueves causan sorpresa a lo largo y ancho del Parlamento regional. Aunque por diferentes razones.

Al Gobierno de la nación le asombra la referencia a la evidencia científica: “El cambio climático también se combate en las urnas”, proclama la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera. A la izquierda del Parlamento le sorprende que Ayuso vincule el fenómeno con el comunismo: “Se comporta como una hija de Bolsonaro que preside una comunidad de Facebook”, ha concluido Juan Lobato, del PSOE. Y a la extrema derecha, la comparación entre lo que dice la presidenta y lo que hace.

“Suscribo todo lo que ha dicho... entonces, ¿por qué en octubre de 2019 declaró usted aquí, con su voto a favor, la emergencia climática en la Comunidad de Madrid?”, ha exclamado, cargada de retranca, Rocío Monasterio, la líder Vox en la Asamblea, que es la única socia posible de Ayuso para aprobar los Presupuestos de 2023. “Y dígame a su partner, el señor Almeida, que levante las restricciones de Madrid Central, que están basadas precisamente en la emergencia climática de la izquierda”.

El reto refleja una dinámica que irá exacerbándose según se acerque la cita con las urnas: en su lucha por seducir a los mismos votantes que Vox, el PP de Ayuso radicaliza algunas de sus posiciones. Por ejemplo, en lo que respecta al cambio climático.

<https://elpais.com/espana/madrid/2022-11-10/ayuso-dice-que-la-lucha-contr-la-emergencia-climatica-favorece-la-pobreza-y-el-comunismo-y-que-la-izquierda-va-contr-la-evidencia-cientifica.html>



AYUSO DICE QUE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA VA CONTRA LA EVIDENCIA CIENTÍFICA Y TIENE DETRÁS AL “COMUNISMO”

Ha dicho que de la Comunidad “no depende si hay cambio climático y olas de calor” y ha criticado que la lucha frente a la emergencia climática se convierte “en una gran estafa” que “responde a lobbys e imposiciones de nuevos mercados”

El cambio climático son “ciclos” que siempre ha habido desde que la Tierra existe y por tanto “no se puede ir contra la evidencia científica” por tener siempre “en la cabeza” el “comunismo”. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha usado esta argumentación en la Asamblea en respuesta a Alejandra Jacinto, portavoz de Unidas Podemos, cuando le ha pedido valorar su gestión para combatir la emergencia climática.

Ayuso ha comenzado defendiendo las medidas que su ejecutivo puede llevar a cabo como “favorecer la calidad del aire”, acabar “con los incendios forestales” o “seguir reduciendo las emisiones de CO₂”. Pero a continuación ha insistido en que de la Comunidad de Madrid “no depende si hay olas de calor y si hay cambio climático” y ha reprochado a la oposición que confundan cambio climático con “emergencia climática”. “Lo que hay aquí es algo diferente: más bien una agenda que se propaga por muchos lugares del mundo que, a mi juicio, en algunas ocasiones se convierte en una gran estafa porque responde a lobbys, a empresas e imposiciones de nuevos mercados para que empresas emergentes a las que ustedes les hacen siempre el caldo se hagan fuertes a manos de empobrecer cada vez más a más ciudadanos”, ha asegurado a Alejandra Jacinto. Ha puesto como ejemplo que no todos quienes tienen vehículos de reparto pueden cambiarlos ni todos los ciudadanos pueden poner placas de autoconsumo en sus casas.

Es entonces cuando, tras insistir en que esa “ola” impone unos usos y costumbres que “están favoreciendo pobreza”, ha afirmado que “desde que la Tierra existe ha habido siempre cambio climático”: “Siempre ha habido ciclos. Tendremos que poner medidas para paliarlo, pero no pueden seguir contra la evidencia científica única y exclusivamente porque siempre tienen ustedes detrás en su cabeza que se llama comunismo [sic]”.

Las variaciones en el clima existen desde el inicio de la Tierra, pero lo que dice la evidencia científica es que el incremento acelerado de la capa de gases de efecto invernadero que recalienta el planeta es el resultado de las emisiones de CO₂ (también metano u óxido nitroso) que han provocado las actividades humanas.

Entre estas actividades humanas está, por ejemplo, quemar carbón para obtener energía o usar petróleo para los combustibles que utilizan los automóviles, los aviones y los barcos. Estas emisiones comenzaron, básicamente, a partir de la revolución industrial del siglo XIX y no han hecho otra cosa que aumentar. Si en 1950 las emisiones conjuntas mundiales eran unos 6.000 millones de toneladas de CO₂, al acabar el siglo XX fueron de 25.000 millones. El pico se marcó justo el año pasado: en 2021 se superaron los 39.000 millones de toneladas de CO₂.

Un millar de expertos científicos de 40 países han publicado una carta en la que afirman que es “indefendible” considerar que aún es posible limitar a 1,5°C la subida de las temperaturas en el planeta para prevenir los daños más severos, aunque la ONU mantiene que cada fracción de grado que se contenga salva vidas. Este objetivo de 1,5°C está incluido en el Acuerdo de París a modo de mal menor. De hecho, el Panel de Expertos de la ONU recibió el mandato de elaborar un informe específico sobre las diferencias entre los impactos que causaría una Tierra 2°C globalmente más cálida y otra cuyo recalentamiento se contuviera en 1,5°C. El trabajo aparecido en 2018 describía una cascada de daños extra si el calor subía más allá de ese umbral.

https://www.eldiario.es/rastreador/ayuso-dice-emergencia-climatica-evidencia-cientifica-detras-comunismo_132_9698108.html

AYUSO REDUCE EL CAOS DE LA SANIDAD MADRILEÑA Y LAS PROTESTAS DE LOS PROFESIONALES A QUE “FALTAN 34 MÉDICOS”

La presidenta regional dice en la Asamblea de Madrid que las huelgas de los facultativos no están justificadas y compara la manifestación convocada para el domingo con las movilizaciones contra la invasión de Irak

No se han cumplido las 10.30 horas del jueves, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya le ha dado tiempo de decir que los ministros del Gobierno repiten “como papagayos” críticas contra ella y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; a lanzar una puya a Vox por la salida de la exdiputada Macarena Olona —“les va tocando no solo tener otro Vox, como ya les está sucediendo, sino de vez en cuando escuchar el disenso”, dice—; y a insinuar que las críticas de la oposición hacia su gestión están cargadas de machismo. Todo vale para desviar la atención sobre el gran problema que le recuerdan una y otra vez sus rivales en la Asamblea regional: el caos en la reapertura de las urgencias extrahospitalarias y la falta de recursos en la atención primaria, que han provocado dos huelgas de los facultativos y una manifestación en defensa de la sanidad pública convocada para este domingo. Pero son tantas las denuncias de la oposición, tantas sus críticas, que al final Ayuso tiene que entrar al trapo, lo que provoca que los escaños se llenen de aspavientos de sorpresa, rechazo y protesta.

“¿34 médicos dan para una huelga, un boicot y manifestaciones?”, ha dicho la presidenta regional, como si el problema de la sanidad madrileña estuviera únicamente en su decisión de dejar sin médico presencial 34 puntos de urgencias extrahospitalarias en los que los pacientes tendrán que comunicarse telemáticamente con el facultativo. “¿Ya estamos con el no a la guerra?”, ha preguntado, en una comparación de las movilizaciones de 2003 contra la invasión de Irak con la manifestación convocada para este domingo en defensa de la sanidad pública. “¿Ya estamos con lo mismo de siempre?”, añadía, insistiendo en soslayar el fondo de las denuncias de los profesionales sanitarios para convertir un problema laboral en uno político. Sus palabras han despertado la indignación de los portavoces de la oposición de la izquierda.

“Todos los madrileños somos conscientes de que su gestión es chapucera”, le ha dicho Mónica García, la líder de Más Madrid, antes de comparar lo dicho por la presidenta con lo hecho por su Gobierno. “Ha dicho: ‘Vamos a presentar una reforma severa y profunda de la sanidad para maravillar al mundo’. Lo que ha hecho: ha dejado la sanidad patas arriba”, recuerda. “Lo que dice: ‘Faltan médicos en España’. Lo que hace: poner de patitas en la calle a 6.000 sanitarios en marzo”, sigue. “Lo que dice: ‘Estamos poniendo todos los medios a nuestro alcance’. Lo que hace: sustituir a los médicos por tablets. ¡Esto es una chapuza! Y ante semejante despropósito solo le queda insultar”.

Juan Lobato, líder del PSOE, ha transitado por el mismo camino. “¿Mantiene usted que su decisión de despedir 6.000 sanitarios ha sido una buena decisión para los madrileños?”, le ha preguntado a la presidenta, sin obtener respuesta. “Eso lo hizo a la vez que reparte becas para ricos y regalos fiscales al 2% de esta Comunidad”, se ha quejado. Y ha reclamado: “Merecemos que nos atiendan médicos de carne y hueso, y no pantallas de plasma. A usted no le interesan los problemas de los madrileños, está en acabar con el señor Feijóo”.

“Esperemos que gestione la crisis sanitaria mejor que la climática”, ha ironizado la portavoz de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto.

Pero Ayuso esquivo la mayor parte de la polémica y deja el grueso a su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. El que fuera número dos de la última lista electoral del PP en la región se defiende mientras su equipo le observa gesticulando en los aledaños del hemicycle, tenso como está el ambiente, y en peligro como está su futuro en la primera línea de la política regional.

Javier Padilla, de Más Madrid, ha llegado a ofrecerle al consejero una carta de dimisión que está a falta de firma. “Pida disculpas y dimita si le queda decencia”, le ha espetado Vanesa Lillo, de Podemos. “Su actitud es reprobable”, coincidía Matilde Díaz Ojeda, del PSOE. Pero Escudero aguanta. Como Ayuso, sigue adelante bajo el chaparrón de las críticas. Como si no pasara nada.

<https://elpais.com/espana/madrid/2022-11-10/ayuso-reduce-el-caos-de-la-sanidad-madrilena-y-las-protestas-de-los-profesionales-a-que-faltan-34-medicos.html>

COMUNICADO CONJUNTO CONTRA AYUSO: TODAS LAS ASOCIACIONES MÉDICAS DESMIENTEN QUE LA HUELGA SEA POLÍTICA

Los profesionales piden a la Comunidad retractarse de sus acusaciones de boicot: "Crean clima de animadversión"

El conjunto de las organizaciones médicas ha emitido una declaración para exponer la situación actual derivada del caos extrahospitalario debido a la gestión de Isabel Díaz Ayuso. Todas ellas han pedido a la Comunidad de Madrid retractarse de las palabras con las que acusa de boicot a los sanitarios y asegura que la huelga es política.

En una rueda de prensa concedida desde el Colegio de Médicos de la capital, todas las asociaciones de sanitarios han explicado que la situación actual no se debe a un “boicot” como asegura la presidenta de Sol ni tampoco “hacen falta médicos”. “Lo que hace falta es que se quieran quedar”, han asegurado.

En este sentido, han vuelto a afear a los populares que la reapertura de los urgencias extrahospitalarias “no se ha hecho con previsión” y que “las condiciones no son las mejores”. “Vamos sumando renuncias de médicos y vamos ya por 28”, han aseverado. Asimismo, han recordado que la reapertura “carece del mínimo material indispensable”. “En muchos lugares no había ni desfibriladores”, apuntan.

Tras la rueda de prensa, el total de las asociaciones han emitido un comunicado conjunto que han hecho llegar a EIPlural.com en el que detallan estas cuestiones y piden a la Comunidad de Madrid que retiren unas declaraciones que, aseguran, generan “un clima de animadversión” contra el sector que en las últimas semanas se ha reflejado incluso en amenazas por parte de algunos pacientes.

Entre el resto de puntos cuyo cumplimiento han solicitado los principales responsables del ámbito de la salud se encuentra “que se revierte la situación esta reestructuración hasta que se realice de forma consensuada por los profesionales, teniendo en cuenta la carga y continuidad asistencial, las peculiaridades geográficas y la conciliación familiar”, “que la implantación videoconsulta -que en los últimos días ha propuesto la presidenta regional- se realice siguiendo protocolos estrictos, como herramienta complementaria y en ningún caso sustitutiva de la presencia física del facultativo, ya que el contrato directo con el paciente y la exploración física es particularmente importante en situaciones de urgencia” y “ que se alcance una inversión en Atención Primaria del 25% de lo dedicado a Sanidad” , así como “el regreso a la jornada de 35 horas” y acabar con la jornada especial y de trabajadores nocturnos si se realiza más de un tercio de la misma en dicho horario.

Los profesionales de la región que se encuentra a la cola de España en Atención Primaria lamentan la manera en la que el Gobierno autonómico ha pretendido reabrir las urgencias,

destinando a los trabajadores del Servicio de Atención Rural (SAR) a los ahora denominados Puntos de Atención Continuada (PAC), lo que se traduce en querer abrir los centros con la mitad de personal. En ocasiones, denuncian, han sido avisados de forma precipitada y sin antelación, como prueba el "bombardeo" de SMS que desde la Consejería llegó a quienes se quisieran presentar voluntarios antes de la puesta en marcha del plan. Además, y a pesar del paro, los médicos están obligados a cumplir el 100% de servicios mínimos.

La sanidad a la huelga, y Ayuso por su gestión y contra la hemeroteca

Como era de esperar, la huelga del profesional de urgencias extrahospitalarias a la que el pasado martes se sumaban pediatras y médicos de familia deja sumergida a Madrid en una de las peores crisis sanitarias que se recuerdan. La Asamblea ha centrado en este apartado su debate de este jueves y ha sido de algún modo el preámbulo a lo que se espera el próximo domingo, cuando una especie de marea blanca recorrerá las calles del centro.

Pese a la hemeroteca y unas declaraciones que se parecen bastante a las que Ayuso vertió durante el covid con aquel "De repente, no hay médicos", la presidenta regional ha vuelto a acusar a la oposición de estar "detrás de la pancarta" y ha calificado de "política" la huelga por enésima vez. Pese a las informaciones, ha instado a sus contrincantes políticos a encontrar palabras con las que haya "pretendido atacar a un solo médico". "Ataco el uso que hacen sus allegados y los afiliados del sindicato que usted (a Mónica García) retuerce y manipula de la realidad", ha considerado.

https://www.elplural.com/autonomias/madrid/comunicado-conjunto-todas-asociaciones-medicas-desmienten-huelga-sea-politica-izquierda_300896102

AYUSO EVITA ASUMIR RESPONSABILIDADES POR LA HUELGA DE MÉDICOS Y CULPA A MÓNICA GARCÍA: "QUIERE REVENTAR LA SANIDAD MADRILEÑA"

La líder de la oposición rebate que el Gobierno regional está incapacitado para hacer frente a la crisis y solo sabe responder con insultos y bulos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha evitado este miércoles asumir cualquier responsabilidad por la huelga de médicos de Atención Primaria de la región, o el caos en la reapertura de las urgencias extrahospitalarias, y ha culpado de los paros profesionales a la líder de la oposición, Mónica García. "La líder de Más Madrid, con su sindicato Amyts, lo que quiere hacer es reventar el sistema público y la sanidad madrileña", ha dicho la líder conservadora antes de la celebración de la misa en honor de la Virgen de la Almudena. La afirmación, que intenta convertir un problema laboral en un problema político, ha causado indignación en su rival. "Cada día que pasa asistimos a un mayor deterioro de la sanidad en Madrid, a una mayor chapuza, y una buena muestra de ello es que el Gobierno de Ayuso está desorientado e incapacitado para hacer frente a esta crisis. Ayuso ha entrado en bucle del que no sabe salir si no es a través de los insultos y los bulos", ha respondido la líder de la oposición. "Haría bien en dedicar la mitad de energía que dedica a insultarme a intentar resolver el jaleo que ha provocado".

La misa de la Virgen de la Almudena se ha celebrado bajo una fina lluvia que calaba Madrid. El goteo era casi una metáfora de la cascada de quejas de los profesionales sanitarios. Son continuas. Incesantes. Si los médicos de las urgencias de los centros de salud llevan en huelga desde el lunes, el martes se anunció que los de Atención Primaria y Pediatría harán lo mismo a partir del día 21, y también de forma indefinida. Tras dos años en la primera línea de la lucha contra el coronavirus, los profesionales protestan por la falta de medios, los horarios extenuantes, y unas condiciones laborales que los obligan a tener unas agendas de pacientes inmanejables. Nada de eso, sin embargo, parece existir para Ayuso cuando habla con la catedral de la capital y el Palacio Real como telón de fondo.

"Hay dos circunstancias que son diferentes", opina. "Por un lado, están los médicos que están en su perfecto derecho a reclamar mejoras laborales, y otro, que es lo que está aquí sucediendo, que es única y exclusivamente una batalla política", argumenta. "Mi oposición está a la

desesperada”, afirma, intentando vincular las protestas profesionales con la buena marcha del PP de Madrid en todas las encuestas. “Ayer [por el martes] vimos cómo la ministra de Sanidad utilizaba hasta gráficos en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, usando los medios de todos los españoles para hacer propaganda contra la Comunidad de Madrid. O cómo la líder de Más Madrid, que es quien está detrás instigando todas estas huelgas con sus sindicatos, llama a estallar directamente el sistema público”, ejemplifica. Y remata: “La líder de Más Madrid, con su sindicato Amyts, lo que quiere hacer es reventar el sistema público y la sanidad madrileña”.

Esa afirmación, o la defensa de que haya 34 centros de urgencias extrahospitalarias sin médico —“para una picadura de avispa a lo mejor no hace falta que estén presentes médico, celador y enfermera”, dice Ayuso—, deja asombrados a muchos de los políticos asistentes. Que todas las encuestas reflejen que Ayuso está al borde de la mayoría absoluta es compatible con que su Gobierno empiece a acumular un problema tras otro. Con los médicos. Con los taxistas. Con los profesores. Y hay quien no lo olvida.

“Lo que pasa en Madrid es que todo es culpa de alguien menos de Ayuso”, ha ironizado Juan Lobato, el líder de los socialistas en la región, mientras se le pregunta una y otra vez sobre quién será el candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid. “Es culpa de los taxistas, de los profesores, de los médicos, de los jóvenes que son unos vagos, de los mayores que se quejan de las residencias... ¡Ya está bien!”, se ha quejado. “Esto es fruto de las decisiones que ha tomado Ayuso durante estos años, ojalá que rectifique”.

“Chapuza y negligente”

“La telemedicina es una herramienta al servicio de los profesionales, pero en ningún caso puede sustituir a esos profesionales”, ha alertado García, líder de Más Madrid y anestesista, sobre los centros de urgencias en los que la Comunidad quiere sustituir temporalmente a los médicos presenciales por consultas telemáticas. “Lo que propone Ayuso es que los médicos de un centro de urgencias atiendan a la vez a sus pacientes y por videoconferencia a los de otro centro sin médicos”, ha seguido. “Esto todo el mundo entiende que es una chapuza, y negligente”.

“Lo que no faltan son los insultos de Ayuso a los ciudadanos”, lamentó ya el martes Carolina Alonso, de Unidas Podemos. “La reapertura de las urgencias de Atención Primaria se ha demostrado una chapuza histórica”, añadió. “Está siendo un caos y un fracaso. Falta voluntad política para reconstruir la sanidad pública madrileña”.

Hace un año, Ayuso acudió a la misma ceremonia rodeada por preguntas sobre la guerra civil que empezaba a abrir en canal el PP: por aquellos días, la presidenta regional, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, luchaban por controlar el partido en la región. 12 meses después, se mantiene la constante: cerrado aquel capítulo con su victoria, la líder conservadora sigue abonada a la polémica.

<https://elpais.com/espana/madrid/2022-11-09/ayuso-evita-asumir-responsabilidades-por-la-huelga-de-medicos-y-culpa-a-monica-garcia-mas-madrid-quiere-reventar-la-sanidad-madrilena.html>

MADRID CONCENTRA LA MITAD DE LAS REBAJAS FISCALES DE LAS COMUNIDADES EN PLENA CRISIS POR LA SANIDAD

Los recientes anuncios de deflacciones y recortes en el IRPF de las autonomías se notarán más a partir de 2024 y supondrán el grueso del descenso en la recaudación

El terreno fiscal se ha convertido uno de los campos más explosivos de la batalla política. A los encontronazos entre el Gobierno y la oposición se suman los movimientos de los barones regionales. La avalancha de rebajas fiscales que han anunciado en los últimos tiempos, que se concentran en el IRPF y el patrimonio, supondrá una merma de 686 millones en la recaudación de 2023, año denso en citas electorales; en primavera se celebran comicios autonómicos y municipales, y en noviembre, generales. El mayor impacto lo causarán los recortes en el tramo

autonómico del IRPF. Estos supondrán un 80% del total, según recoge la Autoridad Fiscal (Airef) en su Informe sobre los proyectos y líneas fundamentales de los Presupuestos de las Administraciones Públicas 2023. Madrid, donde el plan del Gobierno autónomo para reabrir las urgencias extrahospitalarias se está revelando un caos, concentrará el grueso del descenso. En total, 335 millones de euros. Le sigue Andalucía. En 2024 el efecto de los cambios tributarios será aún más intenso: ascenderá a 2.000 millones, inflado sobre todo por las deflacciones y rebajas en el impuesto sobre la renta prometidos a la vuelta del verano por comunidades tanto del PP como del PSOE.

Estas modificaciones se impulsan gracias a la autonomía fiscal reconocida a las comunidades, que les permite crear tributos propios y les otorga amplia capacidad normativa sobre los impuestos estatales que tienen cedidos, como sucesiones y donaciones, patrimonio o actos jurídicos documentados. También les da margen de maniobra sobre el IRPF: pueden aprobar deducciones, tocar los mínimos personales y familiares y modificar la mitad de la escala impositiva del gravamen. Pero esta prerrogativa, a la vez, genera una carrera tributaria a la baja, que se ha exacerbado en la última década y ha causado tensiones con el Gobierno central y entre las mismas comunidades.

El impuesto sobre sucesiones y donaciones ha sido la primera víctima de la competencia fiscal autonómica. Hoy en día, lo que se paga por este tributo puede suponer diferencias de hasta el 100% en función del territorio. Después, el efecto dominó se extendió al tramo autonómico del IRPF y al gravamen sobre el patrimonio. Madrid ha sido la comunidad que, hasta el momento, más uso ha hecho de esta autonomía fiscal. Pero otras regiones del PP le están siguiendo la estela.

Los cambios en el IRPF adoptados por las comunidades de régimen común tendrán un impacto negativo de 450 millones en 2023, a los que hay que sumar las modificaciones aprobadas en Navarra y estimadas en unos 78 millones. En total, las modificaciones en este impuesto alcanzarán los 529 millones. Más de la mitad de esta cifra, 334 millones, se corresponde a la rebaja de medio punto en todos los tramos del IRPF aprobada por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Será la medida fiscal con más repercusión en términos absolutos el próximo ejercicio.

El desglose de la Airef se elabora a partir de los datos que confeccionan las mismas comunidades. Tras Madrid, la Andalucía de Juan Manuel Moreno (PP) es la que ha promovido los ajustes de mayor calado de cara a 2023: supondrán una disminución de 209 millones en los ingresos. La supresión del impuesto sobre el patrimonio, que empezará a bonificarse al 100% — hasta ahora, solo Madrid preveía un beneficio tan potente en esta figura—, restará 97 millones. Las rebajas en el IRPF, otros 24 millones, y en sucesiones y donaciones, 13 millones. El resto se debe a medidas de carácter temporal: la suspensión hasta 2025 del canon de mejora de las infraestructuras hidráulicas (71 millones) y varias bonificaciones en tasas (cuatro millones) hasta 2024.

Por otra parte, la disminución del tramo autonómico del impuesto sobre la renta y la bonificación del 25% en el tributo que grava el patrimonio aprobado por el Gobierno gallego reducirán la recaudación en 78 millones. También Castilla y León, Extremadura y Murcia han puesto en marcha políticas que impactarán negativamente en los ingresos. En cambio, la Comunidad Valenciana ha puesto en marcha iniciativas —incremento de las tarifas en el IRPF para rentas altas y de transmisiones patrimoniales— que comportarán un alza de 53 millones.

Si el análisis se hace impuesto por impuesto, todas las figuras fiscales, salvo transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados —que, al contrario de los demás tributos cedidos, han subido en la última década—, sufrirán ajustes a la baja. No solo se reducirán los ingresos por IRPF. También bajará en 114 millones la recaudación por patrimonio, en 10 millones la de sucesiones y donaciones, y habrá una merma de unos 100 millones por medidas de carácter temporal, que afectan sobre todo a tasas o cánones.

5.000 millones hasta 2026

El recuento de la Airef no incluye las deflacciones y rebajas en el tramo autonómico del IRPF recién anunciadas por varias comunidades para hacer frente al repunte de los precios. “Toda la nueva oleada de deflacciones en el IRPF se notará en 2024”, confirma Diego Martínez, profesor de la Universidad Pablo de Olavide e investigador de Fedea. El impacto de estos cambios será de unos 2.000 millones en 2024, 1.500 millones en 2025 y 1.100 millones en 2026, según valora la Airef a partir de las estimaciones de los gobiernos regionales. Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias concentrarán el mayor efecto. En Galicia, la ulterior ampliación de la bonificación del gravamen sobre el patrimonio al 50% restará otros 17 millones.

El impacto de estas rebajas se trasladará a los ejercicios futuros debido al diseño del sistema de financiación, que en 2023 repartirá a las comunidades los mayores recursos de la historia. Las entregas a cuenta se calculan por adelantado sobre las previsiones de ingresos, y a los dos años se echan cuentas. Las modificaciones fiscales aprobadas para 2022 se notarán entonces en la liquidación que se practicará en 2024, y en las entregas a cuenta de ese año; los cambios que afectan a la renta a partir de 2023 se incorporarán a las entregas a cuenta de 2024 y la liquidación que se efectuará en 2025.

El Gobierno central, que por su parte ha anunciado un alivio en el IRPF para los trabajadores de bajos ingresos, ha acusado a los barones autonómicos de privilegiar a los más ricos con las deflacciones generalizadas en el impuesto sobre la renta y las bonificaciones en patrimonio. Los líderes regionales del Partido Popular defienden que donde “mejor está el dinero es en el bolsillo del consumidor” y respaldan el postulado neoliberal de que las bajadas de impuestos impulsan la mejora de la recaudación. Algo que, según Martínez, no se producirá. “Los datos disponibles sobre rebajas fiscales anteriores van en contra de ese criterio. La recaudación de todos los tributos cedidos en Andalucía, por ejemplo, está yendo peor que la media nacional”, argumenta. “Esos vasos comunicantes no están bien justificados. Si bajo impuestos de un lado no los recupero de otro. Todos los indicios apuntan a la dirección contraria”.

<https://elpais.com/economia/2022-11-09/madrid-concentra-la-mitad-de-las-rebajas-fiscales-de-las-comunidades-en-plena-crisis-por-la-sanidad.html>

EL GOBIERNO DE AYUSO DEJARÁ DE INGRESAR 92 MILLONES MÁS POR BAJADAS DE IMPUESTOS EN PLENO CONFLICTO POR LA SANIDAD PÚBLICA

El consejero de Hacienda calcula que la Comunidad de Madrid ha dejado de ingresar 23.252 millones de euros desde que Ayuso es presidenta

El Consejo de Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha aprobado este martes un nuevo proyecto de ley que mermará la recaudación de las arcas públicas en la Comunidad de Madrid en más de 90 millones de euros. Su consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, ha anunciado que enviarán a la Asamblea un plan para la ampliación y creación de seis deducciones fiscales, de las que se beneficiarán alrededor de 700.000 madrileños, según sus cálculos.

“Con esta son ya seis las reducciones de impuestos en el mandato de Isabel Díaz Ayuso”, ha presumido Lasquetty, uno de los artífices de las políticas neoliberales de las últimas dos décadas en la región. El de la presidenta, ha considerado, “es sin duda el mayor impulso de bajadas de impuestos en la Comunidad de Madrid”, donde llevan “18 años seguidos bajando todos los impuestos y sin subir ninguno”. “Eso ha generado un ahorro para todos los madrileños de 60.000 millones de euros”, que ha cifrado en 23.252 desde que Ayuso es presidenta, lo que ha permitido aumentar los ingresos y “mejorar los servicios públicos”. Un teoría que aplican los economistas neoliberales pero que no cuenta con el respaldo de otros expertos.

Estas declaraciones, además, se producen en plena crisis en el Gobierno regional por la reestructuración de las urgencias extrahospitalarias, que ha provocado una huelga de sanitarios, así como dimisiones y ceses en el seno de la propia Consejería de Sanidad. “El mayor reto que en estos momentos tiene el Sistema Nacional de Salud es la falta de profesionales, pero eso no es un tema de la Comunidad de Madrid, es un tema de Estado”, dijo el vicepresidente Enrique Ossorio tras la reunión del gabinete madrileña, tratando de soltar una patata caliente y obviando

que las competencias en sanidad son autonómicas. La propia presidenta había reconocido el día anterior: “Médico que esté en paro, médico que esta misma tarde contrato”.

El proyecto de ley aprobado este martes, y que debe pasar por la Cámara regional, incluye varias deducciones como una de hasta 500 euros por el cuidado de ascendientes mayores de 65 años o dependientes que vivan con el contribuyentes o otra para la contratación de personas para el cuidado de hijos menores, que ya existe, pero que se aplicará también a los mayores y se amplían del 20% con un límite de 200 euros al 25% con un límite de 450 euros y hasta el 40% con un límite de 600 euros para familias numerosas.

En materia educativa, la Comunidad continúa apostando por los centros privados, con un aumento de las deducciones del 10 al 15% para el estudio de idiomas o la deducción de los intereses de los créditos que se soliciten para cursar estudios universitarios.

Además, el Gobierno de Ayuso establece una deducción para los propietarios que pongan en arrendamiento sus viviendas del 10% para gastos derivados del alquiler, como gestiones, adecuamientos, seguros, etc. Por último, el proyecto aumenta los beneficios para quienes compren acciones de empresas creadas en los últimos tres años, que pasan del 30% con un límite de 6.000 euros, al 40% con un límite de 9.000 euros.

“Las videoconsultas, cada vez más presentes”

Sobre el conflicto abierto con los profesionales sanitarios por la reapertura de las urgencias extrahospitalarias cerradas por la pandemia con el personal de los 41 servicios de atención rural, Ossorio ha acusado a la izquierda que “lleva décadas intentando intoxicar a la población con el falso mensaje de que la derecha quiere acabar con la sanidad pública”. “Los presupuestos [en Sanidad] no paran de crecer, casi un 11% más que en 2022”, dijo el vicepresidente. Un porcentaje que es cierto sobre el papel pero que, sobre el gasto real, suponen para 2023 unos 600 millones de euros menos que lo empleado en sanidad en la Comunidad de Madrid este ejercicio.

La solución del Ejecutivo regional para contener el caos de su reestructuración, la Consejería de Sanidad anunció este lunes que 34 de los 80 centros sanitarios de 24 horas que prometió abrir con equipos completos medicina, enfermería y celadores, lo harían sin médico y con un sistema de videoconsulta. “Es un plan transitorio, en tanto en cuanto persista la situación actual, pero nos tenemos que hacer a la idea de que las videoconsultas cada vez van a estar más presentes en la sanidad madrileña, española y de todo el mundo”, afirmó Ossorio.

https://www.eldiario.es/madrid/gobierno-ayuso-dejara-ingresar-92-millones-bajadas-impuestos-pleno-conflicto-sanidad-publica_1_9692072.html

AYUSO CESA AL NÚMERO DOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN PLENA HUELGA POR LAS URGENCIAS DE MADRID

El cese se produce “dentro del proceso de cambio para formar un nuevo equipo en la Gerencia de Atención Primaria”, según fuentes de la Consejería, tras las dimisiones en cascada de la semana pasada

La crisis en la sanidad madrileña continúa. Dimitió la gerente de Atención Primaria, dimitió su adjunta, dimitió la dirección asistencial del sureste y ahora Isabel Díaz Ayuso cesa al gerente adjunto de gestión y servicios generales de la Consejería. Un movimiento con el que la presidenta pretende taponar la herida abierta en su departamento de Sanidad en plena crisis por las urgencias extrahospitalarias y con una huelga indefinida que ha comenzado este mismo lunes.

La presidenta madrileña ha cesado al número dos del organigrama de Atención Primaria y responsable de Gestión y Servicios Generales, Pedro José Suárez Sánchez, según ha adelantado el diario Público y ha podido confirmar elDiario.es. Según fuentes de la Consejería, la decisión se produce “dentro del proceso de cambio para formar un nuevo equipo”.

El nombre de Suárez se suma a la lista de responsables de Atención Primaria que han dejado sus puestos en las últimas semanas, empezando por la máxima responsable, Sonia Martínez Machuca, a mediados de octubre; la adjunta, Nuria Fernández Cano, la semana pasada; y toda la dirección asistencial del sureste, el viernes. La diferencia es que en esta ocasión el número dos de Atención Primaria ha sido fulminado por la presidenta y el resto habían dimitido, en medio del caos por la reorganización de las urgencias extrahospitalarias.

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, enmarcó las dimisiones anteriores en “ajustes con el equipo” tras los nombramientos que se han producido en los últimos meses en su departamento. Con este cese, el Ejecutivo parece estar ajustando los hechos a su discurso, pese a que el propio Escudero asegurase este mismo viernes que “todos los profesionales y equipos directivos que quieren seguir trabajando en la Consejería de Sanidad, tienen las puertas abiertas”.

Con este cese, Ayuso cuenta desde ahora con una gerencia de Atención Primaria con la cúpula totalmente nueva. Si en el caso de Sánchez Machuca desde la consejería alegaron “motivos médicos y personales”, en el resto de dimisiones no han trasladado los motivos que han alegado los responsables. “He tenido la oportunidad de hablar con todos ellos”, llegó a expresar Escudero, que evitó responder sobre sus motivaciones. Así, será un equipo con personas nuevas a la cabeza quien deba gestionar una reestructuración de las urgencias extrahospitalarias que no han ideado y que está causando más de un quebradero de cabeza en Sol.

Tras semanas de tensión con los sindicatos, la Consejería puso en marcha su plan el pasado 27 de octubre. Este consistía en reabrir los 37 SUAP cerrados en marzo de 2020 por la pandemia con el personal de los 41 SAR, que seguían operativos, y personal voluntario, que, a la vista de los datos, no ha respondido como se esperaba. Tras once días, ha comenzado una huelga indefinida de profesionales afectados, en medio de un caos organizativo, y con la mayoría de servicios sin los equipos de medicina y enfermería completos.

https://www.eldiario.es/madrid/ayuso-cesa-numero-atencion-primaria-plena-huelga-urgencias-madrid_1_9690703.html

AYUSO RECTIFICA EL PLAN DE URGENCIAS POR TERCERA VEZ: AHORA PLANTEA MÉDICOS POR VIDEOCONFERENCIA

En el primer día de huelga de los facultativos, el Gobierno regional anuncia que 46 centros tendrán este servicio presencial y los 34 restantes, por vía telemática

La presidenta de Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes que quiere impulsar las videoconsultas o la telemedicina y potenciar el papel de las enfermeras para paliar el caos generado por su plan de reapertura de los centros de urgencias extrahospitalarias. Sanidad mantendrá abiertos los 80 centros 24 horas, dividiéndolos en 46 puntos presenciales con médico y enfermero y 34 con dos enfermeras y videoconsulta con un facultativo de la misma zona asistencial.

El nuevo planteamiento, que rechazan los profesionales, los sindicatos y la oposición, supone la tercera propuesta desde primavera que hace Ayuso sobre este servicio que cerró en 37 de los 80 centros con la pandemia (en Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP)) y rectifica un plan que no llevaba ni 15 días en marcha, demostrando su fracaso. El anuncio llega el primer día de la huelga de sus médicos tras más de una semana de crisis en los centros de urgencias extrahospitalarias, reabiertos en medio del caos por la falta de personal y los cambios de horarios y de centro de los profesionales.

“Queremos esta reapertura de todos los centros”, ha dicho Ayuso durante una entrevista la mañana de este lunes en Telecinco. “Lo que le he pedido a la Consejería de Sanidad es que siga hablando con los médicos, que hagan una planificación de guardias hasta final de año, para que se organicen”, ha seguido. “Hay que ver de qué manera pactamos las guardias, los refuerzos, les vamos a dotar de más material tecnológico”, ha añadido.

Y ha rematado: “Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones, con videoconsulta con el médico o con la enfermera, a los ciudadanos se les puede atender. La mayoría de los ciudadanos que acuden a estos centros suele revestir una complejidad media que se puede atender con la enfermería perfectamente”.

En un comunicado, Sanidad define como “transitorio” este modelo de teleasistencia, para el que la Comunidad ha adquirido 160 equipos. Y detalla: “Esta decisión se ha adoptado tras la ruptura unilateral por parte de los sindicatos de los acuerdos alcanzados en Mesa Sectorial para la puesta en marcha de esta red de puntos de continuidad asistencial, y hasta que se reconduzcan las negociaciones y la actual situación de conflictividad laboral”.

“Absolutamente inviable” y “una barbaridad”

Los sindicatos de la Mesa Sectorial ya han rechazado el nuevo modelo de urgencias con teleconsulta. “Nos preocupa seriamente el incremento del riesgo asistencial que esta gracia puede ocasionar hacia los usuarios”, ha lamentado el sindicato CC OO, que argumenta que la atención sanitaria de urgencias necesita una atención presencial, ya que debe haber una exploración física. “Es exigible, por tanto, la atención presencial en todas las urgencias, sin excusas”. El sindicato de enfermería Satse ha mostrado su “desacuerdo con que las enfermeras estén sin el respaldo médico necesario”.

Amyts, convocante de la huelga que ha empezado este lunes, ha opinado que la utilización de la videoconsulta en un punto de urgencias es “absolutamente inviable” y se ha preguntado quién va a atender esas videollamadas, si lo hará el personal médico reducido a la mitad o si la consejería tiene algún tipo de acuerdo con alguna empresa privada que todavía no ha contado. Para CSIT-UP, la telemedicina debe ser “un apoyo al proceso asistencial y en ningún caso un sustitutivo” mientras que, para UGT, la teleconsulta en urgencias es “la enésima barbaridad de esta consejería en su huida hacia delante”.

El reparto de los centros que tendrán asistencia médica presencial y los que no ya está hecho. En la nota, detalla que los ambulatorios con facultativo “se han priorizado tras el análisis pormenorizado de su actividad, la cercanía a otro centro u hospital, la concentración de población y la dispersión geográfica de los centros a los que prestan servicio”.

En Madrid capital, los centros de salud con videollamada son los de Avenida de Portugal (Latina), Barajas (Barajas), Carabanchel (Carabanchel), Doctor Esquerdo (Salamanca), Fuencarral (Fuencarral-El Pardo), Mar Báltico (Hortaleza), Orcasitas (Usera) y Pavones (Moratalaz). Y en el resto de municipios de la región: Aranjuez, Arganda del Rey, Cerro del Aire (Majadahonda), Chinchón, Collado Estación (Collado Villalba), Colmenar Viejo, El Escorial, Fuente el Saz, Jaime Vera (Coslada), La Fortuna (Leganés), Las Rozas, Manzanares el Real, Moralarzal, Morata de Tajuña, Móstoles, Paracuellos de Jarama, Parla, Perales del Río (Getafe), Pozuelo, Ramón y Cajal (Alcorcón), San Agustín del Guadalix, Torrelaguna, Torrelozanes, Valdemoro, Velilla de San Antonio y Villaviciosa de Odón. Los horarios de apertura para la atención continuada se mantienen sin cambios.

Los 44 centros “a los que prioritariamente se dotará de médico, enfermero y celador” en Madrid capital son: Ángela Uriarte (Puente de Vallecas), Espronceda (Chamberí), Federica Montseny (Puente de Vallecas), Hermanos García Noblejas (Ciudad Lineal), Las Águilas (Latina), Los Ángeles (Villaverde) y Paseo Imperial (Arganzuela).

Y en el resto de la región: Algete, Boadilla del Monte, Buitrago del Lozoya, Cadalso de los Vidrios, Campo Real, Cercedilla, Ciempozuelos, Colmenar de Oreja, El Arroyo (Fuenlabrada), Galapagar, Getafe, Griñón, Guadarrama, Humanes, La Cabrera, La Paz (Rivas-Vaciamadrid), Los Pedroches (Leganés), Luis Vives (Alcalá de Henares), Meco, Mejorada del Campo, Navalcarnero, Navas del Rey, Perales de Tajuña, Pinto, Rascafría, Reyes Católicos (San Sebastián de los Reyes), Robledo de Chavela, San Fernando (San Fernando de Henares), San Martín de Valdeiglesias, San Martín de la Vega, Soto del Real, Torres de la Alameda, Tres Cantos, Veredillas (Torrejón de Ardoz), Villa del Prado, Villanueva de la Cañada y Villarejo de Salvanés. A ellos la Comunidad suma el Centro de El Molar y la Casa de Socorro de Alcalá de Henares, que “ya mantenían su actividad habitual”, hasta sumar 80 servicios.

Las urgencias extrahospitalarias volvieron a funcionar a finales de octubre, tras pasar dos años cerradas durante la pandemia. Fue un desastre. Como la reorganización decidida por el Gobierno regional implica cambios de centro y horarios, al menos 30 sanitarios renunciaron a su puesto de trabajo antes de la reapertura, porque hasta ese momento realizaban horarios específicos para conciliar con sus situaciones personales y no podían asumir ese cambio de condiciones de un día para otro. Además, muchos profesionales comenzaron a recibir de madrugada los correos electrónicos en los que se les notificaban los nuevos destinos y horarios. Algunos, a las cuatro de la madrugada. Como consecuencia, la Consejería de Sanidad contabilizó más de un 40% de bajas entre el personal sanitario que se tenía que incorporar a los 78 centros sanitarios 24 horas. En el caso de los médicos, las ausencias alcanzaron un 60%.

La situación no ha mejorado con el paso de los días, en los que ha ido creciendo la tensión en las consultas. Una doctora fue agredida por un paciente en Guadarrama, lo que Ayuso condenó para luego afirmar que no tiene nada que ver con la reorganización del servicio que ha activado su Ejecutivo. “Mezclamos [las dos cosas] por el orden de los hechos”, dijo. Y durante la noche de Halloween, 26 de los 80 centros sanitarios 24 horas de la Comunidad de Madrid funcionaron sin un médico en el dispositivo, y 12 de ellos ni siquiera pudieron abrir.

Este último fin de semana, el plan de reapertura de las urgencias extrahospitalarias del Gobierno regional ha convertido el trabajo de los profesionales en un caos en su primera semana: sin planilla ni centro fijo y muchos hasta sin claves del sistema informático o uniforme. El domingo, 11 de los 78 Puntos de Atención Continuada (PAC) de la Comunidad de Madrid estuvieron cerrados —Aguacate (Carabanchel), Alcobendas/San Sebastián de los Reyes, Barajas, Coslada, El Escorial, Leganés (La Fortuna), Morata de Tajuña, Orcasitas (Usera), Parla (Isabel II), Pozuelo y Villarejo de Salvanés— y en 25 de ellos no hubo médico, según los datos recabados por la Plataforma Servicio de Atención Rural (SAR) y afectados por el cierre de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) del Summa 112. Solamente 38 contaban con el equipo completo y no había ni médico ni enfermera, solo celador, en el de San Fernando de Henares.

Esta información se ha recopilado a través de notificaciones de profesionales de los actuales PAC o centros sanitarios 24 horas, que se confirman por teléfono o mediante contacto personal. En este caso, el análisis no incluye datos de tres de los centros con los que no se ha podido contactar, Meco, Orcasitas y Pozuelo, aunque los dos últimos se presumen cerrados.

El plan de Más Madrid

Tras conocer lo que califica de “telechapuza”, la líder de Más Madrid, Mónica García, ha registrado una Proposición No de Ley (PNL), un contraplan de choque con cinco medidas y cuatro líneas rojas. Las líneas rojas del principal partido de la oposición son apertura de todos los centros de urgencias extrahospitalarias, que no esté “ni uno solo” abierto sin el equipo de profesionales al completo, que ninguno dependa de voluntarios y un acuerdo con sindicatos y entidades locales.

El primero de los cinco puntos para reflotar el servicio que plantea García, médica de profesión, es dejar los SAR como estaban en lugar de que sean estos profesionales los que atiendan tanto a los SAR como a los SUAP. “Lo que (más o menos) funciona, no se toca: devolver a los trabajadores de los SAR a sus puestos”, apunta. El segundo, crear una “bolsa de retorno y fidelización de profesionales, con 80 millones para la captación de profesionales para la Atención Primaria y las urgencias extrahospitalarias”. El tercero, garantizar que “en todo momento habrá al menos un equipo completo (médico, enfermera y celador) no voluntario”, el cuarto, “crear una bolsa para guardias voluntarias, con compromiso de una guardia al mes durante 12 meses”.

Y el último, crear una mesa de seguimiento de la reorganización de las urgencias que incluya a sindicatos, colegios profesionales, asociaciones de vecinos, la federación de municipios y el Gobierno autonómico. “Ni que decir tiene que cualquier formato de teleconsulta se hará para mejorar la calidad de la asistencia, no para suplir las carencias estructurales de personal”, ha añadido García sobre el planteamiento de Ayuso de cambiar asistencia presencial por telemática.

<https://elpais.com/espana/madrid/2022-11-07/ayuso-plantea-la-tercera-rectificacion-del-plan-de-urgencias-de-los-centros-de-salud-medicos-por-videoconferencia.html>

AYUSO AFIRMA QUE SÁNCHEZ PREPARA UN GOLPE CONTRA EL REY PARA INSTAURAR LA REPÚBLICA

La lideresa también asegura que el presidente del Gobierno quiere "meter en la cárcel" a la oposición "como en Nicaragua"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no cesa en su empeño de embestir contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha lanzado graves acusaciones contra él. Le ha culpado de preparar un golpe de Estado contra el rey Felipe VI para instaurar una República y de querer "meter en la cárcel" a los partidos de la oposición, "como en Nicaragua". "Se ha convertido en Le Pen de la izquierda europea", ha afirmado.

"Nos quiere en la cárcel, como en Nicaragua"

De esta forma se ha manifestado este lunes la lideresa en una entrevista en El Programa de Ana Rosa, donde ha defendido fuertes incriminaciones contra el jefe del Ejecutivo nacional. "Intenta meter impuestos en la Comunidad de Madrid ad hoc, intenta descapitalizar Madrid porque hay una agenda de cambiar España por la puerta de atrás, que pretende sacar los museos, que pretende no apostar por la Agencia Espacial Española que debería estar aquí...", ha comenzado a esgrimir.

Preguntada por si llamó al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para hacerle dar marcha atrás en las negociaciones para renovar el Poder Judicial, Ayuso ha asegurado que las acusaciones de "presiones" por su parte forman parte de la "maquinaria Tezanos" y ha cargado duramente contra el líder socialista.

"Sánchez se ha convertido en Le Pen de la izquierda europea. Lo hace con la política de impuestos... es insensato lo que pretende hacer este gobierno, que es perpetuarse en todas las instituciones", ha afirmado antes de lanzar la primera acusación grave. "Quiere tener en la cárcel a la oposición, como en Nicaragua. Con la oposición al cuello, que es lo que le hacen a Feijóo", ha insistido antes de insistir en que es un presidente "autoritario".

"[Feijóo] siempre ha sabido que esto era un camino hacia ninguna parte. Somos un partido unido y siempre le he manifestado que estaba disconforme. Buscan arrinconarle como si fuera un insolvente y ha ganado cuatro elecciones con mayoría absoluta", ha defendido una Ayuso muy complaciente con el líder de su formación instantes antes de volver a embestir con graves acusaciones, que pasan por "matar a la oposición" y acabar con la monarquía.

"Mi jefe, mi presidente, ha tomado sus decisiones y no soy quien para decirle nada. Él conoce mi opinión. La maquinaria Tezanos está en esto, en destrozando a la oposición como en las dictaduras. Hay que matar a la oposición para perpetuarse", ha afirmado para negar que en el PP haya un problema de liderazgo ni ningún intento por su parte de hacerse con el poder por encima de Feijóo.

A su juicio, Sánchez lidera "un plan para este país" que pasa por "sacar a la Guardia Civil", "expulsar a la oposición" o "descapitalizar Madrid". "Si alguien dice lo contrario y dice la verdad, Sánchez lo descapitaliza, mete a amigos y lo destruye", ha insistido para afirmar que "el hecho de que un Gobierno nacional atente contra una capital también hace que los ciudadanos en Madrid al final se acaben cansando".

Acusa a Sánchez de intentar derrocar al rey

Entre otras de sus manifestaciones destaca su respuesta ante los escándalos protagonizados por Juan Carlos I, una cuestión que Ayuso ha aprovechado para cargar contra el presidente del Gobierno. En primer lugar, la lideresa ha defendido que "el rey es una víctima más" de la gestión de la coalición, "algo más que quitar del medio", ante lo que ha asegurado Sánchez está preparando una suerte de golpe de Estado para derrocar al actual monarca, Felipe VI, e instaurar una República.

"Aquí lo que se pretende es recuperar una República, que otro Pablo Iglesias de la vida sea el que está por encima de todos. La Monarquía en España siempre ha significado igualdad, unidad,

porque hemos tenido una Monarquía garante que reinaba y no gobernaba”, ha afirmado ante una atónica Ana Rosa, quien le ha preguntado por “qué hacemos con el emérito”.

"Es una decisión que tendrán que tomar en la Casa del Rey. Desde luego es sabido lo que ha aportado el rey Juan Carlos a la historia de España en los momentos más complicados. Un país que después de estos 40 y pico años de reinado ha alcanzado unas cotas de seguridad, de prosperidad, como pocos países en el mundo”, ha afirmado Ayuso.

"Al frente de la corona está Felipe VI, un rey querido y reconocido por todos los españoles y que está haciendo una inmensa labor cuyo papel intenta el Gobierno de Sánchez ir ocultando", ha manifestado instantes antes de defender que "estamos en manos de un monarca ejemplar" y de acusar al Ejecutivo de "dar gasolina" a las polémicas de su padre.

"¿Qué pretende hacer el Gobierno con sus socios comunistas, cuyo líder ya es Sánchez? Ir poco a poco sacando noticias del pasado, ver de qué manera le dan gasolina a según qué cuestiones. Con la corruptela que hay montada en Cataluña, con la pobreza en la clase media, ¿crees que el problema es el rey Juan Carlos? El problema es otra cosa, pero hay que ir rompiendo a España poco a poco", ha cargado.

Curiosa reflexión sobre Franco

Durante la conversación, la lideresa también ha tenido tiempo para cargar Yolanda Díaz, titular de Trabajo, por la escena que protagonizó hace una semana tras retirar al dictador Francisco Franco la Medalla al Mérito en el Trabajo y en la que se le vio claramente emocionada. "Ver a la ministra Díaz llorando por quitar a Franco la medalla del trabajo es patético", ha afirmado antes de dejar una curiosa reflexión. "Ya le han sacado en helicóptero, ya está todo roto, ¿qué más quieren?", ha dicho en referencia a la exhumación del Valle de los Caídos.

https://www.elplural.com/autonomias/madrid/ayuso-afirma-sanchez-prepara-golpe-contr-rey-instaurar-republica_300692102

EL PSOE INSTA A FEIJÓO A QUE DESAUTORICE A AYUSO TRAS COMPARAR AL GOBIERNO CON EL RÉGIMEN DEL NICARAGÜENSE ORTEGA

"Quiere tener en la cárcel a la oposición, como en Nicaragua", ha afirmado la dirigente del PP en pleno colapso de la atención primaria en Madrid

Pilar Alegría le pide a la presidenta de la Comunidad de Madrid que se deje de "ayusadas y se ponga a trabajar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha convertido la confrontación con el Gobierno en una de sus señas de identidad y en una forma muy efectiva de desviar la atención de su gestión y de erigirse en un contrapeso de Pablo Casado o Alberto Núñez Feijóo, exlíder y líder del PP, respectivamente. Pero sus últimas descalificaciones contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, acusándolo de pretender emular al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, violando los derechos fundamentales más básicos de una democracia, han hecho estallar al PSOE. La dirigente madrileña, que atraviesa uno de los momentos más delicados de su mandato por el caos en la reapertura de las urgencias de la atención primaria —las cerró en la primera ola de la pandemia y a regañadientes ha vuelto a abrirlas a finales de octubre, pero con la mitad del personal—, ha acusado este lunes a Sánchez, sin prueba alguna, de ser un presidente "autoritario" que "quiere tener en la cárcel a la oposición, como en Nicaragua".

El PSOE ha exigido a Feijóo que desautorice a Díaz Ayuso y que esta a su vez rectifique "de inmediato" por unas declaraciones que, entienden en Ferraz, buscan desviar la atención de su "nefasta" gestión de la sanidad madrileña "intentando dinamitar la convivencia, intentando por tanto torpedear la democracia", según ha recalcado María Jesús Montero, vicesecretaria general de los socialistas y ministra de Hacienda. El líder del PP, de viaje en Argentina, no solo no ha desautorizado a la presidenta madrileña, sino que en su discurso en Buenos Aires ha dejado una frase de melodía similar, aunque confusa. Feijóo estaba hablando de que el Gobierno haya

situado a un exdirigente socialista, José Félix Tezanos, al frente del CIS, cuando ha reflexionado: “Ocurre con el CIS. Lo han hecho con el CNI , con el INE... Es evidente que desprestigiar las instituciones en el interior es un sistema para ir cambiando el régimen democrático, que se basa en una serie de pesos y contrapesos, de que hay instituciones que no las puede el Gobierno fagocitar, sino que son instituciones del Estado que han permanecer con independencia del Gobierno en cada momento”.

La número dos del PSOE ha acusado a Ayuso de “pasar una línea complicada, una línea roja llevando al PP hacia conductas más propias de [Donald] Trump o [Jair] Bolsonaro y, lo que es peor, con la conformidad de Feijóo. El PP es un partido de Estado y se tiene que comportar como tal y esperamos más temprano que tarde la rectificación por parte de Feijóo”, ha instado Montero.

En La Moncloa y en Ferraz atribuyen la salida de tono de la presidenta madrileña a su nerviosismo por la bronca sanitaria en su comunidad y también a su interés en acaparar la atención mediática aprovechando la gira de Feijóo por América Latina, en la que visitará Uruguay, Argentina, Chile y Ecuador. El presidente del PP no solo ha evitado corregir a Díaz Ayuso, sino que se ha basado en las críticas de Pedro Sánchez al dictamen del Banco Central Europeo contrario al impuesto a la banca para asegurar que un “tic” del Gobierno es “ocupar las instituciones”, durante una charla con el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

“Ya está bien de ayusadas”, había arremetido previamente la portavoz de la dirección federal y ministra de Educación, Pilar Alegría, que siempre mide con mucho cuidado sus declaraciones. “Lo que debería hacer la presidenta de Madrid es ponerse a trabajar, tiene mucho trabajo del de verdad, el que afecta a la vida de los madrileños. Y lo que no puede ser es que cada dos por tres nos salga con una ayusada nueva para que no se hable de lo importante”, ha referido en alusión a la huelga indefinida convocada por el sindicato de médicos (Amyts) en la sanidad pública de Madrid.

La protesta sanitaria está resultando tan comprometida para la imagen de Díaz Ayuso que la Comunidad ha rectificado ya el plan de las urgencias de los centros de salud por tercera vez: ahora plantea médicos por videoconferencia, algo inaceptable para los facultativos. “De lo que tenemos que hablar es de su incapacidad a la hora de gestionar lo que le corresponde como presidenta, que es tener una buena sanidad, una buena educación. Lo que desde luego no puede hacer es culpabilizar a los mejores profesionales que tiene este territorio como son los sanitarios o son los maestros, que es además lo que suele hacer una y otra vez esta presidenta”, ha sentenciado Alegría.

La presidenta de la Comunidad también ha afirmado que Sánchez pretende blindarse en La Moncloa, alimentando el discurso de que su Ejecutivo es ilegítimo, sin que se diferencie del ala más dura de la derecha y la ultraderecha. “Eso es lo que están pretendiendo: hay que destrozarse a la oposición porque en las dictaduras no puede haber ni oposición. Hay que matar también a la oposición porque yo me he de perpetuar, no sé con qué proyecto porque Sánchez no ha hecho nada bueno por España”, ha afirmado la dirigente popular en una entrevista en Telecinco. Díaz Ayuso sostiene que Sánchez busca “perpetuarse” con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que el PP lleva bloqueando cuatro años.

“Camino a ninguna parte”

Feijóo se echó atrás cuando el acuerdo para actualizar el órgano de gobierno de los jueces y cumplir con la Constitución estaba a punto de cerrarse después de recibir presiones internas, entre ellas de Díaz Ayuso. “El presidente de mi partido, con quien tengo una comunicación constante, siempre ha sabido que me parecía que era un camino a ninguna parte”, ha zanjado la dirigente madrileña, que la semana pasada ya aseguró que lo que pretendía el jefe del Gobierno con la renovación del Poder Judicial “es tener al PP en la cárcel”. “Sánchez se ha convertido en el [Marine] Le Pen de la izquierda europea. Lo hace con la política de impuestos... es insensato lo que pretende hacer este Gobierno, que es perpetuarse en todas las instituciones”, ha manifestado la dirigente conservadora. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, también se ha sumado a las protestas desde el Ejecutivo y ha tachado de “inaceptables” las declaraciones de la presidenta de Madrid: “No se puede comparar a un presidente democrático con otros regímenes. Si Feijóo no desautoriza a Ayuso y sus palabras totalmente fuera de lugar,

estará demostrando quién manda de verdad en el PP y terminará como Pablo Casado, fagocitado por la persona que hace esas declaraciones”.

Lejos de rebajar el tono, la dirigente conservadora se ha reafirmado y ha reiterado tras visitar una empresa en que el “propósito” del presidente del Gobierno no es otro que “erosionar todas las instituciones”, “tener un control férreo de la justicia” y “amordazar a los propios jueces”. “Para eso [en alusión al Poder Judicial] es para lo que pretende modificar las cosas y, por tanto, ese tinte totalitario se ha visto en muchos países empezando por Nicaragua, que es como ha funcionado: arruinando a la empresa, señalando a la banca, acabando con el empleo y teniendo a la gente en tensión continua, sacando a colación constantemente la Guerra Civil, promoviendo el enfrentamiento entre españoles. Esa es la agenda”, ha concluido.

<https://elpais.com/espana/2022-11-07/ayuso-compara-a-sanchez-con-el-regimen-del-nicaraguense-ortega-y-el-psoe-pide-a-la-presidenta-madrilena-que-se-centre-en-su-crisis-sanitaria.html>

CLAVES PARA UNA HUELGA CONTRA EL PLAN DE REAPERTURA DE LAS URGENCIAS DE LOS CENTROS DE SALUD DE MADRID

El caos derivado de la reestructuración del servicio ha provocado una crisis sin precedentes en la Atención Primaria de la región y Amyts convoca un paro indefinido desde este lunes

Este lunes comienza la huelga convocada por el sindicato de médicos (Amyts) por el caos derivado del nuevo plan de reapertura de las urgencias extrahospitalarias —80 centros puestos en marcha con la mitad de personal—, que ha provocado una crisis sin precedentes en la Atención Primaria de la Comunidad de Madrid. Los profesionales sanitarios (médicos, enfermeras y celadores) de este servicio han visto trastocados sus destinos y turnos de trabajo y muchos de los centros no han podido abrir por falta de equipos mínimos para atender a pacientes. Mientras, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha culpado a los sanitarios de boicotear la reapertura con fines políticos e impone servicios mínimos de un 100%. Estas son las claves para entender qué está pasando:

Cierre de las urgencias

Justo una semana después de que se decretara el estado de alarma por la covid-19, el 22 de marzo de 2020, la Comunidad de Madrid anunció el cierre de los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), que estaban en centros de salud de la capital y grandes municipios del cinturón (Alcobendas, Colmenar Viejo, Fuenlabrada, Pinto, Rivas-Vaciamadrid, Tres Cantos, Alcorcón, Las Rozas, Leganés, Móstoles o Torrejón de Ardoz) y que ofrecían asistencia por las noches y los fines de semana, cuando los ambulatorios cerraban. La medida pretendía, ante la crisis sanitaria, dedicar el personal sanitario de los SUAP a reforzar la atención médica. Fue distribuido entre otros destinos en el Hospital Enfermera Isabel Zendal (HEIZ) o las unidades de atención domiciliaria (UAD) provisionales creadas durante la pandemia. En cambio, los 41 Servicios de Atención Rural (SAR) siguieron abiertos.

Cambio en el modelo

En estos dos años y medio de cierre, la presión y las protestas de trabajadores y ciudadanos para reabrir los SUAP han sido constantes. Sobre todo, porque la ausencia de urgencias en los centros de Atención Primaria agravó aún más la saturación de los servicios de urgencias de los hospitales de la región. En junio, la Consejería de Sanidad anunció que los SUAP reabrirían, aunque con matices. El nuevo plan contemplaba la apertura de solo 17 de los 37 centros clausurados, siete de ellos sin médicos. Además, dejarían de denominarse SUAP para convertirse en puntos de atención continuada (PAC). El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, utiliza la palabra “reorganización” de las urgencias extrahospitalarias, pero para los sindicatos constituía un paso más en el desmantelamiento de la atención primaria.

Un paso atrás

Apenas 10 días después, y ante las protestas vecinales, Ayuso echa marcha atrás y asegura que todos los SUAP se abrirán de nuevo, aunque no especifica cuándo. “La presidenta ha escuchado a los madrileños”, subrayaba aquellos días el número dos del Gobierno regional, Enrique Ossorio. La rectificación se confirma a mediados de septiembre, cuando la presidenta se compromete a reunirse y negociar la reapertura con los sindicatos.

Plan definitivo

En octubre se acaba la incertidumbre. El día 20, la Comunidad de Madrid anuncia el plan definitivo. La reapertura afectaría a 78 centros —formados por los 41 Servicios de Atención Rural (SAR) y los 37 antiguos Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP)—, que pasan ahora a llamarse Centros Sanitarios 24 horas. Además, incluía dos nuevos centros a la red, situados en El Molar y Alcalá de Henares, para sumar 80.

Antes de la pandemia, entre los SUAP y los SAR, había repartidos 360 médicos. Pero, según el nuevo plan, ahora solo habrá 210, los que ya trabajaban en los SAR. Aquellos que trabajaban en los SUAP se dividen: los destinados al Zenda durante la pandemia —16— formarán parte de la plantilla de atención primaria, por lo tanto de los nuevos Centros Sanitarios 24 horas, y el resto, bajo la tutela de Summa 112 desde 2004, no volverán al puesto fijo que tenían en su centro de salud y seguirán en las unidades de asistencia a domicilio. El resultado: se reabren el mismo número de centros, con menos personal sanitario para atenderlos.

Convocatoria de huelga

Ante esta situación, los sindicatos llaman a la huelga indefinida a partir del 25 de octubre. Pero, mientras, negocian con el Gobierno regional. La víspera de la convocatoria, cuando todo parece abocado a los paros, la Comunidad de Madrid consigue arrancar 48 horas de tregua. Los sindicatos acceden a consultar con los 778 sanitarios afectados, entre médicos (228), enfermeras (270) y celadores (280), las condiciones pactadas. Finalmente, solo el sindicato de médicos (Amyts) decide no suscribir el nuevo plan planteado por la Consejería de Sanidad que sí firmaron los otros cuatro sindicatos de la mesa sectorial que negoció la reapertura: Satse, CC OO, CSIT UP y UGT. Estos últimos consideran que en la mesa de negociación han conseguido mejoras en las condiciones laborales de los sanitarios, aunque no así aumentar el número de efectivos hasta llegar a los que había antes de la pandemia. Esta es la línea roja de Amyts para no firmar.

La huelga se desconvoca y, al mismo tiempo, Amyts hace oficial otra convocatoria, la que comienza este lunes. Una semana después, el pasado viernes, los cuatro sindicatos firmantes deciden romper unilateralmente el acuerdo con el Gobierno regional a la vista del caos con el que ha arrancado la puesta en marcha del plan. “La Consejería no ha sido capaz de cumplir con ninguno de los compromisos adquiridos”, denunciaban Satse, CC OO, CSIT UP y UGT en un comunicado conjunto. Entre los incumplimientos, que no se han abierto los PAC de forma escalonada y que los trabajadores han sido desplazados de un centro a otro, incluso en una misma jornada y que algunos centros no han podido abrir al no contar con médico.

Caos el primer día de reapertura

Los 80 nuevos puntos de atención debían abrir sus puertas el pasado 27 de octubre, pero menos de 24 horas antes los profesionales —enfermeras, médicos y celadores— no sabían a qué centro debían acudir ni a qué hora. Hasta la madrugada, muchos sanitarios no recibieron los correos electrónicos en los que se les notificaban los nuevos destinos y horarios. A eso se sumaron las bajas: más de un 40% de todo personal que se tenía que reincorporar, según contabilizó la Consejería de Sanidad, y el 60% de los médicos. Pero, mientras el Gobierno regional atribuye todas las bajas a una supuesta enfermedad, los motivos también incluían incapacidad temporal para ocupar el puesto (por haberse comunicado un cambio de centro y de horario sin previo aviso), situaciones personales de distinta índole, permisos por incidencias familiares, etc. Unos 30 de los médicos deciden renunciar al puesto definitivamente, contando los que han pedido una excedencia.

Acusación de boicot

El resultado del desastre organizativo se traduce en que en muchos centros no había —ni hay todavía— médico, solo una enfermera o celador, y en otros ni siquiera había personal sanitario y no se abrieron. Según el acuerdo alcanzado en la mesa sectorial, cada servicio de urgencias debería contar como mínimo con un médico, una enfermera y un celador para atender a los pacientes, pero en la práctica no ha sido así. Por ejemplo, durante la noche de Halloween, 26 de los 80 Centros Sanitarios 24 horas de la Comunidad de Madrid funcionaron sin un médico en el dispositivo, y 12 de ellos ni siquiera pudieron abrir. Este sábado, solo 13 han contado con personal médico.

Después del caos y la desesperación de ciudadanos y trabajadores, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y diferentes representantes de la Comunidad de Madrid, incluida Ayuso, deslizaron la idea —de la que no se han retractado— de que los médicos están organizándose para boicotear el nuevo plan, y han reiterado varias veces que investigarán una a una las bajas solicitadas. “Todas estas incapacidades temporales han sido derivadas a las autoridades”, dijo el miércoles el portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio.

Mientras, la Consejería de Sanidad ha sido incapaz de resolver los problemas de funcionamiento. Cuando se va a cumplir la primera semana del nuevo plan, todavía hay servicios que no pueden abrir por falta de efectivos, otros donde el personal mínimo —médico, celador y enfermera— no se completa o no hay planillas de trabajo. A eso se suma que, tras haber estado dos años cerrados, en algunos centros la equipación ha desaparecido o es deficiente.

Una doctora agredida

Debido a la falta de personal, los pacientes que encuentran el centro de salud cerrado deben acudir a otro o incluso a un hospital, si no hay médico. Las quejas son constantes y la tensión se eleva. Hasta el punto de que el domingo 30 de octubre, una doctora del centro sanitario 24 horas de Guadarrama, Guadalupe Pajares, es agredida por un hombre al grito de “¡os lo tenéis merecido!” y “os tenemos que dar de hostias por vagos”. Según reprocha ella, de baja desde entonces, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, da rienda suelta a este tipo de actitudes con sus acusaciones sin pruebas de boicot. El presunto agresor ya ha sido puesto a disposición judicial. Pero Ayuso intenta desligar esta agresión de las consecuencias del nuevo plan. “Se pasan la vida llenando los medios de comunicación de personas afines que lo único que quieren es boicotear la sanidad porque lo único que buscan es el caos”, dice Ayuso en la sede parlamentaria. Ningún cargo político se ha puesto en contacto con la médica para ofrecerle su apoyo.

Denuncia a Ayuso

Mónica García, la líder de Mas Madrid, anunció el jueves en la Asamblea que ha denunciado ante la Dirección General de Inspección, Ordenación y Estrategia Hospitalaria el caos en la reapertura de las urgencias extrahospitalarias. La presidenta madrileña apenas se inmutó ante el anuncio. Según sus palabras, la responsabilidad del caos ya está dirimida. La culpa la tiene, dice, el “terror sindical, el terror político” de la izquierda. Pero todos los grupos políticos, incluido Vox, reprochan a la presidenta que ponga a los profesionales sanitarios en la diana.

Dimisiones en bloque

El último capítulo de la crisis en las urgencias extrahospitalarias se conoce el viernes. La noche del jueves, todos los miembros de la dirección asistencial sureste de Madrid —hay siete, norte, noroeste, este, sureste, sur, oeste y centro— registran su dimisión en bloque debido al caos en la reapertura de los PAC. El resto de direcciones asistenciales llevan días planteándose hacer lo mismo, según fuentes de la Consejería. También la gerente adjunta de Asistencia Sanitaria de Atención Primaria, Nuria Fernández de Cano, deja el cargo de forma voluntaria. A media tarde el consejero de Sanidad convoca a los medios a un briefing, un encuentro para explicar lo que está ocurriendo en las urgencias. La crisis es completa.

<https://elpais.com/espana/madrid/2022-11-07/claves-para-una-huelga-contr-el-plan-de-reapertura-de-las-urgencias-de-los-centros-de-salud-de-madrid.html>

AYUSO SE ENFRENTA SOLA AL DESGASTE POR LA CRISIS DE LA SANIDAD EN MADRID

La presidenta regional se ha puesto a la cabeza de un fallido plan de reapertura de las urgencias que da argumentos a la oposición para movilizar a los votantes a siete meses de las elecciones autonómicas y que hasta Vox critica

Finalizaba el mes de junio cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, optó por quedarse sola ante el peligro. “Todos los centros de urgencias de atención primaria serán abiertos nuevamente”, anunció, 10 días después de que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, expusiera su plan para reabrir solo 17 de los 37 servicios de urgencias cerrados durante la pandemia. Era una rectificación en toda regla, que la presidenta asumía en solitario. “La presidenta ha escuchado a los madrileños”, subrayaba aquellos días el número dos del Gobierno regional, Enrique Ossorio. Cinco meses después, el Ejecutivo afronta una crisis de múltiples aristas por el caos desatado por esa decisión y la fallida reorganización del servicio, que incluye reformular toda la red con 80 centros sanitarios 24 horas cambiando sobre la marcha los turnos y los centros de trabajo de los profesionales. Esta situación ha dado argumentos a la oposición para movilizar a la izquierda con la vista puesta en las elecciones de mayo de 2023, mientras Vox, único socio posible del Gobierno de Ayuso, ha optado por no respaldarla. En esta situación crítica, el afán de los portavoces gubernamentales por personificar en la figura de su líder cada decisión del Ejecutivo la coloca ahora a ella en la diana.

“De eso va todo esto: de desgaste político, no de sanidad”, se indignaba esta semana una fuente que cuenta con la confianza de la presidenta. “Mantenemos el plan y no se prevén cambios en la Consejería”, añadía sobre el futuro de Ruiz Escudero, que ya estuvo a un milímetro de salir del Gobierno durante la crisis del coronavirus, hasta que Ayuso interpretó que perder al portavoz de sus decisiones más polémicas era acusarse a sí misma de haberse equivocado. “Algún error habrá en la reapertura de las urgencias, pero no para esta reacción claramente política”, zanjaban.

El Gobierno se ha movilizado con actos públicos y encuentros privados con periodistas para defender una decisión personalísima de su presidenta con una estrategia claramente definida: convertir un conflicto laboral en un enfrentamiento político; acusar a la izquierda de orquestar una campaña con la complicidad de los sindicatos; y negar cualquier problema de calado provocado por unos cambios que han llevado a la huelga a los profesionales. Tres ejemplos:

¿Qué dimite al completo la dirección de toda la red de centros de salud del sudeste de Madrid? No pasa nada grave: “No hay ninguna dimisión en bloque”, aseguraba Ruiz Escudero este viernes. Poco después, y ante la evidencia de que la dimisión había pasado por registro, el consejero se echaba para atrás: “Sí, es verdad, han dimitido”.

¿Que casi una decena de altos cargos de Sanidad han dejado sus puestos desde julio? Circulen: “El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cambiado 40 ministros y no es un problema, forma parte de las [dinámicas de las] estructuras”, defendía el titular de Sanidad, sin aclarar de dónde sale esa cifra.

¿Que faltan médicos? Tampoco es para tanto: “La situación de no tener médicos se producía antes de esta reapertura, y está protocolizada”, contestaba el viernes Ruiz Escudero, que fue el número dos de la última lista electoral de Ayuso. Después, reconoció el problema, admitió su preocupación por las 6.000 jubilaciones que calcula que se van a producir en la próxima década, e intentaba disolver la cuestión regional en una de escala nacional dependiente del Estado. “Hay una campaña feroz de la izquierda que está generando temor a la hora de acudir a estos puntos”, acusaba finalmente.

Una tesis que se hace eco de los argumentos de Ayuso. “Cada vez que a la izquierda le va mal en esta Comunidad, recurre a la sanidad pública, porque solo saben vivir de sembrar el terror y el miedo entre los ciudadanos, empezando por los mayores y las personas que más lo necesitan”, afirmó la presidenta regional el jueves en la Asamblea de Madrid.

Esa interpretación de la polémica en clave política resume que la acción del Gobierno está mimetizada con los intereses electorales del PP. Si el partido conservador explotó el anuncio de la reapertura de los centros de urgencias extrahospitalarias por la vía de enviar a sus candidatos municipales a hacerse fotos y vídeos ante las puertas —la izquierda pierde una sede electoral, venía a ser el eslogan—, ahora digiere las críticas mientras calcula cómo afectará a su balance en las urnas.

Y, sin embargo, el problema laboral y organizativo existe. Por eso dimiten profesionales y gestores: desde julio han dejado la Consejería, por distintos motivos, tres directores generales, dos gerentes, un gerente adjunto, y el viceconsejero Antonio Zapatero. Por eso hay sanitarios que renuncian a sus empleos: al menos 30 lo hicieron incluso antes de la reapertura de las urgencias, incluyendo excedencias, porque hasta ese momento realizaban horarios específicos para conciliar con sus situaciones personales y no podían asumir el cambio de condiciones de un día para otro. Y por eso la tensión es máxima en la Consejería de Sanidad, donde se buscan cambios operativos que permitan detener la hemorragia y reconducir la situación.

No es sencillo, se reconoce en el departamento de Ruiz Escudero, enfrentado a un jeroglífico. Por ejemplo, la orden presidencial de ampliar las horas de servicio de los centros depende de que haya voluntarios para trabajar los fines de semana y los festivos. Y hacerlo con la mitad de los sanitarios que antes de la pandemia.

Mareas blancas

“Es una chapuza”, lamenta Mónica García, la portavoz de Más Madrid, que se dio a conocer al gran público durante 2020 y 2021, cuando aprovechó su conocimiento del sistema sanitario como médica anestesista para criticar las decisiones del Gobierno de Ayuso en la pandemia. Meses después, y con las elecciones en el horizonte, los estrategas de su partido coinciden en que la crisis desatada por las urgencias extrahospitalarias le ofrece a la líder de la oposición una oportunidad inmejorable para volver a su terreno predilecto.

“Le pido a Ayuso que rectifique”, reclama Juan Lobato, el líder del PSOE en la región, que ha movilizado a todos los alcaldes socialistas para denunciar la situación de los centros de salud y las urgencias extrahospitalarias, con el objetivo de contraponer el anuncio de la reapertura con la dura realidad.

“Las dimisiones por la nefasta gestión sanitaria de Ayuso son insostenibles ya hasta para los suyos”, remata Alejandra Jacinto, la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea.

Pero nada de eso inquieta a Ayuso. La presidenta se mueve como pez en el agua en la confrontación con la izquierda, que además moviliza a su electorado. Sin embargo, el pleno del jueves dejó una escena mucho más inquietante para sus intereses. En medio de la negociación entre el PP y Vox para aprobar los Presupuestos de 2023, la extrema derecha lanzó las críticas más duras posibles a la gestión sanitaria del Gobierno.

“Nos hemos encontrado con el caos”, dijo la diputada (y médico) Gádor Joya. “Dicen ustedes que van a mirar con lupa, una por una, cada baja que ha habido esta semana”, siguió sobre el 60% de ausencias de médicos contabilizado por el Ejecutivo. “Les animo a ello, y también a que si comprueban que alguna de ellas ha sido por estrés laboral causado por lo que acaban de hacer, que asuman sus responsabilidades”, acusó. “Han pasado de llamarles héroes a llamarles villanos. Tienen un problema, cómo gestionan los recursos humanos en la sanidad madrileña. La mejor forma de quitarse un problema es resolverlo, y ustedes están demostrando que hoy no saben hacerlo”.

No es una acusación cualquiera. Un hilo invisible, hecho de cargos compartidos e ideología, une los Gobiernos de Esperanza Aguirre y Ayuso. Mientras la diputada de Vox pronuncia esas palabras en dirección a Ruiz Escudero, también las escucha su compañero de bancada Javier Fernández-Lasquetty. El hoy titular de Economía y Hacienda dimitió hace casi un decenio como consejero de Sanidad por la movilización de los profesionales en contra de la privatización de un

puñado de hospitales regionales. El recuerdo de las mareas blancas, todo un fantasma para el PP, y más a las puertas de unas elecciones, vuelve ahora a la política madrileña.

<https://elpais.com/espana/madrid/2022-11-06/ayuso-se-enfrenta-sola-al-desgaste-por-la-crisis-de-la-sanidad-en-madrid.html>

AYUSO, TRAS LAS DIMISIONES EN LA ATENCIÓN PRIMARIA: “NOSOTROS LEVANTAMOS HOSPITALES MIENTRAS OTROS LOS BOICOTEAN”

La presidenta madrileña presume de su gestión sanitaria tras una semana caótica en las urgencias extrahospitalarias de la región

Tras una semana de caos sin precedentes en el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid, con dimisiones, equipos sin personal médico o de enfermería o traslados forzosos, Isabel Díaz Ayuso no solo ha presumido este sábado de la buena gestión de su equipo, también ha atacado a quienes supuestamente boicotean los hospitales madrileños. “Nosotros somos del proyecto que levanta hospitales mientras otros los boicotean”, ha dicho la presidenta regional para cargar contra una izquierda, que, ha dicho, “anda furibunda”.

“Lo único que sucede en la izquierda madrileña en estos días es que anda furibunda, una y otra vez boicoteando los servicios públicos de todos. Anda furibunda porque una vez más ven que la Comunidad de Madrid les va a dar la espalda. Nosotros somos del proyecto que levanta hospitales mientras otros los boicotean”. La presidenta madrileña ha elegido estas palabras para su discurso de cierre del congreso de las Nuevas Generaciones del PP en la Comunidad de Madrid, en el que ha recurrido a sus habituales referencias dialécticas: la libertad y las críticas al Gobierno de Sánchez, al que acusa de estar “embrutecido”.

Ayuso ha presumido de levantar hospitales tras una semana en la que el caos ha sacudido la sanidad madrileña, en concreto la atención primaria. Todo a costa del plan para la reestructuración de las urgencias que puso en marcha el pasado 27 de octubre, tras semanas de tensión con los sindicatos. El programa contemplaba reabrir los 37 antiguos Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), que el Gobierno regional cerró en marzo de 2020 por la pandemia.

Para ello, la Consejería decidió utilizar al personal de los 41 Servicios de Atención Rural (SAR) y a aquellos profesionales de Atención Primaria que se prestasen a realizar jornadas complementarias. El compromiso del Gobierno regional era que todos estos puntos contaran con equipos completos de medicina, enfermería y celadores. Según los datos de la Plataforma SAR y Apertura SUAP, aquella primera noche solo 28 de los 78 puntos de urgencias contaban con los tres estamentos. Cambios de planillas, crisis de ansiedad, centros sin el material necesario o directamente cerrados, traslados forzosos, viajes en Uber en mitad de la noche, equipos sin personal médico, han protagonizado la primera semana de reapertura, informa David Noriega.

Esta semana, cuando se sucedían las complicaciones en los centros de salud y en las guardias de urgencias, la dirección de atención primaria del sureste de Madrid, que se encarga de coordinar los ambulatorios de esa zona, presentó su dimisión en bloque. Ese anuncio seguía a la cadena de renuncias que goteaban en los últimos días. Horas antes, había presentado su dimisión la gerente adjunta de Atención Primaria, Nuria Fernández de Cano, tan solo una semana después de la incorporación de la nueva gerente, Almudena Quintana.

“Batalla cultural”, “libertad” y críticas a Sánchez

Ayuso ha aprovechado su discurso ante los jóvenes de su partido para agitar su argumentario. Según ha dicho, la izquierda, no solo en España sino “a ambos lados del Atlántico”, trata de establecer una “nueva lucha de clases” que enfrenta a “identidades sexuales, hombres contra mujeres; homosexuales contra transexuales”, etc. “Tratan de dividirnos a todos”, ha dicho en un discurso en el que ha repetido muchas veces las palabras “cadenas”, “libertad” y “división” y ha animado a librar todas esas batallas como la de la cultura y el lenguaje.

La presidenta madrileña no está tan preocupada por la situación en la sanidad madrileña como por el presidente del Gobierno, a tenor de sus mensajes en el evento de este sábado. Ayuso ha cargado contra Pedro Sánchez y su Ejecutivo, que, dice “intenta llevarse todo por delante” ante el “miedo” de que su mandato pueda terminar pronto. Según ha opinado, está haciendo “un gran daño a todos”.

Para justificarlo, ha recuperado una serie de manipulaciones sobre el rumbo económico del país. Ayuso ha interpretado que todas las instituciones están diciendo, incluido el Banco de España, que el Gobierno “va a arruinar” a la sociedad; que sus datos “no son creíbles” y que “no se puede topar a los bancos”. Todo ello pese a que las previsiones más pesimistas prevén un crecimiento de más de un punto para el año que viene y que el vicepresidente del Banco Central, el exministro Luis de Guindos, ha reconocido que el informe de la institución que “pedía un análisis exhaustivo” sobre el impuesto a la banca ni siquiera es “vinculante”.

Por último, ha lanzado varios mensajes con la mirada seguramente puesta en las próximas elecciones municipales. La dirigente popular ha esgrimido que la izquierda “durante muchos años” dijo a los ciudadanos del sur de Madrid que si sufrían la desigualdad era por el lugar donde habían nacido. “Lo que pasaba es que estaban gobernados por los mismos que en Andalucía; han empeorado la calidad de vida de muchas personas de muchos municipios del sur de Madrid”, ha protestado en referencia a uno de los pocos segmentos electorales que aún se le resiste al PP en la Comunidad. Ayuso ha concluido con un mensaje de moderación: “Tenemos la razón y tenerla no siempre es fácil”. “Se vienen meses difíciles”, ha vaticinado.

https://www.eldiario.es/madrid/ayuso-dimisiones-atencion-primaria-levantamos-hospitales-boicotean_1_9685427.html

DIMITE EN BLOQUE LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE LOS CENTROS DE SALUD DEL SUDESTE DE MADRID POR EL CAOS GENERADO EN LAS URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS

La Consejería de Sanidad frena la dimisión de las otras seis direcciones asistenciales que desde hace días se planteaban también dejar el puesto. Este jueves también renunció la gerente adjunta de Atención Primaria

La organización sanitaria de la atención primaria se desmorona como un castillo de naipes. A la huelga de los médicos convocada por el sindicato Amyts para el lunes, los 78 centros sanitarios 24 horas que llevan una semana reabiertos sin médicos, enfermeros o celadores (o ninguno de ellos) y el caos provocado por un plan en el que la mayoría de los sanitarios no cree —porque consiste en abrir los mismos centros que antes de la pandemia, pero con la mitad de los profesionales— se suma ahora una cascada de dimisiones en la gerencia de Atención Primaria. La noche del jueves, todos los miembros de la dirección asistencial sudeste de Madrid (hay siete: norte, noroeste, este, sudeste, sur, oeste y centro) han dimitido en bloque ante el desastre de la reapertura de las urgencias extrahospitalarias, que afecta a los trabajadores de los antiguos 40 Servicios de Atención Rural (SAR), que ahora tienen que ocupar también, además de sus centros, los puestos de los antiguos 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), cerrados durante la pandemia.

Se trata del director médico, la directora de enfermería y los seis responsables de los centros de salud del sudeste que, en definitiva, son los que responden ante los directores de los centros de salud de esta zona, que abarca los municipios del sudeste de la comunidad, alrededor del eje de la carretera Nacional III, el Corredor del Henares y de los distritos de la capital de Moratalaz, Retiro, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas y Vicálvaro. Están completamente superados por la situación provocada desde el 27 de octubre, cuando arrancó el nuevo plan. La dimisión fue inscrita en bloque por registro. En el resto de direcciones asistenciales llevan días planteándose hacer lo mismo, según fuentes de la Consejería. Escudero ha conseguido este jueves, en una reunión de urgencia, frenar al menos durante unos días la cascada de renuncias con la promesa de que van a intentar “mejorar el plan actual”. La sensación interna es de que el plan marcha producto de la improvisación.

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha admitido que se ha reunido con el equipo que ha dimitido y ha asegurado que se ha recogido “cuál es su sentir” y les han abierto “las puertas” para volver siempre que quieran.

El hecho de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya culpado a los sanitarios que están de baja de un supuesto boicot ha terminado de encender la llama de un ambiente que lleva tiempo caldeado en Atención Primaria. Es más, este jueves también se conoció que dejaba el cargo de forma voluntaria la gerente adjunta de Asistencia Sanitaria de Atención Primaria, Nuria Fernández de Cano. Según ha podido saber EL PAÍS, Fernández de Cano argumentó que su decisión era “irrevocable” ante la “imposibilidad de seguir ejecutando las instrucciones que se reciben por parte de la gerencia” de Atención Primaria.

“La estructura de la Comunidad de Madrid es muy grande en cuanto a su tamaño”, ha respondido el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, sobre las últimas dimisiones. “Hay más de 800 directivos. Se ha cambiado el viceconsejero hace unos meses, el director general, la gerente de atención primaria, y es lógico que se vayan haciendo ajustes con el equipo. No es ninguna dimisión en bloque, además es gente que ha trabajado durante la pandemia, lo cual les agradezco muchísimo el trabajo y forma parte de la vida diaria de esa consejería”, ha argumentado Escudero, sin mencionar que el equipo inscribió su renuncia por registro. Unas horas después de esas declaraciones, sí, Escudero admitió de nuevo ante la prensa que la dimisión había existido y que tras reunirse con el equipo al completo les trasladó que tendrían las puertas abiertas para volver siempre que quisieran.

Antes de la dimisión de la anterior gerente de Atención Primaria, que se produjo en octubre, y de la gerente adjunta de asistencia sanitaria en Atención Primaria, ya en noviembre, los problemas de la sanidad regional se traducían ya en constantes cambios en la estructura de la Consejería. Así, desde julio ha habido al menos cinco salidas (tres directores generales, un gerente y el viceconsejero Antonio Zapatero); ocho cambios de funciones y al menos otros seis nombramientos.

El nuevo plan de las urgencias extrahospitalarias, puesto en marcha hace ocho días, ha sumido en el caos a toda la atención primaria, que ya estaba saturada desde antes de la pandemia. De hecho, datos recientes publicados por el Observatorio de Salud Mental del Colegio de Médicos de Madrid (Icomem), tras realizar una encuesta a los médicos de atención primaria y urgencias extrahospitalarias, muestran unas cifras desoladoras de los profesionales. Casi el 92% de los facultativos indican haber sufrido o sufrir agotamiento emocional, el 86% el síndrome de despersonalización (cuando se empieza a notar menos empatía por los compañeros y los pacientes) y el 73% una baja realización personal. Esos números hablan del conocido burnout o desgaste profesional.

Es la radiografía de la salud mental de los doctores con los que cuenta la Comunidad de Madrid para ocupar los puestos de los centros sanitarios 24 horas, los que provienen de los SAR y los de los centros de salud, llamados a ocupar de forma voluntaria las guardias de los sábados y los días festivos. Una voluntariedad que no ha sido tal en multitud de casos, ya que ante el 57% de las bajas de los médicos de los SAR, la Comunidad de Madrid ha llamado insistentemente a sanitarios de los centros de salud para que fueran a trabajar. Algunos de ellos, al no responder, hasta han recibido los mensajes de la Consejería a través de sus familiares o parejas.

Todas estas circunstancias han provocado un aluvión de quejas por acoso laboral, presiones fuera de lugar y llamadas a altas horas de la noche que han tenido que gestionar los propios responsables de las áreas asistenciales, que han visto cómo en una semana la situación ha empeorado mucho más de lo que ya estaba.

Por ahora, Escudero pospone la posibilidad de hacer una “autocrítica”, aunque no renuncia a hacerlo. “Para que nosotros podamos hacer una evaluación certera y acorde a la situación real, para eso necesitamos que sea una situación conforme el escenario que plantea el plan. Hasta estos momentos hemos tenido una situación de mayor número de ausencias por parte de los profesionales, estamos con una huelga y lógicamente no se ha podido expresar en su máxima expresión el plan”.

<https://elpais.com/espana/madrid/2022-11-04/dimite-en-bloque-la-direccion-asistencial-sureste-de-atencion-primaria-y-renuncia-la-gerente-adjunta.html#?rel=lom>

LA IDEA DE MADRID PARA CAMBIAR LA SELECTIVIDAD QUE HA ACABADO POR NO DEFENDER NI EL EJECUTIVO REGIONAL

Los responsables educativos entierran la propuesta para establecer una doble prueba de la Evau

La propuesta de establecer una doble prueba de Selectividad, propuesta por la Comunidad de Madrid, ha quedado completamente descartada este miércoles en la Conferencia Sectorial de Educación, el organismo que reúne a los responsables educativos del Gobierno y las comunidades autónomas, según han señalado a EL PAÍS fuentes presentes en la misma. La idea consistía en que, además de los exámenes que organiza cada Ejecutivo autonómico, se celebrara otra prueba para aquellos alumnos que quisieran estudiar la carrera en una comunidad diferente a la suya. Es decir, una Selectividad b que fuera común para el conjunto del país. La Comunidad de Madrid envió la propuesta al Ministerio de Educación y pidió que se incluyera en el orden del día de la sesión de este miércoles. La frialdad con la que fue recibida fue, sin embargo, tan amplia, que finalmente ni siquiera Madrid la ha defendido. En lugar de ello ha abogado, como las otras cuatro autonomías gobernadas por el PP, por una sola prueba para todo el país, otra idea de difícil aplicación (ningún Gobierno, independientemente de su color, la ha aplicado), aunque más clásica, que ha sido rechazada por los consejeros de Educación de las 12 comunidades que no están en manos de los populares.

Los responsables educativos de Madrid han decidido no dar la batalla por su propuesta de la doble prueba conscientes de que la opinión general, tanto autonómica como del Ministerio de Educación y de los sindicatos docentes, era que se trataba de un planteamiento a la vez complicado y poco útil para alcanzar el fin que se afirmaba perseguir, que era reforzar la igualdad de oportunidades de los estudiantes. Por un lado, los currículos del Bachillerato son distintos entre territorios —legalmente cada uno puede fijar la mitad de los contenidos, aunque en la práctica la diferencia es menor—, y diseñar dicha prueba única sería complejo, y también lo sería evitar que el resultado no fuera más favorable para el alumnado de unas comunidades que para el de otras. Y por otro, el esfuerzo logístico de la doble prueba tampoco daría como fruto un gran avance en la creación de un modelo más equitativo, ya que los estudiantes seguirían compitiendo por plazas en las mismas universidades habiéndose presentado a pruebas distintas. Incluso introduciría una variable nueva, y es que dos chavales del mismo territorio que se matricularan en una universidad de su comunidad podrían haber realizado pruebas diferentes, ya que la propuesta de Madrid contemplaba que aquellos que antes de presentarse no tuvieran claro si solicitarían una plaza en su territorio o en otro, se examinasen de la Selectividad b, y que ello les sirviera tanto si se marchaban como si decidían quedarse.

El hecho de que los exámenes de la Selectividad sean distintos en cada autonomía (los redactan especialistas de las universidades locales, en colaboración con docentes de secundaria) y que la calificación obtenida permita acceder después a carreras de toda España da lugar regularmente a un debate sobre la conveniencia de un modelo de examen único, que el PP solo ha abanderado cuando ha estado en la oposición en el Gobierno central. “La dificultad del examen no puede depender del lugar donde viva el estudiante”, ha señalado este miércoles el partido en un comunicado, en el que adelantaba que no apoyará la reforma de la Selectividad si no se atiende su petición.

El 60% de la nota de la parte general de la Evau, sin embargo, no procede de los exámenes de la Selectividad, sino de las calificaciones obtenidas en el Bachillerato, lo que supone que la mayor diferencia en las notas de los chavales no procede de la comunidad en la que estudian, sino del centro educativo al que asisten. La escuela concertada pone, por ejemplo, 6,6 puntos porcentuales más de sobresalientes que la pública, y la privada pura, nueve. Y el PP nunca ha planteado una revisión de la falta de equidad generada por el centro en el que estudian los alumnos.

Prueba más homogénea

El Ministerio de Educación también aspira a hacer una Selectividad más homogénea entre territorios, aunque por otra vía. El documento que el Gobierno presentó este verano sentando las bases de cómo será la nueva Evau —una prueba adaptada a la actual ley educativa, la Lomloe, y por tanto a un sistema de aprendizaje más competencial y menos memorístico— incluía la previsión de crear “grupos de trabajo con representación de las distintas administraciones, universidades e institutos o agencias de evaluación (autonómicos)” con el fin de fijar “un marco común de diseño de la prueba así como de su corrección”. Para evitar las disparidades dentro de las propias comunidades autónomas, que casi todos los años generan alguna polémica, el documento adelantó que cada ejercicio de la nueva Selectividad deberá estar respaldado por una “guía de codificación” con las respuestas correctas.

La nueva Selectividad la estrenará en junio de 2024 el alumnado que ahora estudia primero de Bachillerato, según los planes del ministerio. Y la transformación de la Evau se completará en la prueba que se realice en junio de 2027 (aunque este miércoles País Vasco, Cataluña y alguna comunidad gobernada por los socialistas han propuesto alargar el periodo de transición un año más, hasta 2028, una cuestión que será debatida en los próximos meses). Los detalles del cambio están siendo ahora discutidos por técnicos de ordenación y evaluación del ministerio y las diferentes comunidades. El calendario previsto contempla que en la primera mitad de 2023 se presenten modelos de los exámenes y de sus criterios de calificación, que se realicen pruebas piloto y un ensayo con una muestra de alumnos. El objetivo es que al inicio del curso que viene, los estudiantes que entonces estén en segundo de Bachillerato y sus profesores tengan claro cómo será los exámenes de acceso a la Universidad que se celebrarán cuando concluyan las clases.

<https://elpais.com/educacion/2022-11-02/los-responsables-educativos-entierran-la-propuesta-de-madrid-de-establecer-una-doble-prueba-de-selectividad.html>

AYUSO ARRASTRA A LAS COMUNIDADES DEL PP A UNA GUERRA POR LA NUEVA SELECTIVIDAD

Las comunidades populares aprovechan una conferencia sectorial sobre otros temas para reivindicar una prueba única en toda España, mientras Educación propone cambiar el examen a un formato menos memorístico

El Gobierno está preparando un cambio de calado en la Evau (la antigua Selectividad), pero el PP no se lo va a poner fácil. El Ministerio de Educación ha tenido una muestra este mismo miércoles en la Conferencia Sectorial, que sienta en la misma mesa a los ejecutivos regionales con el central para discutir temas educativos. Los consejeros de Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia y Castilla y León han reprochado al departamento que dirige Pilar Alegría que esté trabajando en una reforma que no tiene en cuenta su principal reivindicación: una prueba única y homogénea para toda España. También le han pedido que retrase su implantación.

La reunión sectorial no estaba convocada para eso —el orden del día contemplaba cuestiones presupuestarias menores y la convocatoria excepcional de estabilización de empleo que tienen que hacer las comunidades—, pero comunidades como Madrid y Andalucía aprovecharon el foro para elevar su queja. “El modelo que propone [el ministerio] es una nueva pérdida de calidad del sistema educativo, con una prueba de madurez que mezcla asignaturas y que generará todavía más discriminación y disparidad entre los alumnos”, explican su rechazo fuentes de la Comunidad de Madrid.

Durante la conferencia, los consejeros del PP se han mostrado tajantes en su reivindicación de una prueba única. La responsable castellanoleonés, Rocío Lucas, ha explicado que “no puede haber 17 pruebas distintas para un distrito universitario único”, modelo que ha tachado de “injusto”. Lucas ha lamentado que Educación “no esté escuchando las propuestas de Castilla y León” y ha anunciado que si el ministerio sigue en la misma línea se “desvinculará” del diseño de la nueva prueba.

En la misma línea se ha manifestado Galicia. El consejero Román Rodríguez ha ahondado en que no se están recogiendo sus propuestas y ha hablado de “desigualdad” y de “oportunidad perdida”.

Madrid ha añadido que la prueba de madurez, sobre la que pivotará el nuevo modelo, es “imprecisa” y supone una “devaluación” por acaparar la mayoría de la nota final.

El PP lleva tiempo reivindicando una prueba única para toda España para que haya igualdad de oportunidades entre todo el alumnado, según el argumentario popular. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sostuvo hace unos días que “hay una gran queja por parte de universitarios madrileños que nos explican cómo, al ser una región de acogida, en muchas ocasiones se ven perjudicados porque al no tener el mismo nivel de exigencia y de calidad educativa en el resto, no en todas, y haber sistemas educativos distintos en otras regiones, ellos luego se quedan sin plazas, con muy buenas notas”.

Madrid está sopesando, según Ayuso, “establecer dos tipos de pruebas de acceso a la universidad: una para aquellos estudiantes que quisieran acceder a cualquier universidad del territorio nacional y otra para los que quisieran cursar estudios en su propia región”, informa David Noriega. Desde CCOO tienen dudas de que esto se pueda hacer legalmente.

Menos exámenes y una prueba de madurez

La propuesta en la que trabaja Educación pretende reducir a la mitad el número de exámenes e introduce una prueba que han llamado “de madurez académica” en la que “se valorarán principalmente las destrezas asociadas al ámbito lingüístico [castellano, lengua propia si la hubiera y lengua extranjera], y que pretende evaluar principalmente la madurez académica del alumnado”. La idea es pasar a un modelo competencial, en la línea de la Lomloe, más alineado con lo que se hace en Europa y que no marque el curso académico tanto como lo hace ahora, cuando se dedica todo el 2º de Bachillerato básicamente a preparar específicamente el examen.

La prueba de madurez será el eje sobre el que gire la Evau y contará por un 75% de la nota final. Según el borrador del ministerio, este examen “constará de dossier formado por una serie de documentos (textos, imágenes, infografías, gráficos, tablas, audiovisuales, etc.) que girarán todos ellos en torno a un mismo tema, y en el cual se pedirá al alumnado que realice un análisis desde diferentes aspectos y perspectivas, respondiendo a diversos tipos de preguntas (cerradas, semiconstruidas y abiertas). Se pretende valorar la capacidad del alumnado para analizar, valorar, extraer información o interrelacionar toda esa documentación, de forma más o menos guiada a través de las preguntas o propuestas”. El 25% restante de la nota lo otorgará un tercer examen de una materia de modalidad.

La prueba de madurez se divide en tres fases: en la primera se analizará el “dossier” que recibirá cada alumno (documentos en varios formatos: textos, fotografías, etc.) durante 15 minutos. Después habrá una serie de preguntas, algunas en idioma extranjero, con un carácter más cerrado, destinadas a evaluar la “capacidad de pensamiento crítico, reflexión y madurez del alumnado”, para la que dispondrán de 40 minutos. Por último, tres preguntas abiertas que exigirán que los aspirantes construyan y desarrollen una respuesta durante otros 45 minutos.

Antes de que se implante este modelo definitivo habrá una fase transitoria que constará de tres exámenes (Historia de la Filosofía, Historia de España y una materia a elección del alumno según el itinerario que haya elegido en el Bachillerato) más la prueba de madurez en formato abreviado. Cada uno de estos exámenes valdrá el 25% de la nota. Esta fase transitoria durará tres cursos.

Ambos modelos tendrán una segunda fase, llamada de admisión, que será voluntaria y en la que intervienen las universidades –como sucede ahora, cada centro aplica un coeficiente de ponderación de cada una de estas pruebas extra para sus grados–. Esta última fase la utiliza cierto alumnado para subir nota para acceder a los grados más demandados y permite a los estudiantes optar a un 14 de nota máxima.

“En ningún caso se plantea desarrollar una prueba unificada”

El ministerio sostiene que su nuevo modelo, aún en fase de borrador, permitirá avanzar hacia una cierta uniformidad en la prueba, aunque no habrá el examen único que reivindica el PP. El grupo de trabajo que está elaborando la propuesta está recabando ahora las ideas de las

comunidades, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (Crue) y otros actores para elevar su propuesta definitiva. Lo que no está previsto que cambie es la ponderación del examen respecto a la nota final: un 60% la nota del Bachillerato, un 40% la de la Evau.

Para el PP este rechazo a la prueba única es una línea roja que provocará que no apoye la reforma, aunque su visto bueno realmente no es necesario para implementarla porque se aprueba como un Real Decreto. Sí hará falta que lo valide el Congreso, sin embargo, para lo que el Gobierno necesitará el apoyo de sus socios habituales en la Cámara Baja, que al menos en la parte de nacionalistas e independentistas no pasa precisamente por establecer una prueba homogénea.

Por el momento, Educación está trabajando la vía del diálogo. El número dos de Alegría, José Manuel Bar, ha mantenido contactos con algunos representantes autonómicos y el grupo creado para acabar de diseñar la prueba está trabajando en unos criterios de elaboración y corrección de los exámenes que sean homologables para dotar de cierta uniformidad a la prueba. Para el PP, medidas insuficientes y que abundan en la “falta de objetividad”, ha lamentado la consejera castellanoleonera Lucas.

De momento, esta primavera habrá una prueba piloto para “calibrar” el nuevo modelo una vez que esté listo. Si todo va como prevé Educación, la fase transitoria empezará en junio de 2024 y el modelo definitivo se implantará tres cursos más tarde, para los estudiantes que cursen 2º de Bachillerato en 2026-2027.

https://www.eldiario.es/sociedad/ayuso-arrastra-comunidades-pp-guerra-nueva-selectividad_1_9676455.html

AYUSO PONE EN LA DIANA A LOS SANITARIOS POR EL CAOS EN LA REAPERTURA DE LAS URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS DE MADRID

El Ejecutivo madrileño evita asumir responsabilidades, envía a la inspección el 60% de bajas de profesionales y la presidenta acusa a la oposición de alentar un boicot

Ayuso: "Durante la pandemia boicotearon el Zendal y ahora los mismos políticos organizan huelgas ni boicots"

El séquito que este miércoles espera a las puertas del hospital Gregorio Marañón a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se topa con una incomodidad inesperada. Dos ancianos avistan a la líder conservadora, y se ponen a gritar. “¡Sanidad Pública! ¡Y médicos en las urgencias extrahospitalarias, que en Rivas no hay!”, reclaman. Un hombre interpone su cuerpo entre los ciudadanos y la presidenta y dicta sentencia con voz carrasposa: “¿De Rivas venís? Pues ya sabemos por qué venís”, dice, como estableciendo una conexión entre las protestas y que ese municipio esté gobernado por IU. Es un argumento premonitorio. Tras seis días de caos, tensión y desesperación en la reapertura de centros de urgencias extrahospitalarias, que fueron cerrados hace dos años, Ayuso reduce a una movilización de carácter político las protestas laborales de los profesionales por la falta de personal, los cambios de turnos y centro anunciados de madrugada, y la reformulación de toda su jornada de trabajo con preavisos de apenas unas horas.

“Lo que nadie entiende es que haya habido un 60% de bajas sobrevenidas”, dice la presidenta de la Comunidad de Madrid durante una rueda de prensa en el nuevo bloque quirúrgico del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. “Nadie entendió lo que ocurrió durante las fechas más importantes de la pandemia, cuando se boicoteó un hospital público como el Isabel Zendal con pacientes dentro, y nadie entenderá que los mismos políticos estén ahora mismo llamando a huelgas o boicots, que como digo a quien perjudica directamente es al paciente y al ciudadano”, argumenta. “Les pido que tengan más responsabilidad”, reclama. Y remata: “Es evidente que hay una inmensa mayoría de los profesionales sanitarios que quieren seguir trabajando con total normalidad y que hay una parte política que intenta boicotarlo todo. [Esta parte política] no quiere que la sanidad pública avance”.

Sin embargo, las quejas de los profesionales no representan a una minoría ruidosa. Así, el sindicato de médicos (Amyts) sigue luchando para conseguir que vuelvan a sus puestos todos los profesionales que antes de la pandemia atendían a los pacientes que acudían a las urgencias de 78 centros de salud (41 Servicios de Atención Rural (SAR) y los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP).

Además, prácticamente al mismo tiempo que Ayuso reconocía la labor de los sanitarios, el portavoz de su Gobierno, Enrique Ossorio, ha anunciado que el Ejecutivo ha llevado a la inspección laboral los expedientes que han justificado el 60% de bajas de los profesionales, dando por hecho que todas son bajas por enfermedad, cuando muchas son renuncias al puesto de trabajo por incompatibilidad.

“Todas estas incapacidades temporales han sido derivadas a las autoridades correspondientes en inspección sanitaria para que se proceda a su revisión”, ha dicho el portavoz gubernamental, Enrique Ossorio, evitando usar la palabra “boicot”, pues se le entiende perfectamente sin que lo haga. “Si las bajas normales, habituales, son del 10%, [y ahora] del 60%, y se comunican con muy poco tiempo para poder reaccionar, todos podemos valorar de qué estamos hablando, no hace falta que yo lo diga. Que cada uno ponga el adjetivo o el sustantivo que considere oportuno”.

Las urgencias extrahospitalarias volvieron a funcionar el pasado jueves. Fue un desastre. Como la reorganización decidida por el Gobierno implica cambios de centro y horarios, al menos 30 sanitarios renunciaron a su puesto de trabajo antes de la reapertura, porque hasta ese momento realizaban horarios específicos para conciliar con sus situaciones personales y no podían asumir ese cambio de condiciones de un día para otro. Además, muchos profesionales comenzaron a recibir de madrugada los correos electrónicos en los que se les notificaban los nuevos destinos y horarios. Algunos, a las cuatro de la madrugada. Como consecuencia, la Consejería de Sanidad contabilizó más de un 40% de bajas entre el personal sanitario que se tenía que incorporar a los 78 Centros Sanitarios 24 horas. En el caso de los médicos, las ausencias alcanzaron un 60%.

Condena de la agresión

La situación no ha mejorado con el paso de los días. Una doctora fue agredida por un paciente en Guadarrama, lo que Ayuso ha condenado este miércoles, para luego afirmar que no tiene nada que ver con la reorganización del servicio que ha activado su Gobierno. “Mezclamos [las dos cosas] por el orden de los hechos”, ha dicho. Y durante la noche de Halloween, 26 de los 80 Centros Sanitarios 24 horas de la Comunidad de Madrid funcionaron sin un médico en el dispositivo, y 12 de ellos ni siquiera pudieron abrir. Datos que han provocado las protestas de la oposición de izquierdas en la Asamblea de Madrid.

“Chapuza, caos y cobardía. Son las palabras que resumen perfectamente el plan de reapertura”, ha lamentado Mónica García, la portavoz de Más Madrid, durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la junta de portavoces en la Asamblea. “La chapuza: a alguien se le ocurrió que se podían abrir 80 puestos con el personal de 40”, ha empezado a enumerar. “Como consecuencia de la chapuza, el caos: un 15% de estos centros han estado cerrados durante el último día de este puente, un 50% no ha tenido médico, un 25% celador, y un 20% enfermera”, ha detallado. “Y la cobardía: al PP no se le ocurre otra cosa que echarle la culpa a los profesionales, acusándoles de vagos”.

“El PP señala con dedo inquisidor a los sanitarios”, se ha quejado Juan Lobato, del PSOE. “El balance es el que anunciamos: es una muerte anunciada de la atención primaria y las urgencias en muchísimos municipios de la Comunidad”, ha continuado. “Ayuso entró con 80 centros de urgencias, cerró 40, despidió a 6.000 sanitarios y ahora quiere reabrir 80 con la mitad de personal, lo que matemáticamente es imposible”, ha seguido. “Las consecuencias son muy graves: por primera vez en la historia, millones de madrileños han estado este fin de semana sin urgencias en sus barrios”.

“Esta reapertura de los servicios de urgencias es una auténtica chapuza histórica”, ha dicho Alejandra Jacinto, de Podemos. “Lo que debería hacer Ayuso es pedir perdón a los sanitarios y

sanitarias, y reabrir los centros en condiciones, lo cual pasa por incrementar la plantilla y mejorar las condiciones laborales de los sanitarios”.

La presidenta, por su parte, ha evitado criticar a los profesionales. Incluso les ha alabado. Pero de su argumentación cabe deducir a quién culpa del desastre de la reapertura. Y no es a nadie de su Gobierno.

<https://elpais.com/espana/madrid/2022-11-02/ayuso-pone-en-la-diana-a-los-sanitarios-por-el-caos-en-la-reapertura-de-las-urgencias-extrahospitalarias.html>

AYUSO DISFRUTA DE UNOS DÍAS DE DESCONEXIÓN EN CANTABRIA

La presidenta madrileña ha mostrado algunas fotografías de su viaje por la comunidad.

Ayuso carga contra los que "frivolizan" sobre las drogas: "Nos van a llevar al fracaso social".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha elegido Cantabria como destino para desconectar y disfrutar de unas breves vacaciones. Ayuso ha aprovechado para conocer algunos de los atractivos turísticos de la zona, como el Parque de Cabárceno o la cueva de El Soplao.

Este domingo, la dirigente madrileña ha compartido en su cuenta de Instagram varias fotografías que dan una idea de cómo está siendo su ruta por la comunidad cántabra.

Entre otros lugares que Ayuso ha inmortalizado en la red social se encuentran la plaza Velarde de Santander, el Centro Botín, la Grúa de Piedra o el Palacete del Embarcadero, puntos de interés turístico de la capital cántabra que se encuentran en el entorno del paseo marítimo de la ciudad.

La presidenta madrileña también ha posado en otra de las fotografías junto a un perro, y ha mostrado auténticas estampas de Cantabria, como una vista de su verde paisaje o unas vacas pastando junto a un crucero de piedra.

Según recoge El diario montañés, la presidenta madrileña ha podido conocer además las cuevas del monte Castillo, ubicadas en Puente Viesgo y que contienen arte rupestre paleolítico. Ayuso se ha mostrado "impresionada" por este conjunto que en 2008 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

<https://www.20minutos.es/noticia/5072740/0/ayuso-disfruta-dias-descanso-cantabria-santander/>